



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y JURÍDICA

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Colombia y Chile 2010-2020

Trabajo de Grado para optar al título de:

Politóloga

Presentado por:

María Alejandra Ospina Bonilla

Dirigido por:

Joaquín Gregorio Tovar

Santiago de Cali, junio del 2021.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS	3
LISTA DE ABREVIACIONES.....	4
INTRODUCCIÓN	5
De cómo se hizo este estado del arte: La metodología de análisis documental utilizada	9
Contextualización: Las cifras que evidencian la crisis.....	12
Capítulo 1 Los antecedentes de una crisis: breve historia del neoliberalismo en la región.....	18
1.1 El Consenso de Washington.....	25
Capítulo 2 Enfoques sobre el neoliberalismo y la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020	33
2.1 Enfoque Estructuralista latinoamericano e Institucionalista	34
2.2 Enfoque Marxista	42
2.3 Enfoque Funcionalista.....	48
2.4 Enfoque Estructural-Funcionalista.....	50
2.5 Enfoque de la Teoría de la Elección Racional	53
Capítulo 3 La insatisfacción social y la protesta social	56
3.1 El ciclo de protestas en Colombia.....	61
3.1.1 La desigualdad: contexto, trasfondo y catalizador	68
3.2 Salud: segmentación, desigualdad y privatización.....	69
3.2.1 Colombia	69
3.2.2 Chile.....	71
3.3 Educación y neoliberalismo	73
3.3.1 Colombia	73
3.3.2 Chile.....	76
3.4 Desigualdad y pobreza	79
3.4.1 Colombia	79
3.4.2 Chile.....	82
Discusión final.....	88
CONCLUSIONES	92
Referencias bibliográficas.....	98
ANEXOS	106

Anexo 1: Distribución de enfoques teóricos en estudios sobre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia.....	106
Anexo 2: Producción de estudios sobre neoliberalismo y protesta social por décadas y enfoques	107
Anexo 3: Distribución del eje “neoliberalismo determina o no el ciclo de protestas 2010-2002”	107
Anexo 4: Distribución eje “neoliberalismo determina o no determina el ciclo de protestas 2010-2020” por enfoques teóricos	108
Inventario bibliográfico producción de estudios sobre neoliberalismo y protesta social Chile y Colombia 2010-2020.....	109

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS

Gráfica 1: Matriz metodológica	10
Gráfica 2: Comportamiento Producto Interno Bruto (PIB) Chile 2010-2019	15
Gráfica 3: Comportamiento Producto Interno Bruto (PIB) Colombia 2010-2019	16
Gráfica 4: Producto Interno Bruto. América Latina 1979-1980	20
Gráfica 5: Motivos de las luchas sociales en Colombia 2011-2015	64
Gráfica 6: Motivos de las luchas sociales en Colombia 2016-2019	65
Gráfica 7: Los resultados académicos han mejorado, pero la equidad y las disparidades regionales siguen siendo un reto	74
Gráfica 8: Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB. Procedente de fuentes públicas y privadas.....	75
Gráfica 9: Proporción del PIB (gráfico de líneas) y % de Gasto privado en Educación Superior (gráfico de barras) en Chile y OECD, 2000-2016	78
Gráfica 10: Transferencias monetarias y su impacto en la desigualdad	79
Gráfica 11: Número esperado de generaciones que necesitaría la descendencia de una familia en el 10% inferior para alcanzar el ingreso medio en la sociedad.	80
Gráfica 12: Evolución de la población en situación de pobreza monetaria según datos del DANE	81
Gráfica 13: La pobreza ha descendido de forma significativa, pero sigue siendo elevada	83
Gráfica 14: Pobreza multidimensional Chile acumulado nacional.....	84
Gráfica 15: Coeficiente de Gini. Chile 2017	85
Tabla 1: Afiliados registrados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)	70
Tabla 2: Distribución de personas según seguro de salud y decil de ingreso, año 2017	72
Tabla 3: Apellidos y posición social en cohortes nacidas entre 1940 y 1970.....	87

LISTA DE ABREVIACIONES

AL: América Latina

AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones

BM: Banco Mundial

BDLS: Base de Datos de Luchas Sociales- Cinep

CAE: Crédito con Aval del Estado

CEPAL: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe

CINEP: Centro de Investigación y Educación Popular

DANE: Departamento Nacional de Estadística

EOP: Estructura de Oportunidad Política

FMI: Fondo Monetario Internacional

IED: Inversión Extranjera Directa

ISI: Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones

LGE: Ley General de Educación

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMC: Organización Mundial del Comercio

TDM: Teoría de la Dependencia Marxista

TER: Teoría de la Elección Racional

INTRODUCCIÓN

Chile y Colombia son países latinoamericanos cuyas economías vienen presentando sostenidos niveles de crecimiento económico (OCDE, 2019). Ambos países han tenido como modelo económico de desarrollo el neoliberalismo, y han guiado su política monetaria de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Incluso, han formado juntos alianzas de integración regional como la Alianza del Pacífico, donde con otros gobiernos como México y Perú, se han propuesto definir acciones comerciales conjuntas con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico. En ese clima de aparente prosperidad económica, en ambos países persiste un ciclo de la protesta social con antecedentes que se remontan al 2010. Como el título de este trabajo lo indica, “el baile de los que sobran¹”, la canción insignia de las protestas chilenas —que ilustra de forma realista las diferencias de clases existentes entre la sociedad latinoamericana—, los antecedentes de estas protestas dan cuenta de una apabullante desigualdad monetaria y social que agotó la legitimidad del modelo económico neoliberal.

En ese sentido, este estado del arte pretende aportar una guía de abordaje a la discusión del desarrollo económico, el modelo neoliberal y su relación con la protesta social con especial énfasis en el caso chileno y colombiano. La delimitación de estos dos países se da más con un propósito de tipo ilustrativo que comparativo. Ilustrativo por dos elementos: el primero, la amplia tradición de movilizaciones populares de ambos países en los últimos diez años, que pueden dar cuenta del fenómeno que se pretende exponer aquí, siendo esta la relación entre la insatisfacción social² y la aparición de la protesta social derivada del neoliberalismo; y el segundo, por las convergencias en

¹ La canción “El baile de los que sobran” de Los Prisioneros, es una canción escrita en 1986 que 30 años después sigue vigente en la evidencia que hace de la existencia de las desigualdades contra las que se protesta en Chile y Colombia: *♪A otros enseñaron secretos que a ti no/ A otros dieron de verdad esa cosa llamada "educación"/ Ellos pedían esfuerzo/Ellos pedían dedicación ¿Y para qué!? ¿Para terminar bailando y pateando piedras! ♪ Oías los consejos, los ojos en el profesor/había tanto sol sobre las cabezas/ Y no fue tan verdad/porque esos juegos, al final/terminaron para otros en laureles y futuros/y dejaron a mis amigos pateando piedras♪*

² Se entenderá por insatisfacción social todas esas reacciones de malestar expresadas por la ciudadanía a raíz de la desatención de demandas sociales.

materia de política económica y crecimiento económico. No es comparativo, pues metodológicamente no tenemos las variables e indicadores suficientes para determinar la investigación en términos del método de política comparada. Para Collier (1993), el método comparativo, aunque ofrece una base más fuerte para la evaluación de las hipótesis que el método de estudios de caso, requiere más recursos, tiempo y medios. Ante la frecuente escasez de ello, el autor afirma que el análisis intensivo de casos puede ser más promisorio que un análisis comparativo más superficial³, por lo cual, bajo estos supuestos, este trabajo realiza un estudio de caso tomando como referencia el caso chileno y colombiano.

La pregunta principal que guía esta investigación es: ¿cómo se pueden relacionar los resultados del modelo económico y la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia en el periodo 2010-2020?

Para dar respuesta a esta pregunta, nos proponemos como objetivo general describir los elementos centrales que la bibliografía especializada en el tema identifica para explicar la relación entre los resultados del modelo económico neoliberal y la reaparición de la protesta social en Colombia y Chile durante el período 2010-2020. Con el propósito de abordar el objetivo general establecemos tres objetivos específicos que dan forma a este trabajo. El primero, es identificar el contexto histórico que conlleva al establecimiento de un modelo económico neoliberal en Chile y Colombia. El segundo, establecer, teniendo como referente los enfoques de análisis político identificados en la bibliografía, las explicaciones que se dan a la relación entre el modelo económico neoliberal y la protesta social en Colombia y Chile durante el período 2010-2020. Y el tercero, caracterizar, a partir de la bibliografía identificada, las principales variables que dan cuenta de la insatisfacción social en Colombia y Chile durante el período 2010-2020.

Con base en esos objetivos, esta tesis está dividida en tres capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo, hacemos una aproximación histórica al contexto económico, político y social en el que el modelo de desarrollo neoliberal se instaura en América Latina, particularmente en

³ El método comparativo permite una comparación sistemática que puede contribuir al examen de la covariación entre casos con la finalidad de un análisis causal, la demostración de que un modelo o conjunto particular de conceptos ilumina eficazmente a estos casos, y la descripción de los mismos para subrayar qué tan diferentes son, estableciendo un marco para la interpretación de cómo los procesos paralelos de cambio se juegan de diferentes maneras dentro de cada contexto. En contraste, aunque el método de estudios de casos contribuye en menor grado a elaborar una teoría que estudios con más casos, este tiene el mérito de proveer un marco en el que un académico cuyo tiempo y recursos son limitados puede generar lo que potencialmente puede ser información útil sobre un caso en particular, aunque las oportunidades para la evaluación sistemática de las hipótesis son mucho más limitadas (Collier, 1993).

Chile y Colombia. Describimos cómo la crisis del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones allanó el camino para la adopción de las primeras reformas neoliberales de la región, lo que significó el Consenso de Washington para los gobiernos latinoamericanos, y posteriormente, las primeras reacciones a estas políticas neoliberales materializadas en el fenómeno conocido como la marea rosa. En el segundo capítulo, a partir del uso de una matriz metodológica, descrita más adelante en el apartado de “Metodología”, se acopian las principales corrientes y enfoques para el análisis político identificados en la literatura que problematizan la relación entre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia desde los postulados teóricos de cada corriente. En el tercer capítulo, elaboramos una periodización del ciclo de protestas 2010-2020, explicamos las motivaciones de los actores, las dinámicas y las lógicas detrás de las protestas, y se establecen correlaciones entre neoliberalismo e insatisfacción social. Esto a través de una caracterización por dimensiones que permitió establecer qué es y de dónde viene la insatisfacción social, al revisar ambos países discriminando el rendimiento y/o calidad y cobertura por servicios públicos y nivel de vida, a saber: sistema de salud, sistema educativo, pobreza monetaria, pobreza extrema, y redistribución del ingreso (índice de GINI), entre otros métodos de medición que permitieron esbozar un sumario de la radiografía social de los dos países. Así, se ilustraron las correlaciones entre las carencias evidenciadas por las cifras de bienestar social, y la protesta social, que, en últimas, permitió elaborar un estado de la cuestión del que se extrajeron algunas conclusiones sobre la realidad social de ambos países que antecedieron las protestas. Finalizamos concluyendo que el modelo de desarrollo neoliberal determina los ciclos de protestas en Chile y Colombia al encontrarse en períodos de crecimiento económico que no redundan en una mejoría de los servicios públicos para los ciudadanos, sino al contrario, debilita la calidad de los mismos al entregarle su provisión a los agentes del mercado.

De esta manera, tras la revisión de la literatura especializada, identificamos que, de los (48) textos revisados, son escasos los trabajos que expliquen de manera sostenida neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia durante el periodo de tiempo del 2010 al 2020. Si bien se habla del inicio de la década, el año 2010, como un año marcado por distintas y continuas convulsiones a escala global y especialmente en la América Latina, a partir de ahí, los estudios empiezan a ser discontinuos, y a tratar indeterminadamente cada año del decenio, en ausencia de una cohesión

espacio-temporal. En ese sentido, este trabajo pretende llenar este vacío, pues reconocemos que, si bien los autores han establecido la primera gran crisis de legitimidad del neoliberalismo en la región en el periodo 1990 a 2000, denominado como “la marea rosa”, o “el giro a la izquierda”, creemos que es momento de empezar a trazar una línea de tiempo en la que se hable de una segunda crisis de legitimidad, teniendo en cuenta el cierre en el año 2019 y 2020, en materia de protesta social.

Este estado del arte es de relevancia para la ciencia política al aproximarse al estudio de las protestas sociales en Chile y Colombia, tratándose de un suceso que ha sacudido en distintos momentos y con diferente intensidad, el statu quo, los cimientos del poder ejecutivo, y ha llegado a poner en jaque al establecimiento de ambos países, dando cuenta de las grandes fracturas existentes en las sociedades estudiadas aquí. Se trata de un terreno fértil en tanto campo de investigación y objeto de estudio para las actuales generaciones de investigadores, y sobre todo para los estudiosos de la ciencia política, las relaciones y la distribución del poder, y las lógicas de la acción colectiva latinoamericana. Este tipo de trabajos cobran especial relevancia por la coyuntura actual de Chile y Colombia. Mientras se terminaba de escribir este documento, una ola de protestas sociales se llevaba a cabo en Colombia en contra de una reforma tributaria y la desconexión del Estado con las necesidades y demandas de la población. En el marco de estas protestas, según fuentes oficiales, al menos 50 personas perdieron la vida de forma violenta (Human Rights Watch, 2021). En Chile, entre el 2019 y el 2020, 34 personas fueron reportadas fallecidas en medio de las manifestaciones (Deutsche Welle, 2020). Este escenario se configura entonces como una necesidad de contribuir a la interpretación de la realidad con base en el método científico y la metodología documental, para, desde nuestra orilla, devolver esta interpretación explicada a la sociedad, esperando sea de utilidad para la consecución de objetivos más grandes que deriven en países más justos y sociedades más igualitarias, donde impere la dignidad y el bienestar para todos y todas.

Pese a la exhaustividad en la recolección de fuentes bibliográficas, y el análisis y producción de este trabajo de investigación, reconocemos que de nuestro objeto de estudio derivan numerosas inquietudes que se configuran como oportunidades para futuras investigaciones, y que pueden llegar a suponer vacíos y carencias que se nos pueden criticar. Por eso, una profundización de cuestiones tales como los repertorios de acción de las protestas, los actores sociales de las

mismas, los procesos de contención que han logrado estos movimientos sociales con el uso de la protesta, constituyen una deuda pendiente que exhorta a la academia nacional e internacional, y a esta nueva generación de futuros politólogos, a continuar en la contribución de producción académica que sirva para la interpretación de los fenómenos de nuestros tiempos.

De cómo se hizo este estado del arte: La metodología de análisis documental utilizada

Este estado del arte recolectó cuarenta y ocho (48) fuentes bibliográficas, provenientes de libros, capítulos de libros, informes institucionales, algunos informes periodísticos, revistas académicas, y tesis de pregrado y posgrado, con un especial énfasis en el periodo de tiempo 2010-2020. Esto no significa que no cuente con publicaciones más antiguas, pues como es de esperarse, tanto para los antecedentes históricos como para la comprensión del fenómeno en la actualidad, es necesario remontarse a literatura más antigua que la fase de tiempo mencionada. El acceso a esta bibliografía se hizo a través de las bases de datos proporcionadas por la Universidad Javeriana Cali, mediante el uso de recursos digitales tales como Jstor, Proquest, Springer link, American Journal of Political Science, Asian Journal of Latin American Studies, entre otros; y bases de datos de libre acceso como la base de datos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Google Scholar, SciELO, Dialnet, Redalyc, y otras con un algoritmo más reciente como Research Gate y Academia.edu. No obstante, algunos de estos textos, por tratarse de producciones académicas relativamente nuevas, no estuvieron disponibles al alcance de la biblioteca de la Universidad, por lo cual, en algunas ocasiones, se recurrió a su compra directamente con los autores. Fue este el caso para una de las más recientes publicaciones del CINEP, y algunos libros y artículos publicados por las editoriales de las universidades consideradas de la “Ivy League”, como la Cambridge University Press, Cornell University Press, y otras editoriales como Miami University Press, entre otras, a cuyas bases de datos la Javeriana Cali, en algunos casos, no tiene acceso. El criterio de selección de estas fuentes bibliográficas consistió en el prestigio académico que tenía cada publicación, tomando como referencia el número de citas, la solidez de la bibliografía revisada por el mismo autor o autora, la diversidad de los enfoques analíticos empleados, la validez y reconocimiento de las conclusiones a las que llegó, y la pertinencia para el objeto de esta investigación.

Metodológicamente, este estado del arte recurrió al uso de una matriz metodológica que clasifica las fuentes bibliográficas por: i) año de publicación, ii) enfoque teórico, iii) diseño metodológico, iv) hipótesis, v) comentario, vi) aporte y vii) vacío.

Gráfica 1: Matriz metodológica

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA		METODOLOGÍA		UNIDAD DE ANÁLISIS	INTERPRETACIÓN CRÍTICA		
CITA	AÑO	ENFOQUE TEÓRICO	DISEÑO METODOLÓGICO	HIPÓTESIS	COMENTARIO	APORTE	VACÍO
Autor	Año	Marxismo	Estudio Cuantitativo				
Título		Institucionalismo	Análisis cualitativo				
Editorial		Estructuralismo	Estudio de caso				
Ubicación de la fuente		Funcionalismo	Análisis teórico conceptual				
		Estructural-Funcionalismo	Recorrido histórico				
		Elección racional					

Esta matriz para el acopio de datos es de gran utilidad, ya que permite compilar la producción académica de forma ordenada e identificar de mejor manera los enfoques analíticos mediante un ejercicio comparativo, que permite una interpretación de las variables trabajadas por los autores de acuerdo a la perspectiva teórica a la que adhieren, cuestión que, de abordarse a través de una lectura aislada, implicaría mayores desafíos para la identificación y comprensión de las inclinaciones académicas. De igual forma, el apartado v) comentarios, facilita el análisis de investigación en tanto incluye los comentarios personales sobre las percepciones al momento de leer el texto, mientras que el vi) aporte y vii) vacíos, facilita la comprensión del texto en clave de pertinencia para la investigación y su contribución para el abordaje del objeto de estudio.

Al analizarse el compilado de las fuentes bibliográficas, se encontró que de los (48) textos consultados, (32) vinculan el neoliberalismo y la protesta social como variables directamente

proporcionales en América Latina, es decir, sostienen la tesis que, a una mayor profundización del neoliberalismo, se incrementa la protesta social. Algunos de los principales autores de esta hipótesis son (Silva, 2009); (Del Campo et al., 2017); (Almeida, 2017); (Billion y Ventura, 2020); (Boccardo, 2015). (40) lo hacen refiriéndose específicamente a Chile y Colombia en cualquier periodo de tiempo como (Boccardo, 2013); (Sosa, 2012); (Márquez, 2010), entre otros, mientras que (08) se refirieron al ciclo de las protestas sociales del 2010-2020 en ambos países como un resultado de la intensificación de las medidas neoliberales, como (Paredes, 2019); (Archila, 2019); (Amador y Muñoz, 2021); (Mayol, 2020); (Almeida, 2017); y (Chase-Dunn y Morosin, 2017). Una profundización de los resultados de la matriz metodológica se encontrará en el capítulo II, dedicado al análisis de los textos con base en los enfoques de análisis político identificado a través del instrumento metodológico en cuestión.

Una de las limitaciones de la investigación fue el acceso restringido a material impreso, pues por cuestiones de distancia, al encontrarme fuera del país, obtener recursos bibliográficos de la red de bibliotecas tanto de la Universidad Javeriana como de la ciudad de Cali, no fue posible. Por otro lado, la coyuntura a propósito del Paro Nacional del 2021, que afectó las condiciones de orden público, dificultó los préstamos interbibliotecarios con, por ejemplo, la Universidad de los Andes, pues los funcionarios de las respectivas bibliotecas fueron desaconsejados de asistir presencialmente a las instalaciones de la universidad, así como el resto de la comunidad académica, para salvaguardar su seguridad en los días de zozobra que se vivieron en Cali y especialmente en el sur, sector donde se encuentra la Universidad Javeriana.

Contextualización: Las cifras que evidencian la crisis

Se ha visto en los últimos años cómo en la América Latina se han multiplicado los movimientos de protesta social iniciados en la década del 2010 (Billion; Ventura, 2019). En un contexto global en el que se alzaban numerosos procesos movilizatorios, desde la Primavera Árabe hasta el mítico Occupy Wall Street, esta ola de reavivación ha surgido en un clima en el que la región latinoamericana experimenta, en conjunto, un sostenido aumento en el costo del nivel general de vida, un decrecimiento del poder adquisitivo, políticas sociales escasas y basadas en la austeridad que dificultan el acceso a servicios públicos básicos ya desgastados, un “acaparamiento de las instituciones por parte de un cuerpo político al servicio de minorías privilegiadas” (Billion; Ventura, 2019) y unos altísimos niveles de corrupción y redes clientelares que profundizan las desigualdades de poder. Chile y Colombia no son ajenos a estas condiciones del contexto global, en el que se ha ido generando una crisis multiforme, social, económica y política.

Instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI a partir de ahora), la Organización Mundial del Comercio (OMC a partir de ahora), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL a partir de ahora), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE a partir de ahora), el Banco Mundial, entre otras, han explicado esta crisis multiforme como “el desarrollo de la crisis de la globalización liberal que afectan el sistema económico mundial y desestabilizan a las sociedades y los equilibrios geopolíticos que estructuran la escena internacional” (Billion y Ventura, 2019). Para la Cepal, los elementos de esta crisis se caracterizan por una disminución de la demanda agregada mundial; fluctuación del precio de las materias primas (-5% en 2019 de acuerdo a datos de la Cepal), que afecta a la mayoría de países de la región exportadores de las mismas; decrecimiento del 20% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 2019, respecto al primer semestre del 2018 conforme a la OCDE; políticas de ajuste de reducción del gasto fiscal, aumento generalizado y sostenido de la deuda pública y, en general, una profundización de las desigualdades económicas y sociales.

Este panorama de incertidumbre se da además en el marco de unas políticas económicas neoliberales, que como se verá más adelante, se implementaron en la región, particularmente en Chile y Colombia, bajo la promesa del crecimiento macroeconómico y la consecuente reducción de la pobreza que acarrearían esos réditos monetarios. Como se demostrará en los capítulos dos y tres, esta promesa de crecimiento fue *parcialmente* incumplida, pues la expansión económica —

aunque expansión —, no creció a los niveles esperados ni prometidos, ni impactó todos los sectores de la sociedad civil, sino que concentró sus beneficios en una clase social —generalmente la de las élites económicas y políticas — excluyendo a las clases populares de las bondades de la relativa prosperidad económica, y del bienestar producto de la misma. Exclusión que ha redundado en la intensificación de demandas sociales que, al no ser tramitadas por el Estado, derivan en ciclos de protesta social. Así, surge la necesidad de explicarse la relación entre el modelo de desarrollo económico neoliberal y la protesta social, por lo cual presentaremos primero la crisis de legitimidad del modelo, y las causas que explican esa crisis, para después presentar su relación con la protesta social.

Sostendremos entonces que esa crisis de legitimidad guarda una estrecha relación con los llamados vacíos sociales del capitalismo, presentes en aquellos sectores de la sociedad civil donde la autorregulación del mercado y la provisión de bienestar individual ha sido malograda, y contrario a lo que se esperaba del modelo neoliberal, no ha mitigado suficientemente la pobreza y ha aumentado la desigualdad. Según la Cepal, aunque la región logró importantes avances en el ámbito de la pobreza entre comienzos de la década del 2000 y mediados de la del 2010, desde el año 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en lo que respecta a la pobreza extrema. Esto es un hecho alarmante y que llama la atención, sobre todo “en un contexto regional de bajo crecimiento económico y profundas transformaciones demográficas y en el mercado de trabajo” (CEPAL, 2018).

Se intuye entonces que el reavivamiento de estas demandas sociales se materializó en la protesta organizada, vistas aparatosamente en el año 2019 en los dos países objeto de este estudio. En consecuencia, un considerable deterioro social se ha intentado atacar, desde los gobiernos neoliberales chileno y colombiano, con políticas de austeridad, políticas de ajuste, de reducción del gasto fiscal e inversión pública. Así, el aumento de la conflictividad social muestra que la configuración de la protesta da cuenta de un complejo escenario de pugnas de poder en las que disputan las alternativas, consecuencias y gestión del modelo neoliberal (Seosane et al., 2010).

Teniendo en cuenta los problemas del modelo, se verá que, aunque parte del argumento se enmarca en las protestas presentadas en el 2019 como punto de quiebre y lo que estas significaron,

este es un fenómeno social que encuentra sus raíces desde mucho antes de la aparición de las razones contemporáneas por las cuales la gente ha salido a la calle; es decir, las razones parecen ser las mismas, se han venido manifestando hace por lo menos dos décadas, pero se quiere explicar cómo la desatención de estas por parte del Estado, y como consecuencia del modelo neoliberal, han sido el caldo de cultivo necesario para expresiones ciudadanas más intensas, violentas y frecuentes.

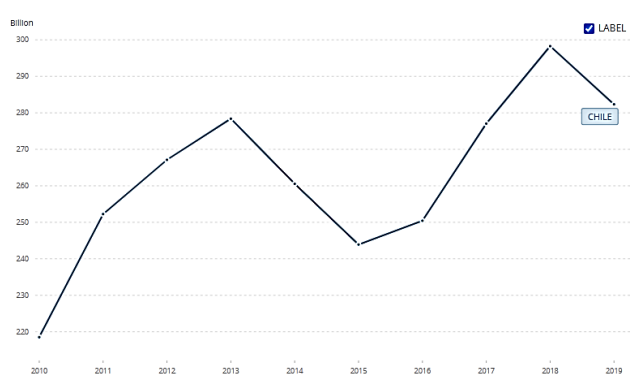
Así pues, el descontento social generalizado, expresado en el estallido social del 2019, ha ido allanando el terreno para una explosión ciudadana que antes había sido apaciguada vía subsidios y políticas asistencialistas. La manifestación de este descontento tanto en Chile como en Colombia, ha demostrado cómo la crítica se ha expandido en la base social y otros sectores de la sociedad civil, como los colectivos estudiantiles. Esta se ha anidado a otras molestias asociadas generalmente al encarecimiento del costo de vida, que más allá de obedecer a fluctuaciones económicas e inflacionarias, cobraron especial importancia en el marco de las modernizaciones neoliberales, donde la irrupción de oligopolios económicos, especialmente en áreas como la salud, la educación y las pensiones, implicaron enormes transferencias de poder para bases de apoyo asociadas a los gobiernos y elites políticas (Fleet, 2019), lo cual dio paso a una mercantilización de estos servicios públicos. Es así como pierden su carácter de derechos fundamentales y por ende se comercian bajo la lógica del mercado, convirtiendo a la ciudadanía en cliente y despojándola de su status de sujeto de derechos.

Los Estado neoliberales chileno y colombiano, en línea con sus intereses económicos, jerarquiza la satisfacción de dichos derechos de acuerdo a la capacidad de compra del ciudadano, donde es el Estado el que ofrece servicios de la más baja calidad disponible, propiciando las condiciones y oportunidades necesarias para expandir el mercado a su costa (Fleet, 2019). Esto ha traído inevitablemente niveles de inequidad en las clases medias y privilegios en elites económicas, que han sido protegidos con la privatización de la prestación de servicios y derechos. La rentabilización de la política neoliberal, deja al Estado en una situación de incapacidad para compensar estos problemas de desigualdad, pues, en efecto, “no puede subir el sueldo mínimo en nombre de las empresas, ni las pensiones en nombre de las AFP, ni financiar el sistema privado de salud; tampoco la gratuidad-váucher puede compensar por la educación pública, todo esto sobre la base de impuestos regresivos” (Fleet, 2019). De esta manera,

la movilización social en Chile y Colombia apostó por un restablecimiento de la gestión pública en materia de derechos sociales, civiles, políticos, culturales, económicos y ambientales, actualmente en control de las entidades privadas, lo que supone el replanteamiento del rol subsidiario que se le otorga a la acción del Estado, al igual que cuestionar el modelo de desarrollo y estrategia productiva del mismo.

La estructura de esas privatizaciones y mercantilización de servicios públicos se da en un contexto de crecimiento económico. Como dijimos, tanto Chile como Colombia son países de Latinoamérica caracterizados por presentar un desarrollo y crecimiento económico parcialmente sostenido en los últimos diez años. En lo que respecta a Chile, la década del 2010 al 2020 cierra con un crecimiento del 40% del Producto Interno Bruto nominal (PIB) según datos del Banco Mundial, pasando de USD 218.313 millones en el 2010, a USD 305.556 millones en el año 2019. Con excepción de los años 2014, 2015 y 2016 (como se evidencia en la gráfica 1), producto de la recesión regional por la caída de los precios del petróleo), el decenio fue uno de los repuntes económicos más importantes para el país andino del pacífico sur, llegándose a catalogar como “el milagro chileno”, o el “oasis de Latinoamérica” en una de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera.

Gráfica 2: Comportamiento Producto Interno Bruto (PIB) Chile 2010-2019



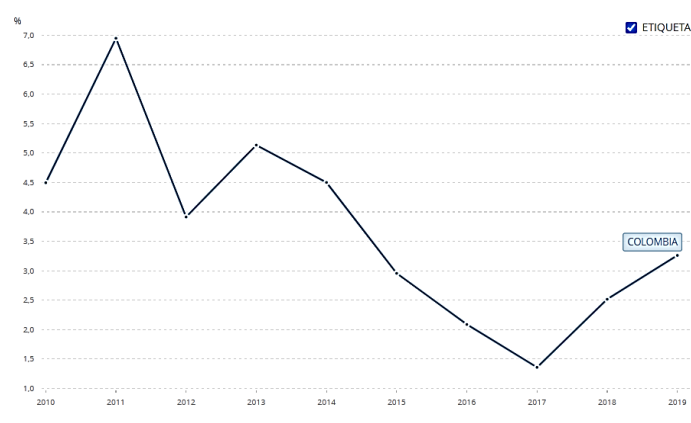
Datos tomados de: datos.bancomundial.org

No obstante, este crecimiento económico, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, no ha redundado en un bienestar significativo para la población chilena en

general, pues se evidencia una alta concentración de la riqueza al constatar que “mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%” (CEPAL, 2019). Es por esto que el Coeficiente de Gini de los activos físicos y financieros representa un valor de 0,72, mientras que el Gini producto de la distribución del ingreso per cápita corriente de los hogares se ubicó en 0,45.

Por su parte, entre 2010 y 2019, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y el Banco Mundial, la economía colombiana presentó tres años de crecimiento sostenido a tasas mayores a 5%. La mayor variación del PIB se alcanzó en el tercer trimestre de 2011 al incrementarse en un 8,6%. A partir de 2014 el alza se ha mantenido en 3% (Ramírez, 2019).

Gráfica 3: Comportamiento Producto Interno Bruto (PIB) Colombia 2010-2019



Datos tomados de: datos.bancomundial.org

Sin embargo, en Colombia, según el último informe del Índice de Desarrollo Regional para América Latina (IDERE LATAM) del 2020, se encontró la mayor brecha de desarrollo en lo que respecta a las ocho dimensiones sociales estudiadas por la investigación. En la dimensión de actividad económica, cuyas variables fueron desempleo, PIB per Cápita y tamaño del mercado, once ciudades colombianas se ubicaron en los rangos de desempeño medio bajo-bajo; en la dimensión bienestar y cohesión, que tiene en cuenta las variables de Pobreza, Trabajo Informal, Coeficiente de Gini, Conexión a Internet e Ingresos por Hogares, 18 ciudades colombianas se ubicaron en los rasgos de desempeño medio bajo-bajo; mientras que en la dimensión educación,

que valoró Alfabetismo, Estudios de Educación Superior, Matrícula en Educación Inicial y Años de Educación, seis ciudades colombianas se desempeñaron en el nivel medio-bajo. Según los investigadores, lo que se demuestra en general es que esto limita en gran medida las oportunidades de los colombianos para “ejercitar sus libertades para la concesión de objetivos en distintas áreas de la vida” (IDERE LATAM, 2020).

Ahora bien, de acuerdo a Castro (2020), estas demandas sociales, su posicionamiento como problemas públicos, y su cabida en la agenda política, son determinadas por la interacción entre el gobierno y la oposición respecto al control de los poderes del Estado. Así, los conflictos entre los diferentes sectores y actores, al igual que los reclamos sobre los vacíos y falencias del sistema, avivan las posibilidades del estallido social, que, según el autor, tiene lugar cuando las partes “se identifican a razón de la relación nosotros/ellos y no logran llegar a acuerdos”. Los periodos de reflujo social vienen entonces cuando se materializa esta dicotomía o cuando cesan las actividades en los escenarios de toma de decisión que determinan a la sociedad civil (Castro, 2020).

De esta manera, el autor expone que la protesta social de los últimos años en América Latina, en tanto asociación, pretende la protección de los intereses de sus integrantes como constituyentes de constituciones republicanas. Según Olson (1992) como se citó en Castro (2020), cuando la provisión de los recursos necesarios para garantizar la existencia es malograda, los grupos entran en disputas y contradicciones irreconciliables para la obtención de estos, impulsando la formación de organizaciones sólidas que permitan su consecución. Para las protestas del año 2019, estas organizaciones fueron conformadas por personas relativamente jóvenes, provenientes de lo que el autor denomina las “nuevas clases medias”, con altos niveles de escolaridad y acceso a la educación superior, activos políticamente al implicarse con instituciones de carácter social.

Nos parece entonces que las promesas con las que entró el neoliberalismo a la región han sido parcialmente incumplidas, al darnos cuenta que en la sociedad latinoamericana persisten las asimetrías que dificultan e impiden el acceso a servicios básicos para la superación de la pobreza monetaria y extrema. Por ello, para esta investigación se pretende describir los elementos del modelo económico neoliberal y de la insatisfacción social que repercuten sobre la protesta social en Colombia y Chile durante el período 2010 a 2019.

Capítulo 1

Los antecedentes de una crisis: breve historia del neoliberalismo en la región

La instauración del neoliberalismo como modelo económico en la región latinoamericana, tuvo unas dinámicas particulares que obedecieron a diferentes fenómenos económicos y políticos. En Chile como en Colombia la adopción de este modelo fue diametralmente distinta. En Chile se estableció a través de la dictadura de Augusto Pinochet, mientras que en Colombia Virgilio Barco allanaría el camino para una labor que profundizaría Carlos Gaviria. En ambos países, y en general en América Latina, el telón de fondo fue el consenso de Washington y la crisis del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI, desde ahora). En este capítulo, pretendemos exponer las dinámicas y el contexto en el que tuvieron lugar la adopción de las reformas neoliberales, y hacemos una primera aproximación a la lectura que hacen los enfoques del análisis político a la relación entre neoliberalismo y protesta social, específicamente del fenómeno de la marea rosa. Sostenemos, desde los postulados de Silva (2002), que las movilizaciones que antecedieron la marea rosa fueron de carácter antineoliberal, y se opusieron, fundamentalmente, a la “sociedad de mercado”.

Desde su independencia de la corona española América Latina ha intentado alcanzar los niveles de desarrollo y bienestar del Norte Global a través de varios modelos económicos y políticos (Morales, 2015). Los gobiernos lo intentaron con el Modelo Primario Exportador bajo el supuesto de la División Internacional del Trabajo de David Ricardo, y promoviendo las exportaciones para que los beneficios de estas se replicaran en los otros sectores productivos (Torre, 1998). Este modelo enfrentó su colapso en los años 30. Luego, desde 1930 hasta la primera mitad de la década del 70 se intentó con un modelo desarrollista hacia adentro, denominado Modelo de Industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que se propuso el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente, y desarrolló un Estado benefactor que incorporó a trabajadores y a las clases populares a través de redistribución del ingreso y políticas sociales, época conocida como populismo (Torre, 1998). Posteriormente, para finales de los 70's, tras la crisis de la deuda externa por el fracaso del modelo ISI, América Latina se ve en la necesidad de acudir a los grandes organismos internacionales para el préstamo de dinero, y esto trajo condiciones que se materializaron en un neoliberalismo esparcido en distintos lugares de la región.

Para O'Donnell (1997) las primeras reformas neoliberales entraron a la región como un modelo que las dictaduras militares de la época introdujeron para tomar medidas de corto plazo de corte recesivo. El autor parte del hecho de que los populismos de los años 30's y 50's, con el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), habían dejado a una América Latina en crisis, que se debatía constantemente entre el caos económico y político. De esta forma, a nivel político, se encontraba la “amenaza” latente del comunismo en la región, y a nivel económico, se vivía un desgaste y crisis del modelo ISI, había inflación e hiperinflación, fuga de capitales, los Estados eran altamente ineficientes y la deuda externa crecía.

Para el autor, fue través de las dictaduras militares que se empieza a implementar en América Latina un incipiente neoliberalismo, que se denominó el Estado Burocrático Autoritario, con el fin de reestablecer el orden y normalizar la economía a través del terror. La respuesta de este Estado ante la crisis fue volver a una economía de mercado, donde la propiedad privada estuviese protegida, se permitiera la acumulación de capital y se respondiera al juego de la oferta y demanda. Si bien estas medidas de corto plazo tendrían un corte neoliberal, lo cierto es que aún no se podía hablar del modelo neoliberal de manera formal.

Desde otra perspectiva Torre (1998) analiza el proceso político de las reformas económicas en América Latina durante los 80's. Este autor sostiene que el modelo neoliberal fue un proyecto cuya implementación se introdujo por cuestiones prácticas y no por estrategias económicas. En otras palabras, aunque sí fueron medidas dramáticas para esas sociedades (reformas fiscales abruptas, privatización de empresas públicas, desmonte del Estado benefactor), no buscaron la reorganización del modelo, sino atender los problemas de manera inmediata, lo cual tenía que ver con el diagnóstico hecho de la situación económica por los bancos y los gobiernos, donde se pensaba que este era un problema de solvencia y no de liquidez de las finanzas públicas. Según el autor, no se consideraba que el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) estuviera perdido, sino que se había quedado sin dinero. A la larga, los reiterados fracasos del modelo ISI radicalizaron el diagnóstico, y dieron cuenta de un aprendizaje negativo que permitió ver cómo la incapacidad al tratar de resolver un problema de política pública, abrió las puertas a medidas mucho más profundas: reformas estructurales de corte neoliberal. Según Torre (1998),

esta implementación era necesaria ante la crisis que se presentó debido a una alta incapacidad de los Estados de pagar la deuda externa y una alta inflación (54% en promedio para todos los países latinoamericanos, 27% en Colombia y 32% en Chile) que vivía la gran mayoría de países, lo que generó que el dinero empezara a perder su valor y hubiera una amenaza latente de pobreza social, como se evidencia en la gráfica 4.

Gráfica 4: Producto Interno Bruto. América Latina 1979-1980

	1979 ^a	1980 ^b	Mes
Argentina	139.7	88.9	noviembre
Barbados	16.8	23.0	junio
Bolivia	45.5	50.0	octubre
Brasil	76.0	87.0	noviembre
Colombia	29.8	27.0	octubre
Costa Rica	13.2	18.2	octubre
Chile	38.9	31.6	noviembre
Ecuador	9.0	15.1	octubre
El Salvador	14.8	17.2	octubre
Guatemala	13.7	9.6	septiembre
Guyana	19.4	15.7	mayo
Haití	15.4	6.3	septiembre
Honduras	18.9	20.7	julio
Jamaica	19.8	26.4	mayo
México	20.0	28.2	octubre
Nicaragua	70.3	30.0 ^c	octubre
Panamá	10.0	13.6	septiembre
Paraguay	35.7	16.6	octubre
Perú	66.7	59.1	octubre
República Dominicana	26.2	15.7	agosto
Trinidad y Tabago	19.5	15.6	septiembre
Uruguay	83.1	49.3	noviembre
Venezuela	20.7	22.2	septiembre
<i>Promedio América Latina</i>	53.8	53.6	

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. Obtenido de: revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/380/10/RCE10.pdf

En todo caso, la evidencia empírica había sido muy clara en cuanto al estancamiento, desempleo, y crisis económica del modelo ISI. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) así lo consignó, mostrando gran preocupación por las estructuras sociales latinoamericanas. Se trataba entonces de la “crisis desarrollista”, y el modelo del Estado benefactor sustitutivo de importaciones fue accediendo, poco a poco, a un nuevo patrón acumulativo. Este patrón acumulativo estaba “basado en la especialización de la planta productiva de tipo exportador en las actividades que cada país tenga o cuente —las llamadas ventajas comparativas— y que responda así a las nuevas necesidades que exigía el nuevo proceso productivo conocido como el proceso de globalización e integración neoliberal al mercado mundial” (Sosa, 2012).

Estas medidas de “Ajuste Estructural” recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se implementaron sin un grado explícito de coordinación en la región. Cada país a su ritmo y con diferentes niveles de intensidad, lo hizo a su manera. En el caso chileno y colombiano vemos esas diferencias. Chile, en su proceso político y socioeconómico de transición al neoliberalismo representa uno de los experimentos más drásticos y exhaustivos de Latinoamérica. En el caso de Colombia, el país no llegó a las reformas estructurales al cabo de la crisis de la deuda externa y del fracaso de los ajustes de corto plazo. El tránsito a las políticas de liberalización económica fue tardío, ya que recién en 1990 hicieron su ingreso explícito a la agenda gubernamental, y lo hicieron en el marco de una coyuntura económica que no presentaba los contornos de emergencia que conocieron otros países (Torre, 1998).

Veamos primero detenidamente el caso de Chile, donde las variables económicas y políticas en la instauración del neoliberalismo en el país, se explican tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en 1973, cuando se empezó un detallado plan que pretendía, entre otras, la apertura de la economía chilena al mercado internacional. Esto implicaba disponerse a la inversión extranjera, a la disminución de los aranceles a las importaciones y exportaciones, y a la supresión del papel del Estado en la economía. Así, se recortó el gasto social, se privatizaron empresas públicas, se devaluó y fijó la paridad del peso chileno respecto al dólar, y en términos generales, se reprimió sistemáticamente a los trabajadores, anulando las garantías políticas y las libertades individuales (Sosa, 2012). Estas políticas de “shock”, diseñadas por el mismo Milton Friedman, economista fundador del neoliberalismo en compañía de los denominados “Chicago Boys” o la “Escuela de Chicago”, se implantaron rápidamente en la sociedad chilena bajo el terror de la dictadura militar, produciendo transformaciones sustanciales en la distribución del ingreso y la riqueza. No es de extrañar pues, que para 1974, el Fondo Monetario Internacional concediera un considerable préstamo (\$900 millones USD) de contingencia para todos estos fines.

Para Sosa (2012), dos décadas después de la instauración del modelo neoliberal en Chile, el resultado fue un “aniquilamiento de la base productiva expresada en estancamiento, baja inversión, desindustrialización, dependencia alimentaria, y ampliación del déficit exterior (p. 13).

Socialmente y políticamente, implicaron enormes niveles de represión, concentración de la riqueza, especulación financiera y aumento del desempleo.

Aun así, la verdadera tragedia fue el costo humano de este sombrío periodo de la historia latinoamericana, y no se puede dejar de mencionar que, de acuerdo con datos de diversos organismos internacionales, más de 400.000 personas perecieron violentamente durante y después del golpe de Estado, más de 20.000 fueron encarcelados y alrededor de 3.000 fueron desaparecidos (Villareal, 1997). Fue una represión policíaco-militar que protegió y defendió el nuevo modelo monetarista.

Ahora veamos el caso de Colombia, en el cual, a diferencia del caso chileno, la adhesión a las políticas neoliberales se dio en términos meramente políticos más no económicos. Frente a la crisis de la deuda externa y las dificultades de financiamiento que esto produjo, el Estado colombiano respondió con el repertorio convencional de ajustes de corto plazo. Para 1986, el cuadro macroeconómico veía una mejoría en la balanza de pagos producto de una nueva bonanza cafetera, y Colombia retornaba a sus niveles de crecimiento. Sin embargo, fue entonces cuando se empezó a hablar en la agenda gubernamental de reorientar el modelo de desarrollo, en línea con las populares reformas estructurales. Para 1990, mucho después que el resto de países latinoamericanos, el presidente Virgilio Barco solicitó la concesión de un préstamo al Banco Mundial, que puso como condición la implantación de medidas de apertura comercial. De acuerdo con Torre (1998), “la presión externa fue el catalizador de un consenso formado en los años previos dentro de los economistas del gobierno alrededor de la crítica neoliberal sobre los excesos de la industrialización orientada al mercado interno” (p.32). Este diagnóstico resultaba menos obvio para el caso colombiano, en tanto el modelo de desarrollo del país se caracterizaba por su neutralidad: ni orientado hacia adentro ni orientado hacia afuera; y, además, la política económica agraria había sido priorizada antes que la industrialización, dando resultados positivos en las exportaciones de origen manufacturero, por lo cual el diagnóstico pesimista neoliberal no se veía tan claro en el país. Así, la propuesta de cambiar el modelo de desarrollo no parecía tener congruencia con problemas reales y urgentes, por lo cual la propuesta de reforma comercial formulada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) no respondió a una emergencia económica como en los demás países, sino a una iniciativa claramente normativa.

Políticamente, el país atravesaba un periodo de recrudecimiento de la violencia por parte de narcotraficantes y la formación de guerrillas, lo cual había dejado a Barco con un bajísimo margen de maniobra y una muy cuestionada legitimidad. Este contexto favoreció la implementación de la liberalización gradual de las importaciones, que anunció el CONPES faltando cinco meses para la finalización del mandato presidencial, y se decidió casi que a espaldas del ejecutivo, dada su pérdida de liderazgo. Es de resaltar que César Gaviria, quien sería el próximo presidente, y en ese momento ministro de Hacienda, demostró su apoyo al proyecto de liberalización comercial que ahora se ponía en marcha a través de “un proceso decisorio tan inusual para las prácticas políticas colombianas” (Torre, 1998). Al llegar a la presidencia, Gaviria dio al cambio de modelo de desarrollo un alcance más integral, añadiendo reformas en la política fiscal, laboral, y con privatización de empresas públicas. Esto significó distanciarse del programa económico del Partido Liberal, del que se había desligado años antes para adherirse a las políticas de liberalización económica de los gobiernos vecinos y sumarse a la tendencia en auge en la región. Lo cierto es que estas reformas estructurales encontraron un camino bastante despejado en el escenario político colombiano, pues los ánimos estaban concentrados en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente que pretendería reformar la Constitución para dar salida a una crisis nacional de tal magnitud que tenía al país al borde del caos. De esta forma, Gaviria llevó a cabo un conjunto de medidas drásticas que rompían con el manejo económico tradicional de la política incrementalista de los gobiernos colombianos. Los tecnócratas económicos dispusieron de un amplio margen de maniobra que les permitió adelantar las reformas de mercado sin tener que recurrir a consensos con las organizaciones corporativas, ni a mayores negociaciones con el legislativo, que terminó aprobando las reformas sin oponer resistencia alguna y a un ritmo acelerado sin el tradicional debate político.

Ahora bien, el caso colombiano se trata de una excepción. Sosa (2012), en línea con O’donell (1997), argumenta que la instauración del neoliberalismo en el resto de América Latina, y las políticas económicas implementadas en aras de llevar a cabo las “reformas estructurales” recomendadas por el FMI, el, BM, y la OMC, se dieron en un momento de crisis y “reestructuración del patrón de acumulación y de la imposición de un nuevo orden político

mundial” (p.17). Estas reformas permitieron el denominado “triunfo del neoliberalismo fascista del mercado”⁴.

Desde este triunfo del neoliberalismo, en palabras de Arancibia (2011), y tras el colapso del patrón de acumulación ISI, numerosos conflictos sociales y políticos emergieron. Se vieron algunos sectores progresistas intentando resolver la crisis económica de América Latina sin recurrir a las medidas recomendadas por los bancos internacionales y el poder de Washington, pero estos fueron aplastados por las sofocantes dictaduras militares que reprimieron diversas organizaciones sociales, partidos políticos y una “generación de dirigentes”, lo que propició un apabullante triunfo de las ideologías conservadoras, la instauración del modelo neoliberal, y con él “la posibilidad y la necesidad del sector empresarial nacional y extranjero de llevar adelante un conjunto de reformas estructurales” (p.39).

Chase-Dunn, Morosin y Álvarez (2017) afirman que estos programas de Ajuste Estructural, en tanto “terapias de choque”, se llevaron a la práctica por los nuevos neoliberales nacionales desarticulando los “Estados de Bienestar”, las organizaciones sociales y los partidos obreros. Esto implicó reducir y racionalizar las industrias, para hacerle frente a un rampante desempleo y a una tendencia migratoria a raíz de la misma crisis económica. Así, estas recomendaciones y ajustes se dan en un contexto en el que, ahogados por la deuda externa, los países de América Latina en conjunto se ven en la necesidad de adoptar las medidas impuestas por el FMI, el BM, y la OMC, en tanto los préstamos económicos para rescatar las deficitarias economías serían otorgados bajo la lógica de la condicionalidad. En pocas palabras, para recibir los préstamos de las financieras, AL debía seguir lo que muy enfáticamente se expresó en el famoso “What Washington means by Policy Reform” (Williamson, 1989), denominado también el Consenso de Washington o el Decálogo.

⁴ Ver Sosa, Samuel (2012), Otro mundo es posible: crítica del pensamiento neoliberal y su visión universalista y lineal de las relaciones internacionales y el sistema mundial. Rev. mex. cienc. polít. soc vol.57 no.214 Ciudad de México ene./abr. 2012

El Consenso de Washington

No se podría explicar el conjunto de reformas aplicadas en la AL sin mencionar lo que significó el Consenso de Washington. Este documento fue impulsado por el economista John Williamson bajo el amparo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Con un carácter más directivo que orientativo, exhortó a los países de la región, rescatados por las financieras internacionales, a tomar una serie de medidas que buscaban una reestructuración económica regional y la modernización institucional, para conseguir una mejor integración a los flujos financieros internacionales y a la economía mundial, y desmontar el proteccionismo del modelo ISI (Sosa, 2012). La ejecución de este programa define políticas económicas que indujeron a:

la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación basada en la disminución del papel interventor y productivo del Estado vaciándolo de toda su función social reguladora a un grado máximo; apertura de la economía nacional; liberalización del mercado y el comercio a las leyes del mercado mundial y reforma del Estado (traducida en eliminación de políticas sociales y asistenciales, modernización de la planta productiva, privatización de la seguridad social, incremento de la recaudación tributaria mediante la creación de impuestos indirectos, reforma radical del sector y mercado laboral llamada flexibilización laboral y, finalmente, reforma del sistema educativo nacional con una orientación marcadamente tecnocrática (Sosa, 2012)

Igualmente, el decálogo recomendaba recortes al gasto público, disciplina fiscal que devenía en reformas tributarias (incluidos los impuestos indirectos y la ampliación de la base tributaria), liberalización financiera, un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación y protección de los derechos de propiedad (Ahumada,1996) como se citó en (Lara, 2001), y privatización para aumentar la competencia y la eficiencia a través de la desregulación de la economía.

Así, se pretendía conseguir un equilibrio macroeconómico, a escala regional y mundial, aludiendo a una -razón de mercado- centrada en la confianza de la autorregulación de los mercados (el libre juego de la oferta y la demanda) y la economía, donde la competitividad y la productividad reemplazarían los valores de la -razón de Estado- como el bienestar social y la razón social,

privatizando el Estado mismo y convirtiéndolo en una suerte de administrador del capital financiero nacional y transnacional (Sosa, 2012).

Sin embargo, a pesar de este enorme proceso de transformación, para mediados de los '90 se empezó a notar un panorama de crisis, y según Castilla (2010), las mayorías latinoamericanas reflejaron un desencanto masivo con la ejecución y resultados de las políticas del Consenso de Washington, que, según el autor, habían profundizado la desigualdad, y lejos de las promesas hechas al inicio de la década, el desempleo se había acentuado y el empobrecimiento había aumentado. Según el informe “Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999” de la CEPAL, en efecto, la proporción de población pobre fue de 40,5% en 1980, a 48,3% en 1990. Además, las economías habían alcanzado un nivel de apertura internacional que las había dejado en una situación aún más vulnerable, pues se vieron afectadas por la circulación de capitales especulativos, las fluctuaciones económicas de los países del sudeste asiático, la privatización de empresas productivas, y el regreso a un modelo primario exportador, lo cual implicó una pérdida de competitividad local e internacional del sector industrial nacional (French-Davis, 2007) y (Sunkel, 2007) como se citó en (Boccardo, 2013).

Portes y Smith (2008) como se citó en Almeida (2017), afirman que ese desencanto y rechazo de lo que significó el Consenso de Washington, se evidencia con claridad en el fenómeno conocido como “el giro a la izquierda”, o “la marea rosa”. Las políticas neoliberales habían inflado el sector informal, impulsando a millones a condiciones de trabajo y niveles de vida precarios. Como consecuencia, un sector político movilizó esta parte de la sociedad en partidos y movimientos populistas. Es de esta forma como se argumenta que las reformas de Ajuste Estructural neoliberales “provocaron contra-movimientos nacionales y transnacionales que resultaron en las victorias presidenciales expresadas en el fenómeno conocido como la marea rosa” (Almeida, 2017).

La marea rosa, o el giro a la izquierda, se puede entender como un periodo de viraje en la historia latinoamericana. Al inicio de los 90, había terminado la guerra fría y el capital se erigía como la corriente ideológica dominante. Al mismo tiempo se publicaba “El fin de la historia” de Fukuyama (1992), consagrando la democracia liberal (o neoliberal) como el polo ideológico de la humanidad. Las directrices de Washington habían sido seguidas con rigor en la región, dejando

aún más vacíos que certezas y preocupando económicamente a las mayorías latinoamericanas. Pero en los inicios del siglo XXI, un presidente de Argentina confrontó las demandas del FMI y Wall Street (Néstor Kirchner), un presidente del Partido de los Trabajadores era elegido en Brasil (Lula Da Silva), un excomandante militar se hizo con los votos de los pobres en Venezuela (Hugo Chávez), y un indígena Aymara era elegido en Bolivia (Evo Morales).

Es sobre este fenómeno cuando se empiezan a ver claramente divergencias entre las explicaciones dadas por los diferentes enfoques de análisis político a lo que fue la Marea Rosa, y consecuentemente, a la relación entre neoliberalismo y protesta social. La explicación que dan los autores estructuralistas e institucionalistas al fenómeno de la marea rosa es el esquema argumentativo que retomamos para elaborar el argumento que atraviesa este trabajo, pues las protestas que antecedieron la Marea Rosa fueron las primeras movilizaciones de carácter antineoliberal en Latinoamérica. En ese sentido, aunque los gobiernos chileno y colombiano no formaron parte de estos sucesos, las condiciones del ciclo 2010-2020 permiten retomar elementos explicativos del argumento esbozado en los 90's, que son aplicables a nuestro periodo de tiempo en cuestión, cómo se verá más adelante.

En este capítulo solo mencionaremos dos perspectivas teóricas, que a nuestro parecer dan cuenta de una argumentación relevante para una comprensión del fenómeno del giro a la izquierda. Una versión más extendida y detallada de los enfoques para el análisis político (Estructuralista, Institucionalista, Funcionalista, Estructural-Funcionalista y Teoría de la Elección Racional) se encontrará en el capítulo II, donde expondremos todas las corrientes teóricas desde las que los académicos explican la relación del neoliberalismo con la emergencia de la protesta social en los países caso de estudio.

Las perspectivas en cuestión son las de los enfoques estructuralista e institucionalista. El primero, es expuesto por Chase-Dunn, Morosin y Álvarez (2017) quienes sostienen que, política y económicamente, el mundo se encuentra dividido jerárquicamente en tres niveles: los países del centro, que cuentan con economías diversificadas y gobiernos estables; los países periféricos, que dependen de la exportación de las commodities; y los países semiperiféricos, que pueden tener

economías más diversificadas, pero siguen estando supeditados a los países centrales y las corporaciones centrales.

Kentor (2008), desde una investigación cuantitativa expone la posición de distintas sociedades en el sistema-mundo, para clasificarlos entre centro-periferia al contabilizar PNB per cápita, dominación/dependencia económica y capacidad militar. Chase-Dunn, Morosin y Álvarez (2017) tricotomizan el indicador de Kentor, agregando la categoría semiperiferia. De este modo, la posición de centro es equiparable a la categorización de “altos ingresos” del Banco Mundial, y se refiere, en términos generales, a lo que se conoce como “Norte Global”; la periferia, a la de “ingresos medios”, y la semiperiferia a la de “ingresos bajos”, ubicados en el “Sur Global”.

Así, esta modificación permitió construir una nueva perspectiva teórica para comparar el sistema moderno con el del sistema-mundo precedente. Para Chase-Dunn, Morosin y Álvarez (2017), el sistema mundial actual surgió cuando en Europa un puñado de Estados capitalistas “fueron capaces de dominar a todas las otras regiones del mundo”, lo cual se esparció globalmente a través de una oleada de colonización y descolonización, de la que finalmente, las ex colonias se incorporan al sistema mundo. Esta incorporación se da entonces bajo una lógica jerarquizada, en la que dichas excolonias se insertan como países periféricos al sistema, son sumamente vulnerables a las fluctuaciones y los ciclos económicos internacionales presentan concentración y poca diversificación de exportaciones, altos niveles de ineficiencia en materia de política monetaria, y en general, una dependencia económica de los países del centro.

De esta manera, Chase-Dunn et al., sostienen que la Marea Rosa puede ser entendida como una respuesta de los países periféricos a la avanzada de la gobernanza global materializada en el neoliberalismo, en la que se planteó una nueva necesidad de Estados que fueran más poderosos que el poder financiero. Esta respuesta fue una manifestación en contra de la creciente inestabilidad y desigualdad producto de las primeras reformas neoliberales, una contestación que “ha interactuado con, y a veces socavado, el sistema mundial capitalista” (p.32), y que surge como una resistencia y crítica al capitalismo global en su fase neoliberal. En pocas palabras, para estos autores, los regímenes de la marea rosa representan un distanciamiento y desafío de los pilares del Consenso de Washington.

Por el contrario, Stolowicz (2005) afirma que, para los neoliberales, la crisis económica era producto del legado de los gobiernos del antiguo modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. El manejo irresponsable de la economía, había generado una red clientelar de distribución de la renta estatal y una corrupción endémica enquistada en las burocracias del Estado, lo cual imposibilitó conseguir un crecimiento económico sostenido. Así, los neoliberales sostenían que había un síndrome de ilegalidad en la región que no garantizaba plenamente la propiedad (ineficacia judicial, déficits legales, burocratismo); la información de transparencia era considerada imperfecta e insuficiente y por tanto no se podía confiar en el desempeño de la burocracia media y baja; persistían imposiciones de intereses creados que se oponían al interés general, y los inversionistas extranjeros percibían unos altísimos costos de transacción que desalentaban la inversión, lo cual debilitaba el crecimiento y por ende, la pobreza aumentaba.

Bajo la misma perspectiva de análisis, Petras y Veltmeyer (2011), afirmaron que los economistas del Banco Mundial y la corriente principal del pensamiento sobre el desarrollo, entendían este retroceso como las “fuerzas irresistibles de los procesos productivos y sociales”, considerando que estas condiciones de pobreza eran el “precio a pagar por la admisión en el nuevo orden mundial”, el inevitable y necesario costo social del cambio progresivo (p.3).

De cualquier forma, a la marea rosa o el giro a la izquierda le antecedieron otras medidas contrahegemónicas vistas en la región. Silva (2009) en su libro “Challenging neoliberalism in Latin America” da cuenta de cómo entre 1989 y 2002, una masiva movilización antineoliberal sacudió a varios países de AL (Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela), donde los protestantes se amotinaron, bloquearon carreteras, el comercio y el transporte público; convocaron marchas a lo largo y ancho de los países, atacaron y ocuparon edificios gubernamentales y oficinas de corporaciones transnacionales. También, provocaron feroces peleas callejeras con la policía antimotines y el ejército, que estremecieron al establecimiento, y dejaron un saldo de numerosos fallecidos y heridos que estimularon la indignación de los manifestantes y redoblaron sus esfuerzos (p.1). Para Silva, estos no fueron simplemente episodios aislados, fueron el resultado de grupos sociales que con el tiempo fueron ganando coordinación y repertorio, incluyendo todo tipo de sectores: indígenas, desempleados, pensionados, asociaciones de vecinos, nuevos partidos

políticos y nuevos sindicatos. Los manifestantes buscaban entonces presionar a las autoridades gubernamentales por las reformas económicas basadas en el libre mercado. Su rechazo se centraba en los problemas asociados a la redistribución en temas como la seguridad social y los servicios públicos, la propiedad de la tierra, los compromisos ideológicos con los derechos de propiedad, y en general, presiones para obtener un papel más activo del Estado en la economía y la sociedad.

La contribución de Silva (2009) es de una gran relevancia para la comprensión del fenómeno del giro a la izquierda, así como para la interpretación de las protestas y movilizaciones de carácter antineoliberal en Latinoamérica como las que nos interesan en este documento (Chile y Colombia). Sus aproximaciones a lo que representó el libre mercado y el paquete de reformas para los manifestantes dan cuenta de una conceptualización de estos episodios como resistencia al neoliberalismo.

Silva retoma a Polanyi (2001), y argumenta que la construcción de una versión contemporánea de lo que este autor llamó la “sociedad de mercado”, fue uno de los factores por los cuales se dieron los episodios antineoliberales expresados en las movilizaciones y las transformaciones en las tendencias electorales en el ejecutivo. En primer lugar, las reformas neoliberales entre los 80’s y 90’s proveyeron el *motivo* para la movilización, al buscar definir un nuevo orden que, en una sociedad de mercado, subordinara las políticas y el bienestar social a las necesidades de la economía basadas en la lógica del libre mercado, lo cual generó la construcción de reclamos colectivos que se opusieron a la economía neoliberal, a las reformas que se percibían como beneficiosas exclusivamente para las clases altas y medias-altas aliadas con los intereses económicos y políticos.

En segundo lugar, como estas reformas neoliberales afectaron simultáneamente la esfera social, política y económica, menoscabaron tanto sectores populares como a las clases medias. Silva esclarece que resulta crucial entender que los movimientos de protestas en América Latina buscaron reformar el capitalismo en su versión neoliberal, demandando el regreso a una economía mixta y una mayor participación del Estado en la provisión de bienestar, más no significaron una pretensión por una revolución socialista u otro modelo (p.3).

En suma, el autor argumenta que los primeros movimientos en contra de la sociedad de mercado aparecieron en los países donde los Estados estaban fallando en responder a las demandas de los grupos subalternos, una condición que estuvo presente en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, más no en Chile, pues el gobierno socialdemócrata adelantaba una serie de reformas sociales a propósito del final de la dictadura de Pinochet. Por otra parte, el poder de estas coaliciones de protesta aumentó cuando las economías se vieron afectadas por fuertes crisis y problemas irresolubles de desempleo y marginación. Así, la mano de obra industrial organizada, aunque disminuida, se asoció con los nuevos movimientos sociales antes mencionados, tales como asociaciones de vecinos, sindicatos y organizaciones indígenas, con los que se dieron nuevos repertorios y tácticas de movilización, a saber, interrupción del transporte a través de barricadas. Silva concluye que los movimientos antineoliberales tuvieron éxito al aglutinar sus demandas en grupos de intereses diversos bajo un propósito en común, un argumento que rodeo la movilización y fue la esencia de la misma: los mercados sin restricciones son socialmente dañinos y generan resistencias (Babb, 2011).

No obstante, el autor es claro en afirmar que en Chile, el grupo de socialdemócratas recién elegidos luego de la dictadura de Pinochet, amortiguaron y previnieron un estallido de protestas antineoliberales como el de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela. Para el caso de Colombia, Archila (2017) argumenta que Colombia no estuvo inserta en las dinámicas propias de la marea rosa, pues si bien hubo un ciclo de protestas, de 1990 a 1994, producto de cierta tensión entre políticas socialdemócratas y neoliberales, la apertura comercial afectó la actividad económica interna y las relaciones laborales en el campo y la ciudad, y contrario a la tendencia latinoamericana, esta apertura, que debilitó a los actores clásicos de la lucha social (campesinos y trabajadores), contribuyó a una disminución de las protestas durante esos años. El rumbo de las protestas se mantendría igual de bajo en el periodo 1994-1998, con el mandato de Ernesto Samper y su intento por dotar el neoliberalismo con un «rostro humano» y políticas de corte más reformista, esfuerzo que se veía empañado por el escándalo del Proceso 8.000 en el que se le acusó de haber recibido dineros del narcotráfico en la campaña presidencial, pero a pesar de todo eso las movilizaciones se mantuvieron masomenos mitigadas. Otro ciclo que identifica Archila es de 1998 a 2002, que estuvo marcado por la presidencia de Andrés Pastrana y su pretensión de

establecer diálogos de paz con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo cual produce un pico de luchas en 1999, producto de la expectativa por los acuerdos de paz, los intercambios humanitarios que tenían lugar en ese contexto, y por discutirse por primera vez públicamente un Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos de paz fracasaron, y propiciaron la propuesta guerrillera de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en cuyo mandato disminuyeron también las protestas, esta vez por cuenta del comportamiento autoritario de este gobernante, y en consecuencia el peligro que representaba movilizarse (Archila, 2017).

Finalmente, volviendo a Silva, y a la luz del ciclo de movilizaciones del 2010 al 2020, podemos afirmar que las protestas de este período, tanto en Chile como en Colombia, tuvieron un fuerte carácter antineoliberal. Es por esto que consideramos conveniente extrapolar la hipótesis de Silva sobre la marea rosa para explicar el fenómeno de la protesta de nuestros tiempos. Una profundización de estas consideraciones se verá en el capítulo III, donde expondremos las motivaciones de las sociedades chilenas y colombianas, que desde el 2010 han venido manifestándose contra lo que Polanyi llama la “sociedad de mercado”.

Capítulo 2

Enfoques sobre el neoliberalismo y la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

Este capítulo tiene como objetivo describir los enfoques que utilizan los autores para explicar el fenómeno de las protestas sociales en Chile y Colombia. Los resultados de la matriz metodológica y el ejercicio comparativo de los textos estudiados nos permitieron identificar los representantes y las discusiones más importantes de las teorías Estructuralistas, Marxistas, Funcionalista, Estructural-funcionalista y de la Teoría de la Elección Racional.

Los estudios que vinculan específicamente neoliberalismo y protesta social datan de finales de los 90's, con las primeras manifestaciones contra el Consenso de Washington. Igualmente, la cuestión del modelo de desarrollo es una discusión que ha estado presente en los diferentes movimientos sociales de la región, particularmente en Chile y en Colombia, donde han tenido un carácter ampliamente antineoliberal.

Respecto a esta cuestión de desarrollo, encontramos estudios que lo abordan alrededor de lo que se denominó la escuela cepalina. Por otra parte, los movimientos sociales antineoliberales han sido estudiados desde el enfoque estructuralista, institucionalista, marxista y en menor medida, funcionalista y estructural-funcionalista. La identificación de estos enfoques de análisis en la literatura especializada recopilada permite interpretar la perspectiva de los autores en aspectos como el papel del Estado, las instituciones, el modelo de desarrollo, los actores políticos y sus incentivos. Es por ello que, para efectos de esta investigación, los hemos clasificado y analizado por separado, para un mejor abordaje del fenómeno antineoliberal.

De esta forma, en este capítulo presentaremos los principales supuestos teóricos y metodológicos usados en diferentes enfoques que han abordado nuestro tema de interés. Así, desde el enfoque estructuralista exponemos las discusiones aportadas por la escuela cepalina en cabeza de Raúl Prébisch y su tesis sobre el deterioro de los términos de intercambio, el problema de la división internacional del trabajo, y la teoría wallersteniana del sistema mundo centro-periferia. Exponemos también la discusión de los puntos de encuentro entre el enfoque estructuralista e institucionalista, desde autores que retoman los postulados de Polanyi (1978) sobre el doble movimiento polanyiano y la teoría de la sociedad de mercado, y los aportes de la perspectiva

institucional sobre cómo la ineficiencia de la matriz institucional latinoamericana genera conflictos sociales como los ciclos de protesta. Posteriormente abordamos las contribuciones del enfoque marxista, los aportes de la Teoría de la Dependencia Marxista (TDM) y el debate de los autores sobre el análisis de las luchas sociales, que deriva en la clasificación de los teóricos sobre determinantes y los teóricos de las luchas condicionadas autónomas. Luego presentamos los aportes del enfoque funcionalista y la discusión sobre el dualismo estructural, y las hipótesis de Hayek (1978) y Adam Smith (1978) que mencionan los autores funcionalistas para explicar la movilización como producto de una limitada capacidad de los agentes de insertarse al mercado. Después, presentamos la teoría de la modernización y el cambio social del enfoque estructural-funcionalista expuesto por Gino Germani, que concibe la movilización como un problema individual resultante de una forma errónea de interrelacionarse con la estructura global capitalista. Finalmente abordamos el enfoque de la Teoría de la Elección Racional, que entiende la relación entre neoliberalismo y protesta social en términos de racionalidad y retoma los postulados de Oslon (1965) y el individualismo metodológico para explicar esa relación.

Enfoque Estructuralista latinoamericano e Institucionalista

Una primera aclaración, el estructuralismo al que nos referiremos es el estructuralismo latinoamericano, escuela de pensamiento distante y distinta del estructuralismo francés, pues le otorga relevancia al eje de las sincronías en el análisis social y establece una síntesis de las disparidades en las organizaciones sociales (Malloquín, 2001). El estructuralismo económico latinoamericano, estudia los “parámetros no económicos” de los modelos macroeconómicos, pues, en general, el comportamiento de la economía depende de tales parámetros, y estos merecen ser analizados.

El análisis que hace el enfoque estructuralista de la movilización antineoliberal ha estado marcado por lo que Immanuel Wallerstein (1993) denominó la revolución del sistema mundo, ya explicado en el capítulo anterior. Los autores que analizan la relación entre neoliberalismo y protesta social, han interpretado la movilización como una crítica a la Modernidad. En concreto, Offe (1998) como se citó en Pastor (2006), afirma que estos movimientos aparecieron en sociedades capitalistas, frente a los efectos negativos de la racionalidad económica y política; la intensificación de los modos de dominación y control social y sus efectos; y la “pérdida de capacidad autocorrectiva por parte de las instituciones políticas y económicas” (p.05). De esta

forma, estos movimientos exponen una crítica a las consecuencias negativas de la modernización que permean en conjunto a la ciudadanía.

Para el estructuralismo, los movimientos antineoliberales se alzan contra los rasgos fundamentales de la Modernidad, expresados por Anthony Giddens (1993) como el capitalismo en su fase neoliberal de acumulación de capital en el contexto de mercados competitivos de trabajo y de productos; la hipervigilancia, como el control de la información y los medios de difusión a través del aparato estatal y paraestatal; el poderío militar, basado en el uso de la violencia en la industrialización de la guerra; y el industrialismo, que menoscaba la naturaleza y perjudica el medio ambiente.

De ahí que, como lo vimos en Silva (2009), los movimientos antineoliberales aglutinaron demandas de distintos sectores y respondieron a distintas exigencias expresadas en el movimiento obrero, el movimiento ecologista, el movimiento por la Paz, y más recientemente, el movimiento feminista. Para Pastor (2006), todos estos colectivos derivaron en movimientos de carácter *estructural* y no solo coyuntural, constituyéndose como actores colectivos duraderos desafiando distintos pilares de la Modernidad, como la desarticulación del Estado de Bienestar y el neocorporatismo. Este autor sostiene que a mediados de los 80's estos conflictos dieron paso a pensar que el "el viejo paradigma político" de la postguerra, fundamentado en el crecimiento económico como valor ideológico social, se reemplazaría por un nuevo paradigma fundamentado en el "modo de vida", y dicotomizaría la supervivencia al progreso.

Los estructuralistas pensaron en los efectos del neocorporatismo, que habría permitido seguir una dinámica de distribución de los resultados económicos entre los grandes grupos de presión, como los patronales y sindicatos, marginando a diferentes sectores de la sociedad que no eran representados por estos grupos, y dejando una serie de efectos colaterales negativos de estos acuerdos (Pastor, 2006). Así, desde este enfoque se parte de que la base social de este movimiento es plural, aunque se pueda afirmar que el núcleo principal son las nuevas clases medias y las juventudes escolarizadas, dados los recursos económicos y culturales para actuar políticamente.

Por otro lado, frente al fenómeno antineoliberal, la escuela estructuralista ha sido de gran relevancia en el análisis y crítica del modelo de desarrollo. La protesta social, tanto en Chile como

en Colombia, ha hecho una crítica sólida al mismo y sus consecuencias. La CEPAL siempre se ha preocupado por su análisis, sobre todo el del desarrollo económico. Esto lo ha hecho desde la escuela estructuralista, lo cual ha significado que no ha encontrado problemas en el capitalismo en sí, al contrario, son las circunstancias económicas que condicionan a la región.

Es así como, desde 1949, en el texto “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas” consagran la aparición de la escuela estructuralista latinoamericana. En este texto Raúl Prébisch expone que los principales problemas de América Latina, tales como la deficiente industrialización, la economía basada en las materias primas, y un cuestionamiento férreo de las tesis ricardianas sobre la división internacional del trabajo y las ventajas corporativas. Se dice pues que las consecuencias en materia de la caída de los términos de intercambio, como lo fue la precarización laboral, la pobreza, el analfabetismo y fluctuación de los procesos de crecimiento, habrían inspirado lo que posteriormente pasaría a llamarse la Tesis Prébisch-Singer⁵.

Entre tanto, para el año 1969, el ahora expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y Enzo Faletto, publicaban desde una óptica más sociológica el texto “Dependencia y desarrollo en América Latina”, convirtiéndose en un hito teórico, pionero de la teoría de la dependencia para la explicación e interpretación de la realidad económica de la región. Cardoso y Faletto integraron el análisis económico con el de la sociología, identificando distintas causas para el subdesarrollo, estableciendo diferencias entre subdesarrollo y ausencia de desarrollo, al igual que desarrollo hacia afuera y desarrollo autónomo. Así mismo, estos autores plantearon y reforzaron las teorías del centro-periferia (Lilloy, 2015). Esta teoría de la dependencia entraría pues a contribuir en los postulados estructuralistas de inspiración marxista, valiéndose del concepto centro-periferia para dar cuenta del atraso en materia de desarrollo de los países latinoamericanos.

⁵ La tesis se fundamenta en el deterioro de los términos de intercambio y fue expuesta por Raúl Prébisch y Sir Han Singer a principios de la década del 50. Esta tesis combinaba dos hipótesis diferentes, aunque ciertamente complementarias: por una parte, el efecto negativo de la inelasticidad-ingreso de la demanda de las materias primas sobre los términos de intercambio de los países en vías de desarrollo y, por otra, las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del —centro y de la —periferia de la comunidad mundial, que fue esbozada por Prébisch

Con todo, para los estructuralistas, los teóricos de la dependencia son una extensión de la escuela cepalina. Por el contrario, los teóricos de la dependencia consideran al pensamiento estructuralista y el enfoque cepalino como una cuestión no central de su producción académica, reconociendo que, si bien han hecho grandes aportes epistemológicos a su propia teoría, los dependentistas han retomado los errores cepalinos y han ofrecido alternativas superadoras (Lillo, 2015). A pesar de estas diferencias epistemológicas y metodológicas entre los académicos, para efectos de trabajo entenderemos estructuralismo como la conjunción de estas vertientes.

La revisión de la literatura sobre la relación entre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia, desde el 2010 al 2020, nos ha arrojado principalmente a las vertientes estructuralistas y marxistas. No obstante, es de notar que, los textos que hemos clasificado como estructuralistas, retoman con frecuencia la teoría de la sociedad de mercado de Karl Polanyi (1992). Este autor, ha sido considerado un institucionalista⁶, a pesar de reconocerse la influencia de Marx en su obra. Exponemos los argumentos de los autores que recurren a Polanyi desde el estructuralismo, a propósito de la mixtura que el estructuralismo latinoamericano y el institucionalismo norteamericano han presentado, y expondremos, a grandes rasgos, los principales elementos de ese debate, sobre todo como una justificación y explicación del papel de Polanyi, un institucionalista, para autores estructuralistas. Consideramos que este debate es de alto valor para la contribución de este estado de la cuestión, en tanto representa una perspectiva poco explorada en las discusiones académicas sobre neoliberalismo y protesta social.

Valenzuela (2020), se refiere al ciclo de protestas antineoliberales, y el más reciente estallido chileno y colombiano, apelando al “doble movimiento polanyiano”, en el que se entiende que, en las sociedades fundamentadas en el mercado, el Estado expide leyes que mercantilizan las no-mercancías (derechos y ciudadanos), y a su vez, responden a los movimientos sociales que se originan producto de esa mercantilización, limitando su alcance a través de otras leyes y políticas, generando el “doble movimiento” característico de las sociedades de mercado. Con esto, se puede

⁶ Polo, Jorge. 2012. Karl Polanyi and the economicist hybris of Modernity. LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica Vol. 46 (2013): 261-285. Universidad Complutense de Madrid

afirmar que “el Estado condensa la lucha contradictoria entre sociedad y mercado” (Polanyi, 1992), como se citó en Valenzuela (2020).

En palabras del autor, el neoliberalismo como proyecto encarna una visión capitalista de la economía y los mercados, tanto en Chile como en Colombia y el mundo. Su principal característica es el determinismo económico por encima de la sociedad y la política, convirtiéndolo en una teoría social economicista, que ha derivado en piedra angular del sentido económico predominante. Sin embargo, es de notar que, aunque sea una teoría social, ignora la sociedad y las instituciones sociales, hecho frente al cual se han levantado las masas en las movilizaciones (p.07).

En suma, la aproximación institucional con raíces en la teoría Polanyiana, posibilita comprender las instituciones y la economía como construcciones sociales que apelan a la agencia humana ante condiciones de índole *estructural*. Esto nos hace traer a colación la corriente que explora las similitudes entre institucionalismo y estructuralismo latinoamericano. De acuerdo a Mallorquín (2001), las concepciones teóricas de ambos enfoques acerca de los mecanismos para entender las interacciones entre economía y sociedad, hacen posible un fructífero diálogo entre ellas⁷, pues ambos enfoques se preguntan y cuestionan “la utopía auto regulativa del mercado y del sistema económico”, expresado claramente por Polanyi al afirmar que, la historia económica evidencia que el surgimiento de los mercados nacionales no fueron un producto de la emancipación gradual y espontánea de la esfera económica frente al control del Estado, sino que, por el contrario, el mercado intervino consciente y violentamente al mismo, lo cual impuso una *organización* del mercado a la sociedad por razones no económicas. Así, Polanyi argumenta que “la deficiencia congénita de la sociedad del siglo XIX no era su carácter industrial sino su carácter de sociedad de mercado. La civilización industrial continuará existiendo cuando el experimento utópico de un mercado autorregulado no sea más que un recuerdo” (Polanyi, 1992) como se citó en Mallorquín, 2001).

⁷ Sobre esto hay iniciativas relevantes en la construcción del puente entre ellas y particularmente la pionera obra de James Street, "The Latin American `Structuralists' and Institutionalists: Convergence in Development Theory", ver este volumen y coautor con Dilmus D. James, "Institutionalism, Structuralism, and Dependency in Latin America", *Journal of Economic Issues*, Vol. XVI, núm., 3, 1982; "The Institutional Theory of Economic Development", *Journal of Economic Issues*, Vol. XXI, núm., 4, 1987; y Osvaldo Sunkel, "Institucionalistas y estructuralismo", ver este volumen.

Para Mallorquín, tanto los estructuralistas latinoamericanos, como los institucionalistas están de acuerdo en que, la movilización debe ser atendida en la construcción de algo similar al “Welfare State”, pero por medio de la coordinación social producida por los ciudadanos y agentes productivos entre sí, que pueda derivar en un redireccionamiento de las políticas económicas, donde se rechace la idea neoliberal de que todo se puede solucionar diciendo “el mercado resolverá sus problemas” (Ibid, 2001, p.49).

Ahora bien, el institucionalismo, tanto el viejo como el nuevo, han visto la cuestión del modelo de desarrollo y su relación con los movimientos antineoliberales, adhiriéndose a la hipótesis de la racionalidad limitada de los agentes, la influencia de las normas y valores sociales en la conducta individual, y los hábitos, haciendo un especial énfasis en el papel de las instituciones en la economía y su interacción con la sociedad. Sobre esto, Afonso de Aguilar y Benedito Da Silva (2010) retoman a North (1994), el principal exponente de la teoría neoinstitucionalista de desarrollo, quien produce el concepto de “matriz institucional”, concebida como un conjunto de reglas, formales e informales, que crean incentivos que dan forma al accionar de los agentes individuales y organizaciones. Para North, América Latina es un ejemplo evidente de la persistencia de matrices institucionales ineficientes, pues las élites económicas y políticas se apoderan de las ganancias redistributivas, lo cual obstaculiza la modernización institucional, perpetua estructuras de gobernanza centralizadas y excesivamente burocratizadas, y establece grandes obstáculos para el desarrollo de los países (p. 218).

Esto termina generando una movilidad social muy reducida, vinculada con un alto grado de rigidez institucional, que contribuye al sustento de elites desprovistas de intereses económicos en materia de producción e innovación tecnológica, lo cual estimula la aparición de gobiernos autoritarios, y violentos procesos de ruptura política, como lo son los estallidos sociales y los distintos ciclos de protestas en América Latina. Es aquí donde se puede establecer una distancia entre algunos teóricos estructuralistas e institucionalistas, pues a diferencia de la hipótesis de explotación de los países periféricos por parte de los primeros, el enfoque institucional atribuye la crisis neoliberal a la ineficiencia histórica de las *matrices institucionales*, que constriñe la consolidación de un entorno de estabilidad que favorezca el desarrollo de las fuerzas del capitalismo (p. 219).

Otra diferencia es que el institucionalismo controvierte el análisis estructuralista en dos partes. La primera, porque pierde de vista la influencia del marco institucional en los países latinoamericanos y su desarrollo económico, “asumiendo como dada e irreversible su posición periférica en el comercio internacional”. La segunda, porque la teoría de la dependencia cepalina presupone que hay una relación de dominación política y económica forzada por las economías centrales, y por tanto ignora las características intrínsecas de las economías periféricas. Dicho con otras palabras, la crítica al pensamiento cepalino estructural se basa en que este utiliza un elemento exógeno y ad hoc para explicar el atraso latinoamericano y su impacto en las revueltas sociales, lo cual termina por justificar políticas económicas populistas, que posteriormente demuestran su sesgo ideológico y la fragilidad de sus construcciones teóricas. Así, algunos autores institucionalistas han llegado a acusar a los teóricos estructuralistas de no solo equivocarse respecto a las causas del subdesarrollo, sino también contribuir en reforzar este retraso, pues nutren una ideología antineoliberal que encubre las contradicciones de las economías internas de estos países y redundan en movilizaciones sociales de carácter antisistema (Afonso de Aguilar y Benedito Da Silva, 2010).

Aun cuando estas diferencias de forma se hacen evidentes para estos mismos autores, la crítica del institucionalismo al análisis estructuralista sobre neoliberalismo de América Latina, es impropia. La supuesta negligencia de la corriente cepalina en el tratamiento de los elementos institucionales que condicionan el desarrollo de las economías, se puede desestimar en tanto esta es cometida también por los mismos institucionalistas. Es decir, el individualismo metodológico adoptado por estos últimos para el tratamiento de conjuntos sociales (países o regiones), como unidades aisladas e independientes del sistema que las envuelve, sería la *verdadera* negligencia.

Como indican Velasco y Cruz (2003), bajo dicho enfoque, el análisis de las asimetrías de poder permanece necesariamente limitado a las instituciones del sistema económico, lo que impide el reconocimiento de las relaciones de dominación exteriores a este sistema. Esto permite comprender una aparente paradoja de esta corriente teórica defendida por North: mientras que acepta e insiste en la importancia de las relaciones de dominación en las sociedades atrasadas y los elementos que impiden la modernización de estas instituciones, desconoce la influencia ideológica

y económica de las relaciones de poder históricamente constituidas entre los países del mundo industrializado.

Finalmente, a pesar de estos distanciamientos, se puede afirmar que el análisis estructuralista e institucionalista tiene más puntos de convergencia que de discrepancia. No se puede negar que los estructuralistas atribuyen un papel importante a las instituciones en el análisis del desarrollo económico y las consecuencias de este en la protesta social. El pensamiento cepalino y su abordaje teórico, permite explicar características importantes de las instituciones presentes en las economías periféricas, sin redundar en explicaciones funcionalistas o demasiado reduccionistas, que es algo de lo que pueden ser acusadas las explicaciones institucionalistas, quienes pueden llegar a negar los factores culturales en la formación de preferencias individuales, o el papel histórico condicionante de los factores externos de estas economías. De hecho, Afonso de Aguilar y Benedito Da Silva, 2010 llegan a afirmar que el pensamiento estructuralista se aproxima cada vez más al programa teórico tradicional institucionalista, cuando se trata de interpretar la crisis del neoliberalismo y las consecuencias sociales del mismo.

Entender las características y el análisis que hacen las escuelas de pensamiento sobre el modelo de desarrollo es de suma importancia para la comprensión de nuestro tema de interés. Entendemos que, como lo expreso Silva (2009), el ciclo de protestas de América Latina tiene un fuerte carácter antineoliberal. Este carácter está dotado, principalmente, de razones sociales. Como hemos dicho antes, el neoliberalismo en América Latina, incluyendo Chile y Colombia, implicó un desmonte de los incipientes Estados de Bienestar y en general, un recorte y disminución de la calidad de vida del ciudadano promedio. La bibliografía que hemos recopilado nos habla de cómo el modelo de desarrollo neoliberal atraviesa una serie de desafíos en América Latina, ligados, principalmente, al aumento de la pobreza incluso en condiciones de prosperidad económica, como lo es el caso chileno y colombiano. Las aproximaciones de los enfoques teóricos que hemos descrito, se centran especialmente en las características de las estructuras y las instituciones que explican el subdesarrollo económico. Asimismo, los autores están de acuerdo en que, este subdesarrollo económico genera rupturas políticas y fenómenos de estallido social antineoliberal, explicando la explosión de la protesta desde la variable institucional y estructural.

Enfoque Marxista

El modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la protesta social en Chile, Colombia, y en general toda América Latina, ha sido ampliamente estudiado desde el enfoque marxista. En particular, la corriente marxista ha planteado elementos concretos para un cambio social radical que trascienda el modo de producción capitalista-neoliberal; en contraste con el enfoque estructuralista, que también lo indica, pero más que nada refiriéndose a la integración social y política en el marco del Estado-nación capitalista.

Una de las corrientes más relevantes ha sido la de la Teoría de la Dependencia Marxista (a partir de ahora TDM), que ha entendido la cuestión del modelo de desarrollo latinoamericano y su condición de dependencia como unas categorías estructurales de alcance histórico, que corresponden al modo de producción capitalista, y que explicarían los sucesivos acontecimientos de rupturismo político y social presenciados en los últimos diez años en Chile y Colombia. Los autores que abordan la TDM, generalmente hacen referencia a tres criterios: los que rechazan la posibilidad de que el capitalismo se desarrolle en la periferia, porque el modelo implica inevitablemente que haya países desarrollados y subdesarrollados; los que sopesan las dificultades con las que lidia el capitalismo en la periferia, insistiendo en la tesis del estancamiento estructural; y los que ven probable el desarrollo capitalista, pero haciendo énfasis en la forma dependiente que tomaría (Sotelo, 2001).

La TDM como corriente teórica reviste gran importancia, pues ha detectado y abordado problemas que los otros enfoques han insistido en llamar “efectos colaterales” de la modernidad, como lo son el desempleo y la marginalidad social (ahora denominada informalidad laboral). Igualmente, han ignorado la cuestión de la crisis del capitalismo, la agricultura y sus sujetos: el campesinado; la cuestión rural e indígena; y los factores objetivos y subjetivos que dificultan la transición a sistemas sociales de vida y trabajo alternativos, bajo el amparo de la sociedad del conocimiento y el voluntarismo de individuos aislados (Sotelo, 2001). La TDM intenta ocuparse de las cuestiones concernientes a las estructuras de clase y al poder del Estado, de ahí que su lectura derive en aspectos específicos como la acumulación de capital, el intercambio desigual, la superexplotación del trabajador, las transferencias de valor, entre otros.

Así, los teóricos marxistas de la dependencia criticaron la exclusión que hizo el enfoque estructuralista de la variable «luchas sociales». En trabajos como los de Immanuel Wallerstein y André Gunder Frank, se ha evidenciado la ausencia de los sujetos sociales al presentar la historia latinoamericana. Autores como Katz (2018) han afirmado que cuando estas son incluidas en el análisis, se ha hecho bajo la premisa Wallersteniana de que los sectores populares no pueden torcer el rumbo de la economía-mundo. Katz reconoce que, a diferencia de los teóricos estructuralistas, los marxistas de la dependencia nunca se divorciaron del análisis del subdesarrollo desde las batallas sociales, precisamente por su “compromiso con la lucha revolucionaria”, y la idea de que el proceso hacia el socialismo implicaba reconfigurar el capitalismo dependiente latinoamericano (Katz, 2018) como se citó en (Mora, 2020).

De acuerdo a Mora (2020), la cuestión de la acción colectiva y las luchas sociales dentro de la Teoría de la Dependencia ha generado grandes debates tanto por acción como omisión de esta variable analítica. En ese sentido, se han agrupado en dos segmentos a los autores de este enfoque. El primero, incluye los pioneros de las “teorías de la sobredeterminación”, lo que Katz (2018) calificó como “funcionalismo sin sujetos”, donde teóricos como Cardoso han sido criticados de prescindir del papel determinante de los conflictos agrarios en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, omitiendo que este condicionante representaba un rol hasta más relevante que el de la extracción de recursos. En palabras de la autora, esto excluyó de la ecuación a la acción colectiva y la lucha de clases misma, por lo cual la tesis Prebisch se incluyó en este grupo en tanto su análisis estructuralista sobredeterminó las luchas sociales al comportamiento económico de los países latinoamericanos. Es decir, este análisis asume que los indicadores macroeconómicos favorables son indirectamente proporcionales a la conflictividad social, por lo cual se considera que el descontento social puede ser mitigado con políticas sociales que mejoren los indicadores, superando así la conflictividad social (Sunkel, 2007) como se citó en (Mora, 2020).

Para Mora, la interpretación de Sunkel se puede calificar de unilateral y sobredeterminante, pues entiende las consecuencias del auge neoliberal en América Latina en términos

macroeconómicos como el ingreso per cápita, el gasto social del Estado, el crecimiento, entre otras, ignorando los términos sociales de este periodo. De ahí que el aumento de la conflictividad social sea explicado desde factores económicos, sobredeterminando las causas y motivaciones de las luchas sociales.

Por otra parte, los teóricos marxistas de la dependencia como Cardoso y Faletto (1977), autores de “Dependencia y Desarrollo en América Latina: Un ensayo de interpretación sociológica”, no han desconocido el papel de lo que ellos denominan “cambio social” en el diagnóstico de las economías latinoamericanas. En su texto, una de las variables incluidas al análisis de las “configuraciones estructurales”, es la de la relación entre grupos, reconociendo la relevancia de los factores y movimientos sociales en los países latinoamericanos.

De todos modos, según Mora, Cardoso y Faletto siguen siendo clasificados en el segmento de teóricos sobredeterminantes, a pesar de que, en sus planteamientos, los movimientos sociales hacen parte del análisis estructural. Para la autora, el papel que estos le asignan a las luchas sociales es insuficiente, y no consideran que tengan la capacidad de desafiar el modelo de desarrollo neoliberal (Cardoso y Faletto, 1997). Mora retoma a Bambirra (1982) para afirmar que una de las críticas más importantes a Cardoso y Faletto, es la de no permitir revelar la compleja variedad de la acción colectiva, los grupos y clases que la componen, y las motivaciones e intereses económicos objetivos que tienen, ni atravesar los debates acerca de en qué medida el cambio latinoamericano se ha orquestado a través de las luchas sociales, y no por los cambios en la economía mundial o la voluntad de la burguesía nacional. En la misma línea Cueva (1974) expuso que la debilidad de la teoría marxista de la dependencia consistió en el análisis de clases y sus luchas, en tanto la teoría toma como referentes principales a las oligarquías, las burguesías y las clases medias, relegando el papel de los sectores populares y la movilización popular al de una masa manipulada por algún caudillo o movimiento populista (Cueva, 1974) como se citó en (Mora, 2020).

El otro segmento teórico al que hace referencia Mora es el de las teorías de las luchas condicionadas-autónomas, en el que los teóricos marxistas de la dependencia recurren al análisis

de las luchas sociales y la movilización social sin el dejo voluntarista de los primeros. Los autores más relevantes de este segmento son los brasileños Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra, quienes otorgaron gran relevancia a las luchas sociales en sus explicaciones de la realidad latinoamericana. Para Delgado et al. (2015) la lectura de Marini y Bambirra es relevante en tanto las transformaciones latinoamericanas deben ser estudiadas desde temas como la división internacional del trabajo y la superexplotación, pues estos explican la precarización de las clases populares, la profundización de las contradicciones sociales y el desmonte de los derechos laborales y políticos, lo cual constituye el móvil y las lógicas detrás de las luchas y movilizaciones latinoamericanas.

De la misma manera, Félix (2015) sostiene que las luchas sociales latinoamericanas de los últimos treinta años se han dado en el marco de las contradicciones del neoliberalismo, lo cual ha redundado en el nacimiento de proyectos pos-neoliberales para apaciguar los países periféricos y sus demandas. Para el autor, estas luchas implicaron reclamos por democracias reales, revoluciones populares y campesinas, y en algunos países movilizaciones contra gobiernos dictatoriales. Volviendo a Katz, se puede decir que América Latina como región tiene una tradición movilizadora y de conflictos sociales, incluso más vigorosa que la asiática y africana, por las guerras de independencia y las luchas antiimperialistas, surgidas de forma paralela al nacimiento de las repúblicas burguesas. Para el autor, ni siquiera luego de la instauración del neoliberalismo se logró erradicar la tradición combativa de una región con “una herencia viva de nacionalismo antiimperialista, importantes avances en el terreno de las libertades democráticas, y la supervivencia de la experiencia socialista en Cuba (Katz, 2008) como se citó en (Mora, 2020).

Una muestra de eso se ha constatado en las luchas por el territorio en contra del extractivismo neoliberal. Tanto comunidades indígenas como campesinas, y en algunos casos movimientos urbanos, han hecho una férrea oposición a la mercantilización de la naturaleza, la renta de la tierra y la dependencia económica a esta (Félix y Hato, 2019) como se citó en (Mora, 2020). En este sentido aparecen nuevas corrientes teóricas que explican el fenómeno antineoliberal en Colombia y Chile. Uno de ellos es el marxismo ecológico, que entiende la oposición al neoliberalismo desde los movimientos sociales que se erigen en contra del modelo de producción

extractivista financiado por capital transnacional. Camacho (2018) expone que las luchas en contraposición a la privatización del agua, el gas y los monocultivos, suponen una cosmovisión del territorio y sus componentes como sujetos de derechos y no como recursos o mercancías. Los marxistas de la dependencia han indicado que este neoextractivismo, y la neoliberalización de la naturaleza, ha profundizado la condición de dependencia a los mercados internacionales y truncado los esfuerzos de diversificación productiva, haciendo que la articulación de América Latina con la globalización se haga en términos de saqueo exacerbado (Félez y Haro, 2019).

Bajo esa misma perspectiva, Harvey (2005) afirma que la gran relevancia del aporte de los movimientos sociales al fenómeno antineoliberal es la de plantear alternativas al proceso de reificación de la naturaleza, las relaciones humanas y los procesos de despojo adoptados desde la firma del Consenso de Washington. Después de la incorporación del decálogo, la superación de la crisis de la deuda se hizo a través de privatizaciones de sectores que fueron mercantilizados intensivamente en América Latina, entre ellos, la naturaleza y los territorios indígenas. Este proceso de neoliberalización profundizó la conflictividad social, por la privatización y el despojo de comunidades, la intervención de los ecosistemas, la mercantilización de los recursos naturales y la socialización de los costos ambientales (Ávila, 2015) como se citó en (Mora, 2020).

Paralelamente, Alvear (2019) respecto a los ciclos de protesta en Latinoamérica, y particularmente en Chile y Colombia, hace una lectura desde un marxismo más ortodoxo. Para este autor, el crecimiento de las sociedades modernas implica unas lógicas dialécticas y unas dinámicas internas paradójicas, que Marx anticipó al afirmar que los procesos de crecimiento económico van acompañados de una tendencia a la concentración de los medios de producción y la acumulación de capital. Esta tendencia sería la consecuencia del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas que fomentan una división asimétrica entre los “señores del capital” y la masa de trabajadores. Esta concentración, a su vez, genera una concentración de prestaciones en las distintas esferas sociales, lo cual deriva en una estratificación de estos sistemas: el del dinero o propiedad (economía), el de la formación de burocracias y tareas de organización (política), el de los desarrollos tecnológicos (ciencia), el del acceso a medicamentos y terapias (salud), el de la obtención de competencias y certificados (educación), el de la regulación de conflictos (derecho), entre otros (Alvear, 2019). Dicha estratificación condiciona el rendimiento de estos sistemas

sociales para la ciudadanía, frente a lo cual el autor propone cuatro niveles de inclusión/exclusión, que dan cuenta del grado de funcionalidad cualitativa de estos sistemas en la sociedad, a saber: inclusión plena, regular, precaria y abierta exclusión (p.07). De acuerdo al autor, los plenamente incluidos concentran el uso sobresaliente de los rendimientos de cada sistema social, mientras que los regularmente incluidos y los precariamente incluidos se desplazan entre el rendimiento medio e insuficiente. Cuando esta estratificación se sostiene en el tiempo, como en el caso chileno y colombiano, la movilidad social se vuelve escasa, provocando que, sean siempre los mismos quienes acceden a la concentración y, por ende, al rendimiento de los sistemas (dinero, propiedad, cargos de toma decisiones, clínicas privadas, colegios privados, etc.), lo cual limita la habilidad para adaptarse a los cambios y necesidades del contexto. El autor retoma a Mascareño (2018) para plantear el término *lock in* (cierre), que describe la “concentración reiterativa de rendimientos” de los sistemas sociales (p.10), en la que se origina una dinámica interna de “repetición irreflexiva”, que propicia inercia y limita la relación del sistema con el entorno. Así, esta trampa inercial termina por contribuir, reproducir e incluso intensificar la concentración, y el esquema de estratificación generado por la misma, lo cual socava la función original de la esfera o sistema social respectivo, pues si la función de un sistema se mide por sus rendimientos, una concentración irreflexiva y estratificante afectaría su ejercicio. Por lo tanto, la función original del sistema (por ejemplo, tratar o prevenir enfermedades para el sistema de salud), se cambiaría a raíz de la concentración de rendimientos para su ejercicio (qué tipo de plan de salud se tiene), lo cual propicia que la diversidad de las esferas sociales quede de facto cuasi-paralizada para una masa amplia de la población, volviéndola absolutamente disfuncional para éstos (Alvear, 2019).

Esta instauración de los esquemas de estratificación constituye una amenaza para el sistema social respectivo, lo cual, en palabras del autor, propicia un *momento regresivo de crisis*, en el que se enmarcan los ciclos de protestas latinoamericanas y particularmente chilena y colombiana.

Enfoque Funcionalista

Desde el enfoque funcionalista se producen la mayoría de textos académicos en defensa del modelo de desarrollo neoliberal, por lo tanto, entienden la protesta social antineoliberal como un problema adaptativo de los individuos. Este enfoque, sumamente influenciado por los postulados de la Escuela de Chicago, ve a la sociedad como un sistema organizado en pequeños subsistemas. La *funcionalidad* de este sistema es determinada por el nivel de adaptación de los subsistemas a la gran estructura. El enfoque, en virtud del positivismo en el campo científico, dio lugar a una sobreestimación de lo económico para explicar el comportamiento humano y social. Esto fue traducido en ecuaciones sociales y modelos ideales, reduciéndose a dimensiones cuantitativas surgidas luego de la Segunda Guerra como reacción política e ideológica de los centros de poder del capitalismo para legitimar el orden poscolonial, en cabeza del sistema imperialista estadounidense (Sotelo, 2005).

En el funcionalismo, el conflicto y la movilización social es caracterizado desde su minusvaloración científica, e incluso su criminalización ética (Cadarsó, 2001). Este desdén intelectual se vio además fortalecido por las tendencias políticas e ideológicas conservadoras de gran parte de los sociólogos norteamericanos precursores del enfoque. Por ejemplo, para T. Parsons, el orden era un fundamento de su concepción de sistema social, por lo cual cualquier disputa o conflicto dentro del mismo era considerado una traición a los intereses colectivos. A partir de los 50's esta corriente teórica atravesó algunos cambios que dieron paso a interpretaciones más sosegadas del fenómeno del conflicto, y se empezaron a ver los conflictos y las movilizaciones como procesos de acción social que “contribuían a la estabilidad y perdurabilidad de los sistemas sociales, hablándose a partir de entonces de las funciones del conflicto social” (Cadarsó, 2001).

Del enfoque funcionalista se derivan otras teorías como la de la dualidad estructural, la de la modernización y el cambio social. El dualismo estructural, considera que la modernización de las condiciones sociales, institucionales, económicas e ideológicas de un país traerán probablemente crisis y tensiones, que se manifiestan por una situación de dualidad estructural, en tanto los países poseen estructuras capitalistas y no capitalistas que coexisten entre sí. Estas estructuras no capitalistas están encarnadas por las clases sociales de campesinos, terratenientes e indígenas que tienen mucho peso en la sociedad y que deben transformarse poco a poco bajo el influjo de las fuerzas capitalistas de la burguesía, la clase media, el Estado y la clase obrera (p.51).

De esta manera, los textos que defienden el papel del neoliberalismo, explican su conexión con la protesta social retomando a Hayek (1978), quien se refiere a la imperfección del mercado y el juego de la oferta y la demanda como los problemas de “la imperfección humana”, y la importancia del aprendizaje de la “prueba y error” en los mercados, atribuyendo las causas de la movilización a un fracaso individual de inserción en el mercado, un comportamiento que es inherente al desarrollo inequitativo de los subsistemas en los procesos de modernización (Shearmur, 2018).

Shearmur (2018) vuelve a la teoría de los cuatro estadios de Adam Smith (1978), donde se establece que el tratamiento de las transformaciones sociales a larga escala implica la pérdida de bienestar para algunas personas. Para Smith, una sociedad comercial puede ofrecer a sus ciudadanos bienestar y un tipo de libertad sin precedentes, admitiendo que este sistema, con todo y sus fallas, es mejor que cualquier otra alternativa disponible. Así, el argumento neoliberal se basa en reforzar la teoría de Smith con el énfasis de Hayek en el significado de la toma de decisiones desagregada y el valor de la propiedad privada para dispersar el poder. Igualmente, para el autor, debemos preguntarnos si la intervención del Estado en el mercado será algo verdaderamente benevolente, pues si este es invocado para encargarse de las fallas del mercado, deberemos identificar cuáles son las necesidades para intervenirlo, y preguntarnos por qué confiaríamos en que el Estado hará lo necesario y los agentes con acceso al poder no lo usarán con propósitos predatorios. En palabras de Shearmur, hasta que este desafío no sea superado, no se puede confiar en la racionalidad de los modelos en los que el Estado y sus funcionarios actúan para corregir las perversiones del juego de la oferta y la demanda.

Otros autores como Casey (2016) argumentan que las economías neoliberales tuvieron un desempeño favorable comparado con las otras en los inicios de los 80's. Al mismo tiempo, prosigue, aunque las economías neoliberales han sido más volátiles, con periodos de crecimiento robusto marcado por fuertes caídas que erosionan (pero no eliminan) las ganancias obtenidas durante las expansiones. Teniendo esto en cuenta, el desempeño general de las economías neoliberales ha sido positivo (p. 04). Sin embargo, este autor acepta que el neoliberalismo como modelo de desarrollo no está agotado, sino que necesita reformarse en tres áreas, como lo son la

tendencia a la desregulación de los mercados financieros para producir un crédito excesivo; preocuparse por la amplia desigualdad en el ingreso; y maniobrar las consecuencias post-crash económico reviviendo el crecimiento.

Como los autores funcionalistas no encuentran problemático el modelo de desarrollo, la vinculación con la protesta social se hace en términos condescendientes, entendiéndola como un reducto de los procesos de interacción cotidianos, la histeria colectiva, el voz a voz, y la divulgación de la opinión pública. El enfoque funcionalista ha sido objeto de sólidas críticas. Autores colombianos como Archila (2003) cuestionan el carácter reduccionista del mismo, y afirman que este ignora las motivaciones de la ciudadanía que se moviliza, y explica el descontento social desde los desajustes estructurales propios y normalizados en los procesos de modernización.

Enfoque Estructural-Funcionalista

El enfoque estructural-funcionalista, cuyos pioneros fueron Talco Parsons y Robert Merton, considera las tensiones de la estructura social y las diferencia en dos tipos de efectos: el “normal”, que obedece a las lógicas institucionales de los grupos de presión y oposición; y el “anormal”, que se refiere al *Collective behaviorism*, o conductismo colectivo espontáneo, generado en la ruptura del orden, y que se vincula a las revueltas, las turbas y motines. Para los teóricos de este enfoque, las multitudes se movilizaban en tanto eran manipuladas por minorías de agitadores, lo cual provocaba manifestaciones “irracionales y violentas” (Melucci, 1999) como se citó en (Castro, 2018). A partir de 1950, los postulados del sociólogo y economista Neil Smelser, afianzaron la perspectiva del “comportamiento” colectivo, al integrar las dos lógicas de Parsons y Merton, llegando a afirmar que, con todo, las insurrecciones se proponían restablecer el orden social.

A finales de la década de 1960, con la intensificación de las diversas protestas a lo largo y ancho del mundo, como la Revolución de Terciopelo en Praga, el mayo francés, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y los movimientos feministas y ecologistas, el enfoque estructural-funcionalista evidenció la diversidad de modelos organizativos, de actores, de

performances, ajenos a la idea de la “lucha obrera”, y alejados también de los partidos y los sindicatos. Esto permitió exteriorizar la pluralidad de factores del fenómeno, y facilitó la acepción del mismo como racional. A partir de ahí, este campo de conocimiento se nutrió de análisis que hicieron énfasis en la heterogeneidad de las identidades que se manifiestan y la diversidad de formas de acción y sus significados.

En lo que respecta a la relación entre el modelo de desarrollo neoliberal y la protesta social en Chile y Colombia, el enfoque estructural-funcionalista ha estudiado el impacto de los procesos de modernización en el apaciguamiento del descontento social. Aspectos como la estructura económica y social, la industrialización, la movilidad, la urbanización, el empleo, entre otros, determinarían los niveles de modernidad en los que se propiciaría el cambio social necesario para paliar el descontento y en esa medida el conflicto expresado en movilizaciones. Así, emular los estadios de desarrollo euronorteamericanos, asimilar los valores y conductas de las sociedades industriales (sociedades de consumo) mediante la difusión de pautas de producción y estilos de vida de los países industriales, impulsaría un equilibrio entre desarrollo y orden, donde la armonización y maximización de ambos facilitaría la tramitación del descontento (Sotelo, 2001).

El exponente latinoamericano más importante de este enfoque es el sociólogo ítalo-argentino Gino Germani, cuya obra cobra relevancia por la pregunta sobre la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, y su impacto en una región convulsionada por crisis políticas, económicas y sociales, exacerbadas por las consecuencias de la globalización y la regionalización del sistema capitalista (Sotelo, 2001). Esto justifica un análisis crítico de los aportes estructurales-funcionalistas de Germani, “cuya influencia fue decayendo y entrando en desuso conforme se fue profundizando la crisis del patrón de acumulación capitalista dependiente que deterioro el sistema de estratificación social” (p.55). Para Sotelo, países como México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia; a través de la reconversión industrial, el aumento de la productividad, el incremento de la urbanización, y la apertura al mercado mundial; han experimentado crisis internas entre las sociedades de clases, donde se han enfatizado los problemas y contradicciones del sistema capitalista. El trabajo de Germani sobre la teoría de la modernización y el cambio social, atribuye dicha contradicción a la dinámica de la estructura social, suponiendo que el cambio social surge

por la modificación de cualquiera de las partes de la estructura. Para Germani, las motivaciones y las causas de las movilizaciones son un síntoma del subdesarrollo y un problema individual, pues uno de los rasgos del desarrollo es su carácter expansivo, en el que a medida que se avanza, las regiones y los grupos marginales van quedando incluidos en la nueva forma de civilización, siendo un problema particular el no insertarse a las lógicas de mercado. En otras palabras, Germani entiende que una vez puesto en marcha el proceso de modernización, el hecho de que algunas regiones y grupos marginales no alcancen a ser incluidos en la “nueva forma de civilización”, corresponde a la lógica del individuo aislado y a una forma errónea de interrelacionarse con las partes de la estructura global de la sociedad capitalista. En ese sentido, la teoría de la modernidad no llega a aceptar que el régimen capitalista es contradictorio, y que, a la larga, termina provocando colapsos económicos y políticos en los niveles regionales y mundiales. La teoría de la modernización del enfoque estructural-funcionalista, pretende encontrar el equilibrio y la integración del sistema político como paso previo de la industrialización y de la autonomía del capitalismo, lo que, de acuerdo a Sotelo, no solo nunca se cumplió, sino que se profundizó y redefinió la dependencia estructural, lo cual se expresa en el endeudamiento externo y la imposibilidad de industrializar las economías latinoamericanas, para contrarrestar la dependencia. De modo que, ni la transición a la modernidad, ni la semindustrialización, ni la fase de integración a la economía mundial, implicaron una reducción de los riesgos de crisis de legitimidad y estabilidad de los sistemas políticos, ni el proceso de modernización expuesto por Germani aumentó los niveles de calidad de vida de la población. Estos resultados evidencian la problemática del enfoque estructural-funcionalista pues el supuesto de transición de la sociedad tradicional a la sociedad industrial, parece trasladarse al concepto de transición en términos de la contradicción capitalismo-socialismo. Finalmente, la última crítica que se le puede hacer al enfoque es que se encuadra en modelos ahistóricos y matemáticos que no contemplan los aspectos sociales y cualitativos del desarrollo histórico capitalista en condiciones de dependencia estructural como el latinoamericano (Sotelo, 2001).

Enfoque de la Teoría de la Elección Racional

El enfoque de la Teoría de la Elección Racional (a partir de ahora TER), enmarcado a su vez en la corriente funcionalista, se pensó la relación entre neoliberalismo y protesta social en términos de racionalidad. Los académicos de este enfoque consideraron que las acciones colectivas, antineoliberales o no, podían tener un carácter racional, si había una congruencia entre medios y fines. Por lo tanto, para ellos, las motivaciones para movilizarse radicaban no en el modelo de desarrollo en sí, si no a un cálculo racional de costo-beneficio. En esta misma línea, la teoría de la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson (1965) inspiraría los postulados del denominado individualismo metodológico, cuyos postulados consistían en considerar que la decisión de implicarse en acciones colectivas correspondía a una decisión individual basada en la idea de maximizar beneficios y disminuir costos, siendo estos, en el marco de las movilizaciones, la indignación o el descontento. Olson afirmó que la motivación de los agentes para participar en un grupo era la garantía de un beneficio privado, por lo cual el accionar individual se daba en términos de preservación del bienestar y no en la búsqueda del bien común. En ese sentido, la mayor contribución de este enfoque teórico es la de la acción individual, donde los agentes se definen como sujetos racionales con plena voluntad, que se movilizan con base en cálculos y no por una alineación con el movimiento social. Posteriormente, la TER sumó al análisis de la racionalidad de los actores, las acciones orientadas a cambiar las condiciones sociales, el análisis de estas estrategias y la instrumentalidad de estas acciones. De esta tendencia surgieron dos perspectivas teóricas: la de las Estructuras de Oportunidades Políticas (a partir de ahora EOP), que hace referencia a las dimensiones consecuentes favorables para hacer reclamos sociales, a saber, el acceso institucional, la viabilidad de formar alianzas políticas, la capacidad represiva del Estado, entre otras (Tarrow, 1998) como se citó en (Castro, 2018). De esta perspectiva se desprende a su vez la categoría de “repertorios de acción”, que alude a las tácticas para actuar colectivamente y la evolución de estas en el tiempo (Tilly y Wood 2010) como se citó en (Castro, 2018). Otra categoría que se desprende de la EOP es la de “ciclos de protesta”, que plantea las fases de intensificación de los conflictos y las acciones colectivas en el sistema social (Tarrow, 2004) como se citó en (Castro, 2018).

La segunda perspectiva se refiere a la interpretación de las estrategias de movilización, esto es, las acciones puestas en marcha por los agentes que se manifiestan, para adherir simpatizantes y afianzar la unidad. Esta perspectiva está interesada principalmente en las organizaciones de movimientos sociales (OMS), las bases que la componen, la “micromovilización”, que adelantan para atribuir de sentido a los repertorios de acción que justifican el movimiento (McCarthy, 1999) como se citó en (Castro, 2018).

El mismo Castro en otro texto denominado “La protesta social en América Latina: una aproximación a su fisonomía a propósito de los estallidos sociales de 2019”, recoge los postulados de los mayores exponentes de este enfoque: (Tilly, 2010); (Tarrow, 2008); (Wood, 2010); (Melucci, 2010), quienes se distancian de nuevo de la explicación de la acción colectiva desde el modelo de desarrollo. Basándose en Tilly y Wood, el autor afirma que el ciclo de protestas latinoamericano, y en especial el chileno y colombiano, se puede entender a raíz de la exacerbación de los roces entre los sectores dominantes y la sociedad civil, las contradicciones de intereses entre ambos, y los cambios institucionales e ideológicos del poder (McAdam, 1999) como se citó en (Castro, 2020). Estas protestas, han representado un esfuerzo público, organizado y sostenido por exponer ante el Estado unas demandas colectivas; han estado dotadas de unos repertorios de movilización, como vigiliadas, mítines, manifestaciones, procesiones, entre otros; y han impulsado unas demostraciones públicas de lo que Tilly denominó WUNC «Worthiness, Unity, Numbers and Commitment», es decir dignidad, unidad, número y compromiso (Castro, 2020). Así, la movilización social se ha dado configurando unos esquemas de significación que reúnen las demandas de varias organizaciones, constituyendo unos “marcos maestros” que articulan fuerzas y apalancan las protestas, como lo son las consignas “Latinoamérica despertó” o “el pueblo unido jamás será vencido”; igualmente, se han identificado unos agentes que construyen un nosotros colectivo, en aras de proporcionar las bases emotivas para solidarizarse unos con otros y sumarse a la acción; este nosotros se materializa en la “identidad colectiva” y en “formas organizacionales, sistemas de reglas y relaciones de liderazgo” (Melucci, 2010) como se citó en (Castro, 2020). Para el autor, el análisis desde la Teoría de la Elección Racional del ciclo de protestas, no pasa por la variable modelo de desarrollo neoliberal, sino que se establece su emergencia como “producto de las tensiones internas de la estructura social y de los grupos y organizaciones que la componen”

(p.178), y su desarrollo se sustenta en la creación de organismos de articulación desde los cuales se problematiza la realidad, se recomiendan acciones y se promueven actos de unidad.

Finalmente, el balance que hacemos de este capítulo de enfoques para el análisis político identificados en la literatura especializada, da cuenta de una prevalencia del enfoque estructuralista y marxista para la explicación de la relación entre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia. En total, (13) textos estructuralistas fueron recopilados, dentro de los cuales las hipótesis más relevantes fueron las de la escuela cepalina, con la teoría del sistema mundo centro-periferia para explicar las condiciones del subdesarrollo y de dependencia desde las cuales se caracterizan las causas de la movilización social. Expusimos también los puntos de encuentro identificados entre el enfoque estructuralista y el institucionalista, que se basan en Polanyi (1978), la teoría del doble movimiento polanyiano y la teoría de la sociedad de mercado. Este es un aspecto clave para el argumento de este trabajo, en tanto la hipótesis principal se vale de la teoría de la sociedad de mercado, y sus postulados sobre la mercantilización de las no mercancías (ciudadanos y derechos) para explicar el ciclo de protestas 2010-2020 en Chile y Colombia. Igualmente, se encontraron (13) textos desde el enfoque de análisis marxista, que a su vez toma elementos del estructuralismo latinoamericano para la explicación de la movilización social, pero a diferencia de este, rechaza la posibilidad de que el capitalismo se pueda desarrollar en la periferia porque el modelo económico implica inevitablemente que haya países desarrollados y subdesarrollados, y en ese sentido desigualdades económicas y sociales que conducen a conflictos y luchas de clase. Por el contrario, los textos clasificados como funcionalistas (3) no vincularon la protesta social con el modelo de desarrollo económico neoliberal, y explicaron la movilización desde los postulados de Hayek (1978), quien atribuye las causas de esta a un fracaso individual de inserción en el mercado, un comportamiento que es inherente al desarrollo inequitativo de los subsistemas en los procesos de modernización. En la misma línea se encuentran los textos encontrados desde el enfoque estructural-funcionalista, cuyo pionero, Germani (1981), atribuyó las causas de la movilización a un síntoma del subdesarrollo y un problema individual, pues él no insertarse en las lógicas del mercado obedece a la lógica del individuo aislado y a una forma errónea de interactuar con las partes de la estructura global capitalista, ignorando las contradicciones del modelo económico que sí identifican, por ejemplo, los enfoques estructuralista, institucionalista y

marxista. Por último, en este mismo grupo se encuentran los textos del enfoque de la Teoría de la Elección Racional (5), que de la misma forma que los funcionalistas y estructural-funcionalistas, dejan de lado la variable modelo de desarrollo para explicar las motivaciones de las movilizaciones sociales en Chile y Colombia, y se centra en explicaciones de cálculo racional de costo-beneficio. Bajo este grupo de enfoques es donde se ubican la mayoría de los textos en defensa del neoliberalismo, en los que se analiza la protesta como resultado de un problema individual y no colectivo, ni mucho menos estructural o sistemático. Es por ello que el argumento central de esta investigación se vale de las teorías y explicaciones estructuralistas y marxistas, pues aportan una comprensión integral y global del fenómeno movilizatorio.

Capítulo 3

La insatisfacción social y la protesta social

El objetivo de este capítulo es aportar una caracterización de la insatisfacción social que antecedió las protestas en ambos países. Sostenemos que la insatisfacción social proviene del desmonte de servicios públicos que garantizan derechos esenciales como la salud, educación, pobreza y desigualdad resultado de las reformas neoliberales adelantadas en los 90's, y la posterior mercantilización de los derechos. Finalmente, exponemos lo problemático de medir el éxito del modelo de desarrollo neoliberal y el bienestar desde el crecimiento del Producto Interno Bruto, y proponemos algunas alternativas.

A raíz de las protestas que tuvieron lugar en el 2011 en Chile, en el 2013 en Colombia, y el desarrollo posterior de forma paralela de estas movilizaciones en varios países de Latinoamérica, organizaciones no gubernamentales (ONG's), académicos y medios de comunicación empezaron a preguntarse si se estaría germinando la antesala de la situación vivida con el fenómeno del “la Marea Rosa” de décadas anteriores (Fundación Konrad, 2015). El asombro se exacerbaba además por tratarse de países con democracias estables y economías sólidas. Paralelamente, algunos autores latinoamericanos como Chase Dunn y Morosin (2017); Almeida y Cordero (2015); Mayol (2020); Ganter y Zarzuri (2020); Paredes (2019); Amador y Muñoz (2020) y Cuadra (2020), se plantearon si la escasísima distancia entre las turbulencias sociales de 2011 y 2019 debería ser

considerada “a la luz de una hipótesis cuando menos plausible: que ambos momentos pertenezcan a un mismo ciclo” (Mayol, 2020).

Para el caso chileno, Paredes (2019) elabora una periodización comprensiva del proceso de movilización desde el 2007 al 2017. Aunque nuestro argumento se centra en el ciclo 2010-2020, se debe reconocer que, para examinar este lapso de tiempo en Chile, hay que remontarse a los acontecimientos del año 2006 y la denominada Revolución Pingüina (en alusión a una forma chilena de referirse a los estudiantes de educación primaria y secundaria, debido al aspecto del uniforme escolar chileno que los asimila a un pingüino), que constituye un elemento importante de la explicación, y según algunos autores, el antecedente principal del ciclo de protestas de nuestro interés en este país.

Paredes afirma que el ciclo de luchas chileno está marcado por una repolitización de la sociedad, que generó una nueva noción de lo público en relación con la educación. El modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Pinochet fue aún más profundizado con el retorno a la democracia, lo cual produjo, en palabras del autor, un déficit de ciudadanía que se vio relegada al endeudamiento, al individualismo y a un proceso de descolectivización de los bienes públicos. Esto favoreció el escenario en el que se da el primer hito movilizatorio: «el Mochilazo». En 2001, tal y como en el 2019, los estudiantes protestaron en las calles por el elevado precio del pasaje escolar del transporte público, que perjudicaba directamente a las familias pobres y de clase media (Aguilera, 2010) como se citó en Paredes (2019), intensificando los efectos de segregación y desigualdad como resultado de la educación mercantilizada. Posteriormente, en el 2006, emerge la «Revolución Pingüina», una gran movilización de estudiantes secundarios, que posicionaría en la opinión pública el concepto de «crisis en la educación». El propósito fundamental consistió en la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), y demandaba un rol más activo y menos subsidiario por parte del Estado, que le pusiera fin al ánimo de lucro con la educación y a la municipalización de la educación primaria y secundaria. Estas demandas mostraron los primeros indicios de la pretensión por parte de la sociedad estudiantil chilena de una educación como derecho y no como bien de consumo.

Para el autor, el 2006 redefinió las coordenadas de la lucha estudiantil por la capacidad que tuvo la movilización pingüina de influir en la opinión pública y la agenda política alrededor de temas como el problema educacional. Así, a partir de este hito, plantea una periodización de tres momentos que van desde el 2007 al 2018. Un primer momento va del 2007 al 2010, cuando estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron frente a la promulgación de la Ley General de Educación (LGE), que fue elaborada a propósito de la Revolución Pingüina, pero no incluyó las peticiones de los estudiantes, y mantuvo intactos los principales pilares que hicieron del sistema educativo uno de mala calidad, discriminatorio y mercantil, en tanto no modificó el rol del Estado, limitado a lo subsidiario, ni solucionó la disparidad o asimetría de derechos que hay en la constitución chilena (Observatorio Chileno de Políticas Educativas, 2008). Al mismo tiempo, el endeudamiento de los estudiantes aumentaba por cuenta de los créditos educativos como el Crédito con Aval del Estado (CAE), administrados por la banca privada y con respaldo del Estado. Posteriormente, para el año 2010 gana la presidencia Sebastián Piñera, abriendo una ventana para la movilización social por su programa de gobierno neoliberal y por la ausencia de un intermediario directo en el gobierno que fuera capaz de canalizar el descontento ciudadano (Luna & Toro, 2013; Segovia & Gamboa, 2012) como se citó en (Paredes, 2019).

Un segundo momento va del 2011 al 2013, en el que el catalizador fue el precio de la prueba de acceso al sistema universitario. Las movilizaciones del 2011 cuestionaron los abusos de poder de las empresas privadas contra los consumidores, y exigieron derechos sociales más robustos en un país “símbolo de la austeridad de las corrientes extremas del libremercado” (Mayol, 2020). Fue fundamental la coordinación entre la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (CONFECH), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Las tres organizaciones funcionaron a través de asambleas regulares que se convirtieron en escenarios de tomas de decisiones, con base en lo discutido previamente en las bases universitarias y secundarias. Aguilera (2010), asegura que esto fue producto de las influencias del 2006 y la Revolución Pingüina: la convergencia de iniciativas estudiantiles en armonización de los diferentes niveles educativos.

Es en este periodo también cuando los estudiantes obtienen más visibilidad nacional al lograr popularizar la consigna «Educación Pública, Gratuita y de Calidad», que consigue amplios

índices de convocatoria, organización y adhesión ciudadana (Paredes, 2019), imprimiendo además al lenguaje cotidiano la idea de «Fin al lucro», lo que alcanzó la solidaridad de gran parte de la sociedad chilena con la causa estudiantil. Adicionalmente, la premisa del movimiento señaló la persistencia de un modelo económico, social y político que reproducía desigualdad e injusticias, criticó el desfinanciamiento de la educación universitaria y la pretensión de vender parte de la Universidad Central de Chile a un conglomerado económico. De ahí que el año 2011 implicara un giro ciudadano en la agenda política y la opinión pública. La manifestación colectiva se convirtió en un instrumento de uso masivo, que le dio a la sociedad civil la capacidad de intervenir en el escenario político vía presión ciudadana. A pesar de que las movilizaciones perdieron intensidad luego de dos años de pugnas, “marcaron la ruta hacia la politización de la sociedad mediante la lucha por la educación pública y el fin del lucro” (Paredes, 2015), lo cual se extendió ágilmente en la sociedad chilena en los años venideros. Así, se define la fase 2011-2013 como el de la protesta social y la lucha en la calle, una etapa disruptiva que pudo posicionar el conflicto por la educación en Chile en el espacio público.

Un tercer y último momento según Paredes es el del 2014 al 2018. Suponemos que el corte en ese año se da por cuestiones de tiempo y porque este trabajo se da en el marco de su investigación doctoral, pero los argumentos esbozados son fácilmente conectables a los episodios del 2019 y 2020 en el estallido chileno. Este periodo se caracterizó por el «problema público de la Educación Superior», por medio de la conformación de una arena político-institucional y luego político-mediática, con tecnócratas e interlocutores que pretendieron determinar y encausar el problema de la educación, excluyendo a los actores de las calles y desplazando a los estudiantes del conflicto. Esto implicó la pérdida de influencia del movimiento estudiantil, que atestiguó en el año 2016 la implementación de una forma de gratuidad administrativa (decidida en el parlamento), que “no cambió la lógica mercantil de la educación, no eliminó el CAE (Crédito con Aval del Estado) y terminó reforzando el funcionamiento de la educación como bien de consumo al financiar a estudiantes de universidades privadas sin fortalecer la educación pública” (Kremerman & Páez, 2016) como se citó en (Paredes, 2019). Así, persiste una disputa por la propiedad del problema de la educación, que finalmente fue abordado como un problema de gratuidad, más no de fortalecimiento del carácter público de las universidades. Igualmente, no se problematizó la

bancarización de la misma, ni se derogó el Crédito con Aval del Estado (CAE), lo cual mantuvo el rol subsidiario del Estado a la demanda vía finanzas públicas. Para Paredes, el vocabulario de derechos introducido por la movilización estudiantil fue reconducido al lenguaje neoliberal, que maquilló los significados de gratuidad universal e hizo que la causa estudiantil y su lógica de derechos se volviera ambigua. Ya en el año 2018 se empezaría a implementar una Reforma a la Educación Superior, que de acuerdo al autor dejaría ver sus efectos negativos y se posicionaría en la arena mediática una vez más como un problema público. Evidentemente, un año bastó para que, en el 2019, un grupo de estudiantes de secundaria, en contra del aumento del precio del pasaje del metro, encendieran la chispa que tendría a Chile frente al estallido social más intenso desde el retorno a la democracia, que terminaría con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazaría la Constitución de la dictadura.

Con una periodización distinta (2011-2019), Mayol (2020) analiza el ciclo de protestas chilenas desde el 2011, donde afirma que las movilizaciones estudiantiles y la crisis política desatada de ellas eran maniobrables, al poderse tratar con una expansión de las políticas de bienestar social y regular el mercado para prevenir los abusos de los privados. Después de la movilización estudiantil del 2011, hay grandes movilizaciones en el año 2012, 2016, 2018 hasta llegar al estallido del 2019. El caso del 2016 fue particularmente importante al tratarse de manifestaciones en contra del sistema de pensiones privado, instaurado en dictadura a partir del Decreto de Ley n° 3500 de 1981. Este se caracterizó porque los afiliados son quienes aportan la totalidad del ahorro provisional (10% de sus ingresos), y son controlados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), organismos con fines de lucro que invierten los ahorros previsionales en el mercado de capitales para aumentar el ahorro de los cotizantes y producir utilidades para sí. Esto les cuesta a los trabajadores entre 0,41 y 1,54 de su salario. En tales circunstancias, el movimiento No más AFP se manifiesta multitudinariamente exigiendo una transformación estructural del sistema de pensiones, es decir, cambiar del sistema de capitalización individual a uno de reparto tripartito y solidario (Rozas y Maillet, 2019).

Posteriormente, en el año 2018 la movilización fue por cuenta del movimiento feminista, que se ha manifestado por cuestiones como los derechos reproductivos, la violencia de género, el acoso callejero y el acoso sexual, la ampliación del permiso postnatal materno, entre otros. En ese

sentido, el surgimiento de un masivo movimiento estudiantil por demandas educacionales introdujo “un nuevo periodo político que gatilló la expresión de otras demandas pendientes en la sociedad chilena, dentro del cual la acción colectiva feminista ha ido escalando en su masividad y radicalidad” (Benitt y Lamadrid, 2019).

Para Mayol (2020), el ritmo de agregación del fenómeno movilizador en estos años en Chile fue sorprendente, es decir, el transcurso entre una protesta de algunos miles a una de cientos de miles o millones. Por ejemplo, la marcha más grande del 2011 requirió cuatro meses de movilización, la de 2016 y 2018 un mes, manteniéndose por tres meses más, y finalmente la marcha principal del 2019 se registró una semana después del estallido, y se desarrolló por varios meses en forma de decenas de marchas que cesaron cuando el gobierno de Sebastián Piñera sugirió una transición constitucional como mecanismo de pacificación.

El ciclo de protestas en Colombia

Para el caso colombiano, en el informe “Cuando la copa se rebosa, movimientos y luchas sociales en Colombia 1975-2015” del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Archila (2019) afirma que, dentro de las tendencias de las luchas sociales en Colombia, parecen darse unos ciclos casi decenales: 1975-1987, 1988-1999, 2000-2007 y 2008-2015. El telón de fondo de estas luchas según el autor es la debilitación del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y la posterior instauración de un neoliberalismo que desindustrializó al país, flexibilizó la mano de obra, y debilitó la economía interna (especialmente la agraria), en nombre de la liberalización comercial que más que preparar al país para competir internacionalmente, abrió la economía a la llegada de mercancías externas. Así, en palabras de Archila, hoy Colombia enfrenta un extractivismo primario similar al de finales del siglo XIX, pero más depredador de la naturaleza. Aun así, la trayectoria de estas luchas es asociada al comportamiento democrático del país, no al modelo de desarrollo per sé. Archila retoma a Tilly (2004) y Tarrow (1997) para explicar que, según la literatura sobre movimientos sociales, las protestas tienden a ser más autónomas, pacíficas y de carácter nacional en la medida en que se profundiza la democracia de tipo liberal occidental. Así mismo, se sostiene que estas luchas surgen

de acuerdo a la Estructura de Oportunidad Política (EOP), que generalmente va unida a la profundización de la democracia.

En Colombia, es justamente el inicio de los diálogos de paz con las Farc lo que determina el último ciclo de protestas estudiado por el CINEP, que coincide con los gobiernos presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2018). Santos intentó conciliar dos perspectivas políticas divergentes: la negociación con las Farc y el reformismo, y la profundización del modelo económico neoliberal. Es en esta coyuntura donde se advierte el resurgimiento de la protesta, a propósito de lo acordado en los diálogos de La Habana con respecto a la cuestión agraria, y el rechazo de Santos a ajustar el modelo de desarrollo (CINEP, 2014). De acuerdo con información de la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) del CINEP, esto corresponde al ciclo ascendente de protestas que inicia en el 2011 con el paro universitario, en el que estudiantes, profesores, trabajadores y empleados de las universidades públicas representados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, se movilizaron con el propósito de rechazar el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992. Esta ley buscaba modificar de forma integral la educación superior en Colombia, inyectando aportes de alianzas público-privadas, con el objetivo de hacer “más competitivas” las instituciones educativas al crear universidades con ánimo de lucro, racionalizar los recursos de las universidades estatales, e introducir un modelo de venta de servicios para que las universidades públicas compitieran por recursos públicos. Esto provocó la solidaridad de la sociedad colombiana y posicionó en la opinión pública los múltiples problemas que enfrentan las universidades y la educación estatal. La movilización logró que el Ejecutivo retirara el proyecto de reforma y permitió abrir un debate nacional sobre la noción de la educación superior como un derecho que le concierne no solo a la comunidad educativa sino a la sociedad civil en su conjunto (García, 2015).

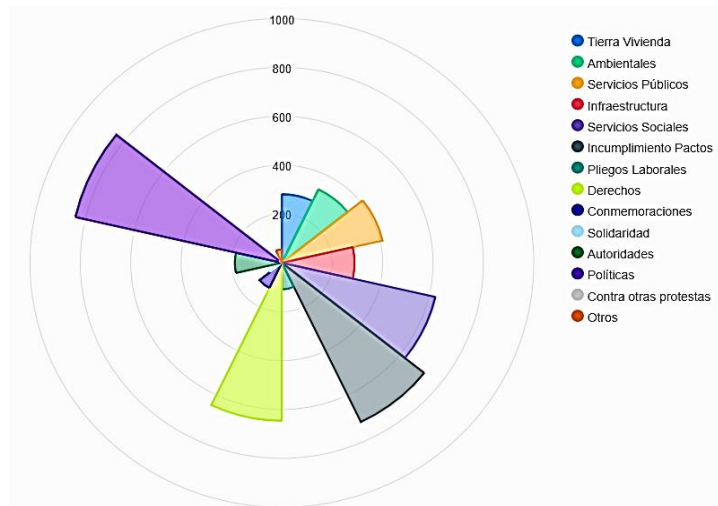
Más tarde se tiene el paro cafetero y el paro campesino en 2013, que pretendió fomentar una producción cafetera y agrícola nacional que garantizara que el producto colombiano abasteciera el mercado interno, que se impulsara una política de industrialización del café con capital y trabajo de los productos nacionales, y se rechazaran los Tratados de Libre Comercio que arruinan el agro colombiano y lesionan la soberanía nacional, entre otros; en este año hubo 1027 protestas, la mayor cifra registrada por el CINEP desde 1975 (Cruz, 2013). Posteriormente, hubo otro paro campesino en mayo del 2014, aunado al del 2013, que responde a una crisis del sector

agrario. Para Cruz (2017), esta crisis tiene sus raíces en el cambio de modelo económico de los 90's, cuando un sector protegido por el Estado entró al sistema de apertura comercial, que produjo una tasa negativa de crecimiento en el PIB del sector de -2.0 para 1992, y una disminución de cultivos de algodón, arroz, cebada, maíz, papa, tabaco, soya, trigo y hortalizas, por el aumento de las importaciones en un 700% (Suhner, 2002) como se citó en (Cruz, 2017). El resultado de esto fue el déficit en la balanza comercial agraria, lo cual incrementó los costos de producción de la industria nacional. Desde esta crisis, los campesinos han venido demandando una política agraria que contrarreste el detrimento de los precios nacionales a raíz de las importaciones y el contrabando, el aumento de costos financieros por la eliminación de los subsidios a las tasas de interés, y la reorganización de las instituciones estatales del sector agropecuario (CINEP, 2013).

Dos años después se presentaría la movilización de la “Minga” indígena en el 2016, en el que las comunidades indígenas en cabeza de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunciaron que las políticas del gobierno extractivista de Juan Manuel Santos, como lo son los Tratados de Libre Comercio y la Ley de Seguridad Ciudadana, ponían en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la supervivencia física y cultural de las comunidades rurales colombianas. Así, demandaban la participación de las comunidades en la creación de una reforma agraria que “redistribuya y democratice” la propiedad de la tierra en el país y “reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural” (Revista Semana, 2016). Finalmente, se tiene el Paro Nacional del 2019, cuyas demandas se centraron en el retiro de la Ley de reforma tributaria, la derogación del holding financiero, el retiro de la circular 049 del Ministerio del Trabajo que representaba un peligro para la estabilidad laboral, la revocatoria de la reforma pensional y laboral, y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el gobierno con diversos sectores populares (Revista Cepa, 2020). La lógica de este abanico de peticiones abarca un descontento generalizado de la población colombiana con las políticas económicas y sociales neoliberales del gobierno del presidente Iván Duque, que dificultan las condiciones de existencia y restringen el acceso a la educación y la seguridad social de las clases populares. Con todo, aunque existe una disconformidad con políticas coyunturales, las exigencias demuestran una inquietud social y un cuestionamiento a la forma en que se organiza y desarrolla la producción a nivel mundial (Revista Cepa, 2020).

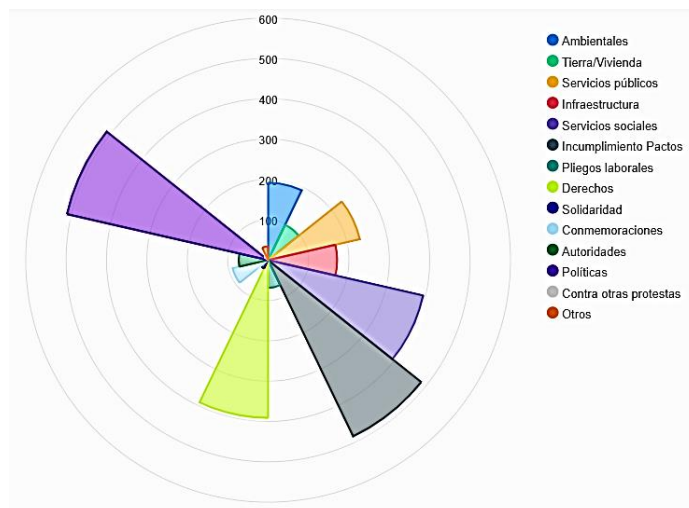
La agrupación que hace el CINEP en la base de luchas sociales (BDLS) de estos ciclos de protesta, clasifica los diversos motivos de estas movilizaciones en Colombia, e identifica que hay un cambio notorio entre los ciclos al pasar de las demandas típicamente laborales o por tierra y vivienda de décadas anteriores, a los reclamos de Derechos Humanos y a motivos políticos. Igualmente, permanecen las luchas por mejores condiciones de existencia material como las pugnas por los servicios públicos domiciliarios o en contra del extractivismo (CINEP, 2015). Esto se da en tanto la apertura neoliberal ha significado un relevante deterioro de las condiciones laborales y de vida de las ciudades y los campos, que ha generado un empobrecimiento relativo de capas medias urbanas y rurales, por lo cual los servicios públicos domiciliarios e infraestructura y los servicios sociales (educación, salud y seguridad), siguen teniendo un peso destacado en las demandas populares (Archila, 2019). Una distribución de la clasificación por motivos de estas luchas sociales se puede apreciar en las gráficas 5 y 6.

Gráfica 5: Motivos de las luchas sociales en Colombia 2011-2015



Tomado de: Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep,

Gráfica 6: Motivos de las luchas sociales en Colombia 2016-2019



Tomado de: Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep, 2015

Desde una perspectiva globalista, Amador y Muñoz (2021) analizan este nuevo ciclo de movimientos sociales en Chile y Colombia, vinculándolo a una ola de movimientos de carácter *glocal*, en el que las acciones colectivas locales se articularon con proyectos de resistencia globales alrededor de problemáticas comunes, como por ejemplo la pobreza, la destrucción de la naturaleza, la represión contra minorías étnicas, sexuales, mujeres, entre otras. Para los autores, este ciclo se caracteriza por oponerse a las medidas corporativas y antiderechos promovidas por el neoliberalismo, al igual que plantea globalizaciones alternativas que se inspiran por la consigna de que «otros mundos son posibles» y se transforma paulatinamente en un proyecto altermundialista (p.04). Los autores retoman a Pleyers (2018) para explicar que este movimiento se ha configurado como una propuesta alternativa al sistema económico mundial, que pretender ampliar y profundizar los espacios democráticos, e identifican tres hitos históricos que articulan el altermundialismo y los estallidos sociales: el primero, consta de una ola de protestas calificadas como “antisumición”, donde se cuestionaron la naturalización de la desigualdad social y económica y la exclusión como inherentes al capitalismo. Las movilizaciones más importantes de esta época fueron las revueltas de Seattle de 1999, la Primavera de Praga del 2000, la movilización en Barcelona del 2001 y 2003, la de Génova 2001 y Porto Alegre

en el 2001 y 2005. El segundo hito se enmarca en las protestas del 2011-2012, en el que se denunció la obsolescencia del modelo económico de desarrollo global, se presionaron los poderes tradicionales de tipo nacional y local, y se visibilizaron las nuevas tecnologías y las redes sociales como herramientas estratégicas en las luchas sociales y políticas. Los movimientos más importantes de esta fase fueron el Occupy Wall Street, los indignados del M-15 en España, las revueltas de la Primavera Árabe (Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen y Argelia), y los movimientos estudiantiles en Chile y Colombia anteriormente descritos. El último hito da cuenta de los estallidos sociales de 2019 tanto en Asia oriental como en América Latina (Chile, Colombia, Ecuador), en el que la participación de los jóvenes fue fundamental al ser este sector el que asumió que la radicalización de las medidas neoliberales no solo precariza a los trabajadores y representa una amenaza contra la vida natural y el medio ambiente, sino que pone en juego el futuro de las siguientes generaciones.

Para Amador y Muñoz (2021), lo anterior demuestra que durante la última década se han intensificado las protestas a raíz de la profundización de medidas macroeconómicas dirigidas por organismos internacionales que se fundamentan en las leyes del mercado, la privatización de los bienes públicos, la mercantilización de los derechos y el bienestar social, y la explotación de la naturaleza. Igualmente, evidencia que hay una creciente incertidumbre por la reducción de espacios democráticos y de salvaguardia de los derechos humanos, y pone de manifiesto el papel protagónico de la generación de jóvenes estudiantes en las movilizaciones, que abordan la defensa de la educación pública y adhieren las lealtades de los jóvenes marginados y precarizados que exigen oportunidades para estudiar y trabajar (p.11). Los autores analizan la emergencia de estos movimientos en el ciclo 2010-2020 desde los postulados de Juris et al. (2012), quien denomina «alteractivismo» a esta ola de novísimos movimientos sociales⁸, que se caracterizan por un acentuado antiglobalismo y transnacionalidad, el aprovechamiento de las tecnologías de

⁸ Los clásicos movimientos sociales aluden a los procesos organizativos de trabajadores (desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX), los cuales se orientaron hacia demandas como la democratización y el derecho al voto, mientras que los nuevos movimientos sociales —que emergen desde la década de 1950— reiteraron como objeto de lucha la identidad, la diferencia y el reconocimiento. Por otro lado, los novísimos movimientos sociales se asocian con una nueva forma de ciudadanía en la sociedad global, la cual tiene como protagonistas a los jóvenes conectados a las pantallas, quienes, a la vez, hacen presencia de manera activa en las manifestaciones callejeras, las acampadas y las asambleas.

información y comunicaciones digitales, la concertación de demandas económicas, la ejecución de novedosas formas de acción colectiva, como repertorios simbólicos y performativos, y la construcción de distintas formas de organización. Este «alteractivismo», se asocia con una nueva manera de ciudadanía en la sociedad global, en la cual son protagonistas los jóvenes conectados a las pantallas, que a su vez hacen presencia activamente en las manifestaciones callejeras. Se trata entonces de una sociedad global en resistencia que no solo se moviliza conforme a las coyunturas, sino que constituye una perspectiva de pensamiento hacia la creación de proyectos alternativos frente a la globalización hegemónica, desde la pluralidad y la diferencia. Es por ello que estos movimientos logran movilizar diversos sectores de la sociedad, favorecen escenarios de encuentro e interacción de tipo intergeneracional e intersectorial, y “se constituyen en fuerzas culturales que dan voz a los marginales y producen otros modos de sociabilidad” (Pleyers, 2018) como se citó en (Amador y Muñoz, 2021).

Los autores entienden estas acciones colectivas llevadas a cabo en el marco de los movimientos alteractivistas como formas de agencia y congregación en torno a propósitos y motivaciones compartidas que vinculan política, cultura y vida cotidiana (Amador y Muñoz, 2018). En ese sentido, de acuerdo con Pleyers (2018) como se citó en (Amador y Muñoz, 2021), se puede afirmar que las protestas y estallidos de la última década, además de destacarse por su carácter heterogéneo, comparten algunos elementos en común, como la politización de la lucha contra la desigualdad (ya no es percibido como problema social o económico, sino directamente político), y un importante declive en los niveles de identificación con los partidos políticos. En otras palabras, los jóvenes en las sociedades neoliberales impactadas por la precariedad y la desigualdad, constituyen una “condición ontológica, social y política que vinculan al sujeto *joven* a las acciones colectivas de resistencia y reexistencia por la justicia social” (p.18).

La desigualdad: contexto, trasfondo y catalizador

Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, afirma en el informe anual de esta organización que la ola de manifestaciones que han tenido lugar en los últimos años son un claro síntoma de que hay un aspecto de la sociedad globalizada que no funciona. Para las Naciones Unidas, el hilo conductor de estas movilizaciones se encuentra en la profunda y creciente frustración que generan las desigualdades. A pesar de que el análisis de las desigualdades se centra con frecuencia en el terreno económico, la ONU afirma que el verdadero protagonista es el poder: “el poder de unos pocos, la falta de poder de muchos y el poder colectivo de la ciudadanía para exigir un cambio” (PNUD, 2019).

En la misma línea, la Fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS), en un estudio preliminar con expertos sobre la Movilización social y representación política en países de Latinoamérica en perspectiva comparada (2015), advierte que, en Colombia y Chile, subsisten una serie de factores estructurales que han generado insatisfacción social ciudadana, en torno a demandas de mayor bienestar. Estos factores se han mantenido en los últimos años, a pesar de las cifras macroeconómicas positivas y encabezar el crecimiento de la región, y aun cuando ambos mantienen políticas de apertura comercial y de hecho integran junto a México y Perú una iniciativa de integración regional que se perfila como la octava economía del mundo. El estudio adelantado por esta organización señala que, a pesar el crecimiento económico que comparten estos dos países, el modelo de desarrollo ha fallado parcialmente. Específicamente, persiste una insatisfacción social debido a las deficiencias estructurales vinculadas a aspectos como pobreza, desigualdad, desempleo, dificultad para la movilidad social, entre otros (p. 10).

Los autores del informe afirman que, en ausencia de partidos legítimos y funcionales, la movilización social se ha desbordado con mayor facilidad y rapidez, ya que los espacios políticos de los que los partidos no hacen uso, son politizados y aprovechados para la protesta social. Con lo cual, la ola de protestas sociales en Colombia y Chile explota en conjunción de tres componentes: “la crisis parcial del modelo de desarrollo, la brecha entre la clase política y las demandas sociales, y la oportunidad política que implica la

politización de los espacios locales en un vacío de partidos políticos enraizados” (KAS, 2015).

La crisis parcial del modelo de desarrollo es explicada a la luz de los balances positivos a nivel macroeconómico, que no logran plasmar estos beneficios en bienestar social para todos los sectores de la sociedad civil y, principalmente, no solventa problemas estructurales a nivel socioeconómico tales como la desigualdad, el desempleo y la reducida movilidad social.

De acuerdo a nuestros objetivos específicos, pretendemos demostrar cómo se manifiesta ese descontento social en Chile y Colombia, que genera estallidos o rupturas sociales. Así, se pretende hacer una caracterización del descontento por dimensiones: salud educación, pobreza y disparidad económica.

Salud: segmentación, desigualdad y privatización

Colombia

El servicio de salud en Colombia ha sido una gran controversia en el plano académico nacional. Aunque sean indiscutibles los logros en materia de cobertura y calidad de recursos asignados, este modelo es continuamente puesto en entredicho. El sistema de salud en Colombia es regido por la Ley 100 de 1993 y la Ley 1751 de 2015, cuyos componentes más importantes son los de privatización, descentralización, procesos de identificación y subsidios a la demanda (Caicedo, 2020). El sistema se descompone entre Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, que como su nombre lo indica, lo integran las personas que vía contra laboral o trabajador independiente realizan aportes mensuales, y las personas que no poseen los recursos suficientes para realizar dicho aporte, respectivamente. En ambos regímenes, las partes del sistema son las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de salud (IPS). Las primeras son agentes privados que intermedian entre la ciudadanía que demanda salud y las instituciones que la ofertan, por lo cual reciben un aporte económico del Gobierno Nacional, del cual obtienen su parte por derechos de administración, y el resto es destinado a gastos de salud que los

oferentes de salud (IPS) exigen por su prestación de servicios como laboratorios, clínicas, hospitales, etc.

Como se puede ver en la Tabla 1, en los últimos diez años, la cobertura del sistema de salud ha presentado un crecimiento sostenido. Sin embargo, se puede observar también que la mitad de los afiliados está en el régimen subsidiado, lo cual representa una fuerte carga para el Estado.

Tabla 1: Afiliados registrados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)

Año	Subsidiado	Contributivo	R. Especiales y Excepción	Total afiliados	Población DANE	Cobertura aseguramiento SGSSS (%)	Población faltante por afiliar (DANE-Afiliados)
2010	21.665.210	18.723.118	2.222.126	42.610.454	45.509.584	93,6%	2.899.130
2011	22.295.165	19.756.257	2.347.426	44.398.848	46.044.601	96,4%	1.645.753
2012	22.605.295	19.957.739	2.347.426	44.910.460	46.581.823	96,4%	1.671.363
2013	22.669.543	20.150.266	2.402.307	45.222.116	47.121.089	96,0%	1.898.973
2014	22.882.669	20.760.123	2.402.307	46.045.099	47.661.787	96,6%	1.616.688
2015	23.179.801	21.453.376	2.402.307	47.035.484	48.203.405	97,6%	1.167.921
2016	22.171.463	22.199.204	2.260.693	46.631.360	48.747.708	95,7%	2.116.348
2017	22.434.577	22.045.454	2.287.296	46.767.327	49.291.609	94,9%	2.524.282
2018	22.658.108	22.378.384	2.138.118	47.174.610	49.834.240	94,7%	2.659.630
2019	22.808.930	22.909.679	2.243.974	47.962.583	50.374.478	95,2%	2.411.895
2020	24.026.912	23.362.083	2.195.376	49.584.371	50.709.385	97,8%	1.125.014

Fuente: Ministerio De Salud Y Protección Social. Serie Anual De Afiliación A Nivel Nacional 1995-2020.

La reducción en el número de afiliados del régimen contributivo con respecto al subsidiado, ha forzado al Estado a paliar la diferencia, pues, por ejemplo, entre el 2016 y el 2020, el incremento de afiliados al régimen subsidiado fue del 8,3%, mientras que el máximo incremento del contributivo para el mismo periodo de tiempo fue del 5,2%. De esta manera, el presupuesto asignado por el Estado es distribuido por la entidad Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud (ADRES), anteriormente denominada FOSYGA. Estos aportes monetarios son cubiertos por la contribución que cada persona afiliada hace mensualmente, y el ADRES los redistribuye entre las entidades prestadoras de salud EPS, que son mayoritariamente privadas o mixtas, y han estado envueltas en numerosos escándalos de malversación de recursos y corrupción. Así, aunque Colombia cuente con los recursos suficientes para la prestación de este servicio, la cadena de intermediación de este dinero hace que no llegue al usuario, pues las aseguradoras han incurrido en el ejercicio sistemático de captura de rentas mediante el

desvío de dineros y fraude, como lo son los recobros injustificados por medicamentos y servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) (Suárez et.al, 2017). Por eso, aunque la cobertura del sistema de salud a nivel nacional sea del 97,8%, y la inmensa mayoría de los colombianos se encuentren afiliados a este, las condiciones en las que se presta este servicio no corresponden a la demanda y necesidad de los mismos (Barrero y Jiménez, 2015). Esto se da a raíz de situaciones problemáticas inherentes al sistema, como la distribución inequitativa de recursos humanos en las regiones, servicios esenciales que son excluidos del Plan Obligatorio de Salud (POS), diferencias en la cobertura y calidad entre el plan que se ofrece a los afiliados al régimen contributivo y subsidiado, conflictos entre prestadores de servicios de salud y aseguradoras en salud, baja capacidad institucional en territorios, escasa autonomía de prestadores de servicios de salud y crisis de hospitales públicos, entre otras (Suárez et al., 2017).

En este contexto, los ciudadanos se ven obligados a recurrir a mecanismos constitucionales como la tutela para poder hacer cumplir su derecho a la salud, lo cual ha generado que sea la Corte Constitucional quien llene estos vacíos a través de órdenes y procesos de seguimiento a las EPS para proteger el derecho a la salud. En últimas, la delegación del aseguramiento del derecho a la salud en terceros hace que este deje de concebirse como una responsabilidad pública, y se convierte en un medio para fines privados, favoreciendo su mercantilización al imponerse los intereses económicos de ciertos grupos. El debilitamiento del Estado, que ha desistido de sus responsabilidades en la provisión de la salud en el marco de las reformas del modelo neoliberal, dio paso a la dinámica de la oferta y la demanda, que menoscaba el tratamiento de los servicios públicos como derechos y convierte al ciudadano en un cliente, despojándolo de su status de sujeto de derechos y convirtiendo la salud de calidad en un privilegio al que solo se puede acceder a través de un intercambio monetario.

Chile

Según Boccardo et al. (2020), tras tres décadas de aplicación de políticas neoliberales en el sistema de salud chileno, se ha producido una fuerte segmentación de la población y una marcada desigualdad entre los ciudadanos que integran el sistema. La

mayoría de la población chilena (78%) cotiza en el seguro público Fondo Nacional de Salud (FONASA), mientras que el 14% está adscrito a las Instituciones de Salud Provisional (ISAPRE), que son operadoras privadas. El otro 2,8% restante se encuentra registrado en los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden. La introducción de esta dinámica de competencia ha provocado una fuerte segmentación de la población. Esto se expresa en que la distribución de la población entre los sistemas públicos y privados sea con base en los ingresos. En esa medida, las aseguradoras privadas proveen cobertura de salud a una franja de la población que se encuentra entre el 20% con mayores ingresos, mientras que, en el sistema de salud público, la mayoría de los beneficiarios (63%), son la población de menores ingresos como se puede ver en la Tabla 2. En pocas palabras, las ISAPRE destinan su captación de afiliados hacia las personas más ricas del país.

Tabla 2: Distribución de personas según seguro de salud y decil de ingreso, año 2017

DECIL INGRESO	FONASA		ISAPRE		FFAA Y ORDEN Y OTRO SISTEMA		NO SABE O NINGUNO	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1 y 2	3.489.368	25,14 %	78.471	3,07 %	49.278	10,01 %	166.882	19,43 %
3, 4 y 5	5.256.731	37,87 %	266.107	10,41 %	129.505	26,31 %	297.016	34,58 %
6, 7 y 8	3.972.480	28,62 %	730.052	28,56 %	198.790	40,38 %	285.913	33,28 %
9 y 10	1.160.857	8,36 %	1.482.004	57,97 %	114.687	23,30 %	109.203	12,71 %
Total	13.879.436	100,00 %	2.556.634	100,00 %	492.260	100,00 %	859.014	100,00 %

Fuente: Observatorio Social (2020) como se mostró en (Boccardo et al., 2020)

Esta dinámica de segmentación se asocia a la mercantilización de este servicio público, y por la profundización de un Estado subsidiario que ha disminuido progresivamente su capacidad de acción y fuentes de financiamiento, al encomendar la provisión de servicios públicos a agentes privados. Así, la introducción del interés empresarial condiciona la asignación de recursos al sistema de salud, lo cual se evidencia en la contracción de la capacidad de atención del sistema de salud público, cuando, por ejemplo, entre el año 2000 y 2015, la cantidad de camas hospitalarias pasaron de 3,07 por cada mil beneficiarios, a 1,89 por los mismos mil; por su parte el sistema privado incrementó en un 33% este indicador durante ese periodo de tiempo (Goyenechea, 2019) como se citó en (Boccardo et.al, 2020). Este tipo de escenarios generan una ruptura entre

la capacidad del sistema público y las necesidades sanitarias de la ciudadanía, que ha sido atendida mediante mecanismos de concesión a privados para la provisión de infraestructura, y transferencias de recursos públicos a los prestadores privados de salud. Y aunque hasta el año 2018 Chile destinaba el 8,9% de su PIB a la inversión en su sistema de salud público, la realidad es que el promedio del gasto por habitante es de USD \$2182, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es de USD \$3994 per cápita. Una cifra igual de preocupante es la de la importancia relativa del gasto privado en la inversión general en el sistema de salud, pues los hogares sostienen un poco más de un tercio (35,1%), del gasto total, lo cual demuestra la sostenida presión sobre el sueldo de las familias chilenas que implica acceder al sistema sanitario, y el abandono relativo de la inversión pública.

Finalmente, es posible afirmar que una de las principales consecuencias del modelo económico neoliberal en el campo sanitario en Chile ha sido la construcción de un “mercado público de salud”. Según Boccardo, hay una relevante transferencia de recursos públicos al sector empresarial a través de distintos instrumentos de subsidio y compras de prestaciones de salud en el sector privado, que son financiados con recursos estatales (p.66). El autor retoma a Goyenechea (2019) para demostrar que entre 2015 y 2018, el Estado chileno transfirió USD \$13.671 millones a prestadores privados de servicios de salud.

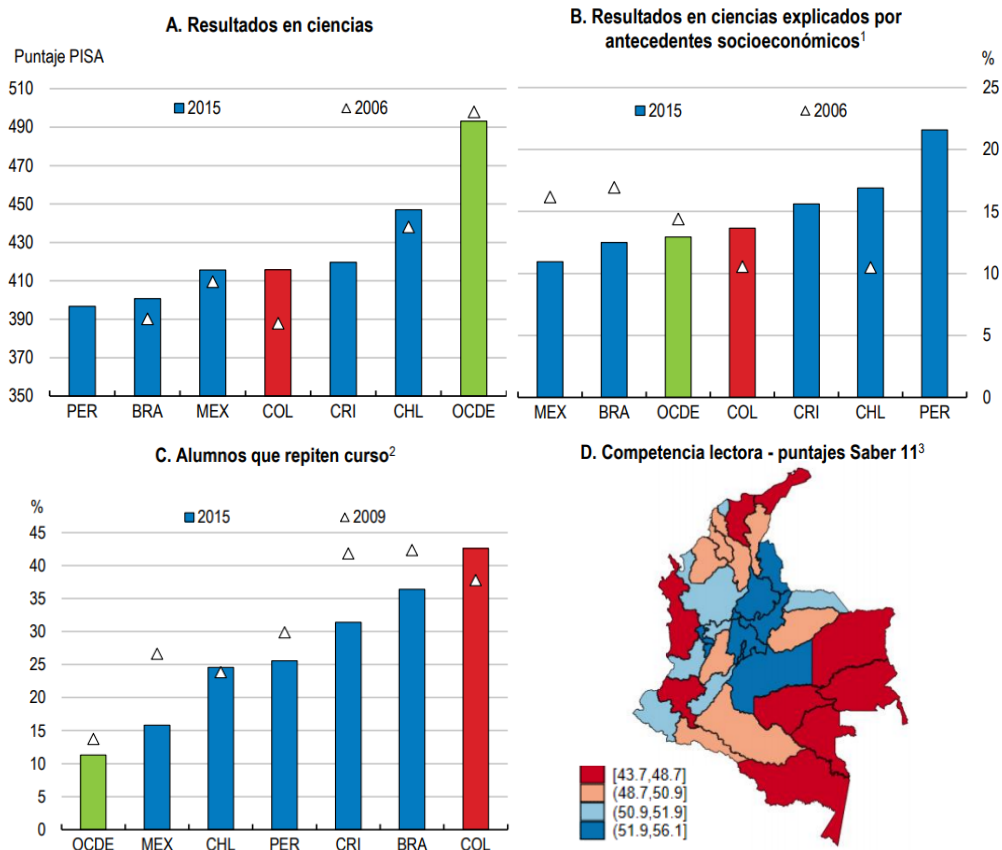
Educación y neoliberalismo

Colombia

En materia de educación se han logrado importantes avances en la ampliación de la cobertura y resultados educativos. No obstante, conforme a datos de la OCDE (2019), persisten grandes desafíos en relación a la calidad y la equidad. Por ejemplo, los puntajes PISA en ciencias siguen situándose por debajo del promedio de la OCDE y están supeditados al origen socioeconómico (Ver gráfica 7). Igualmente, aunque las tasas de abandono escolar hayan descendido, el porcentaje de alumnos que repiten curso sigue

siendo muy elevado (Radinger et al., 2018). Persisten también grandes disparidades regionales en lo que respecta a la escolarización y resultados académicos, y no se ha desarrollado suficientemente el componente de la educación en la primera infancia, que es de carácter fundamental para fomentar la calidad e influir en las competencias y perspectivas de empleo en las etapas posteriores de la vida. En ese sentido, la OCDE afirma que los problemas de gobernanza han propiciado un sistema fragmentado que genera desigualdades en cuanto a calidad y prestación de los servicios, con metas diferentes.

Gráfica 7: Los resultados académicos han mejorado, pero la equidad y las disparidades regionales siguen siendo un reto



1. Porcentaje de variación de resultados en ciencias según el índice PISA de estatus económico, social y cultural.

2. Los datos relativos a Costa Rica representan el cambio entre 2010 y 2015.

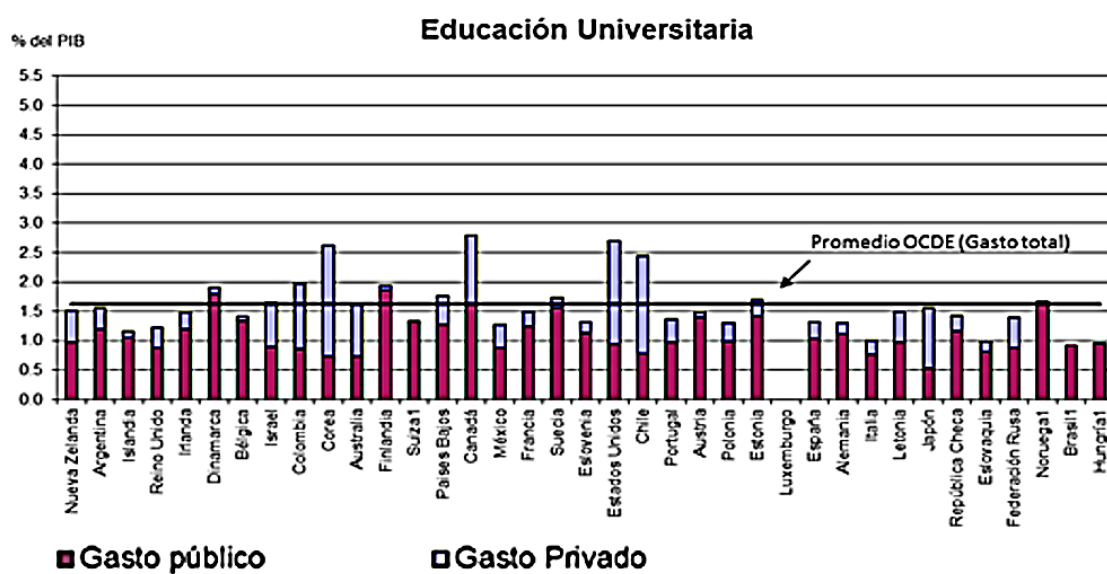
3. Puntajes promedio por departamento correspondientes a Saber 11, entre 0 y 100.

Fuente: OCDE, PISA 2006, 2009 y 2015. Saber 11, 2017-2 ICFES.

Fuente: OCDE, 2019

En lo que respecta a gasto público, aunque la mayor parte del gasto en educación proviene de recursos públicos (65%), este sigue siendo muy bajo en comparación con el promedio de la OCDE (84%). Esto implica que la participación del financiamiento privado en Colombia sea de gran importancia para el sistema educativo: 35% versus 16% que es el promedio de la OCDE. Aun más preocupante que en el nivel universitario, la mayor parte del financiamiento proviene de fuentes privadas (56%), comparado con el promedio de la OCDE que es de 31% (Ver gráfica 8). En ese sentido, los hogares individuales representan casi todo el gasto privado en los distintos niveles educativos, pero especialmente el superior.

Gráfica 8: Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB. Procedente de fuentes públicas y privadas



Fuente: OCDE, 2017

Las implicaciones de supeditar el acceso a la educación de calidad o incluso el acceso a la educación superior a la capacidad de pago en instituciones privadas, ha redundado en que, por ejemplo, en el informe de la misma OCDE “Education at a Glance 2020”, Colombia presente indicadores muy debajo del promedio de la organización y de los mismos países de América Latina. Así, para el año 2019, la OCDE identificó que de las personas entre los 25-34 años, solo el 29% obtuvo un título de educación superior, mientras

que el promedio de la OCDE es del 45%. En la misma línea, y con el mismo grupo poblacional, 27% de los colombianos no alcanzó a cursar estudios de educación media secundaria, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 15%.

Una interpretación de todas estas cifras indica que estas realidades en materia educativa tienen que ver con las transformaciones neoliberales del sistema educativo colombiano. Así, la educación pública recibe un tratamiento de acuerdo a las reglas del cálculo económico, por lo cual es medida como cualquier otra mercancía: su valor de uso. Por eso, cuestiones como el costeo y la financiación, la cobertura y la eficiencia ocupan un lugar central en las consideraciones de la política educativa (Giraldo y De la Cruz, 2016). La privatización del sistema escolar percibe entonces como objetivo el logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos escasos del Estado, y no la democratización de los servicios sociales. Ello implica que la educación no sea considerada como un servicio público ni un derecho ciudadano, si no un bien privado al que se puede acceder dependiendo de la capacidad de compra y el nivel de ingresos, lo cual genera importantes desigualdades sociales. En últimas, se asume que solamente a través del libre juego de las fuerzas del mercado y la competencia se puede alcanzar una mejoría de la calidad de la enseñanza, llevando a una desestatización de la educación. Bajo este precepto, la educación pública es ineficiente y demasiado costosa para el Estado, por lo cual debe ser reducida. Por consiguiente, cada individuo en competencia será responsable de su destino académico, social y profesional, obteniendo lo que le corresponde con base en los criterios de selección que determine el mercado (Useche, 2002).

Chile

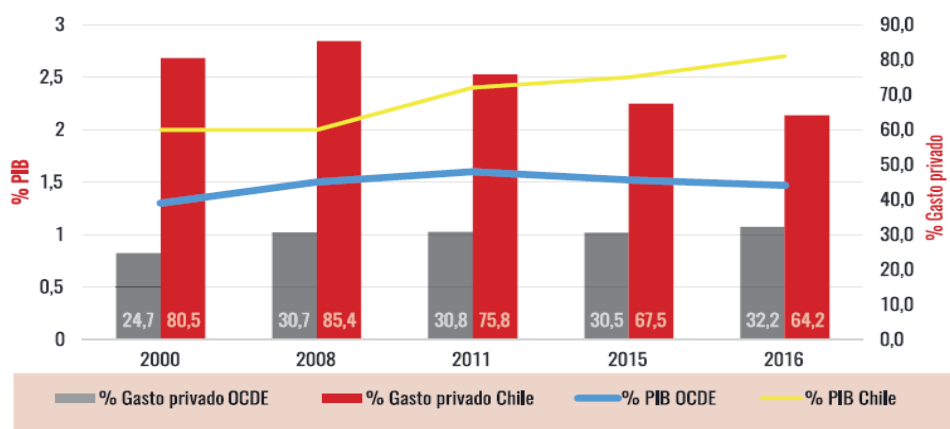
El sistema educativo chileno, como el colombiano, ha alcanzado grandes umbrales de universalidad (Luna, 2017). No obstante, es un sistema que se encuentra muy segmentado en términos socioeconómicos, lo cual genera brechas de calidad muy amplias. Estas brechas se materializan en el momento en que los estudiantes finalizan la educación secundaria, que es cuando, de acuerdo a su puntaje en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), acceden a instituciones de mejor o peor calidad. En términos generales, los estudiantes que provienen de familias con bajos ingresos, y no consiguieron un puntaje satisfactorio en la PSU, encuentran drásticamente reducida la oferta educativa

universitaria. Esta oferta, normalmente, termina consistiendo en universidades e institutos técnicos privados que se caracterizan por ser de baja calidad y precios altos. Es aquí donde el Crédito con Aval del Estado (CAE), entra a financiar la demanda educativa en la educación superior. Esto introdujo a la banca privada al sistema, y mercantilizó las ayudas estudiantiles en la medida en que fue el Estado quien comenzó a licitar con el sector financiero un conjunto de carteras de créditos a estudiantes que ingresaban a la universidad, actuando como aval de tales deudas (Nodo XXI, 2015) como se citó en (Boccardo et al., 2020). El Estado, para hacer más atractivo la operación del CAE, fija una tasa de interés lo suficientemente alta como para atraer a los bancos, creando figuras como el “sobreprecio” o la “recarga”, que “les otorgó a las entidades financieras la facultad de hacer efectiva unilateralmente la garantía estatal, forzando al Fisco a pagar una comisión adicional al monto originalmente prestado”. Adicionalmente, se establecieron una serie de prerrogativas en beneficio de los bancos y el Estado, para hacer efectivo el cobro de los créditos a través de la obligación de deducir de los salarios de los egresados las cuotas que se adeudaran, la retención de impuestos a los morosos y el establecimiento de la imprescriptibilidad de las deudas (Boccardo et al., 2020). Esto ha redundado en que, por ejemplo, Chile tenga una de las proporciones de adultos entre los 25 a 64 con educación superior más bajas entre los países de la OCDE, pues solo un 25% tiene un título universitario. Además, los estudiantes que ingresan por primera vez a la educación superior, tienen menos probabilidad de completar sus estudios, pues solo el 16% de los que ingresan a una carrera alcanzan a egresar dentro de la duración teórica de la carrera, y después de tres años adicionales, esta tasa de egreso aumenta en un 54% (OCDE, 2019).

La configuración de este sistema ha tenido grandes consecuencias en la sociedad chilena, como lo es la creciente frustración de expectativas por parte del estudiantado y sus familias, que bajo la promesa de la movilidad social que suponía la educación, ha incurrido en altos niveles de endeudamiento, sin la garantía de una inserción laboral que logre retornar la inversión educativa asumida. Así, la expansión de la cobertura de la educación en Chile debe atribuirse al desembolso que ejecutan las familias y otros actores privados. Esto se puede evidenciar en el nivel del gasto privado que presenta el país, que, aunque

pasó del 80,5% al 64,2% entre 2000 y 2016, se mantiene muy por encima del promedio de la OCDE, como se puede ver en la gráfica 9.

Gráfica 9: Proporción del PIB (gráfico de líneas) y % de Gasto privado en Educación Superior (gráfico de barras) en Chile y OECD, 2000-2016



Fuente: (Boccardo et.al, 2020)

Aun así, la composición de ese gasto público en educación superior se ha dado a través de financiamiento “a la demanda”, vía becas y créditos (vouchers), que van en detrimento de la inversión en las instituciones públicas. Esta tendencia se explica por la irrupción del CAE como instrumento de financiamiento, y como un gasto estatal propenso a ser captado por cualquier institución, ya sea privada o pública, a raíz de las reformas que han igualado a las entidades educativas, en la “competencia” por acceder a los recursos del Estado (Boccardo et al., 2020).

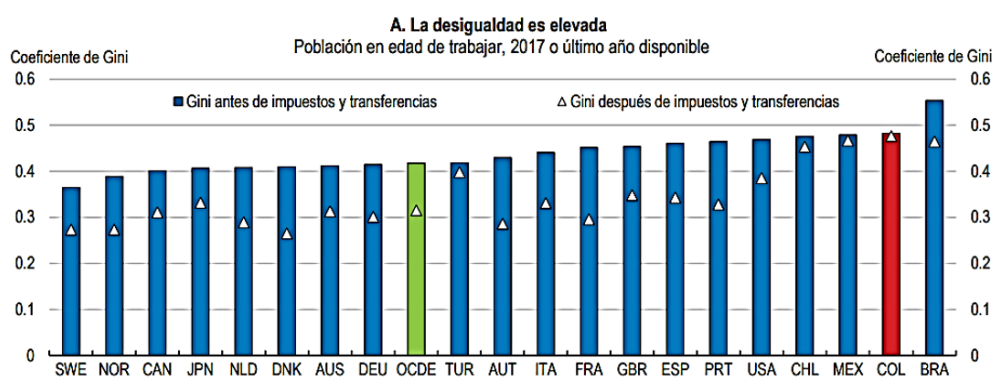
Finalmente, la mercantilización del derecho a la educación en Chile, aunque si bien ha expandido el nivel educativo, ha contribuido a reproducir desigualdades sociales. La frustración de esas expectativas de movilidad social a través de la educación, y el endeudamiento masivo de las familias, ha catalizado el descontento social de la sociedad chilena con el modelo económico neoliberal, y sin duda ha favorecido el surgimiento del fenómeno estallista.

Desigualdad y pobreza

Colombia

Las cuentas macroeconómicas de Colombia vienen siendo positivas en los últimos años (OCDE, 2019). Estas dinámicas de crecimiento y aumento, aunque proporcionan una tranquilidad para la economía y las élites políticas y económicas, no se ven reflejadas en un mejoramiento de las condiciones sociales. La pobreza y la desigualdad, antes de la irrupción del virus Covid-19, habían presentado un leve decrecimiento, y aunque esta tendencia fuera descendente, la desigualdad de ingresos medida por el Coeficiente de Gini⁹ seguía siendo muy elevada, como se puede ver en el gráfico_ (Banco Mundial, 2018) como se citó en (OCDE, 2019).

Gráfica 10: Transferencias monetarias y su impacto en la desigualdad



Fuente: OCDE, 2019

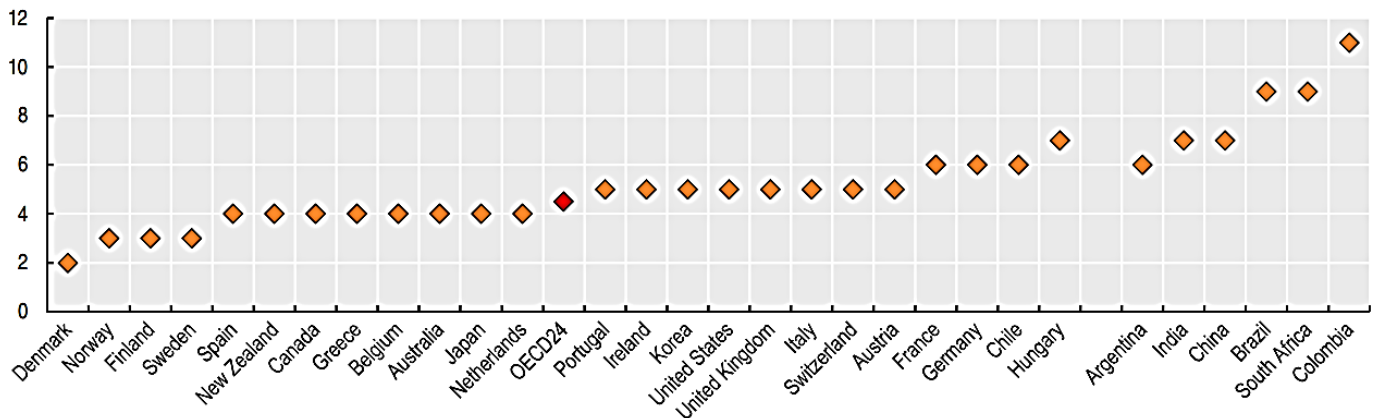
Se evidencia también en la gráfica que incluso después de los impuestos y las transferencias, el índice de Gini permanece casi inalterado. La OCDE considera que una posible explicación a ello es que la política social en Colombia no está bien focalizada, y las transferencias monetarias a la población marginada son escasas, pues gran parte de los subsidios van a parar a la población más rica. Por ejemplo, el 32% de los subsidios a

⁹ El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano). Este mismo concepto de desigualdad se puede entender gráficamente a través de la curva de Lorenz (Castellanos, 2019).

servicios públicos se destinan a los dos quintiles de ingresos más altos (OCDE, 2019). Incluso en programas de mitigación de pobreza que se consideran con buena focalización como “Más Familias en Acción”, el 29% del gasto sigue destinándose a los quintiles de ingresos más altos. Esto indica que es necesaria una reasignación del gasto existente para incrementar el impacto de los programas sociales. Otro problema que encuentra la OCDE en la mitigación de la pobreza y la desigualdad en Colombia es que el instrumento mediante el que se seleccionan a los participantes de los programas sociales, SISBEN, es un instrumento basado en encuestas que abarca el 76% de la población. En ese sentido, la elegibilidad es determinada por una encuesta realizada en 2011, que, aunque se encuentre actualizándose desde el 2020, su carácter estático dificulta la focalización y la eficiencia de las ayudas concedidas.

Igual de inquietantes son los hallazgos de la OCDE en materia de movilidad social intergeneracional. A un niño proveniente de una familia con ingresos bajos o muy bajos, le puede costar once generaciones alcanzar la renta media en Colombia (Ver gráfica 11). Esto obedece a la elevada desigualdad y a las disparidades regionales, ya que existe una gran diferencia entre las zonas urbanas y rurales. No obstante, el acceso a la educación y a la salud de calidad (los más grandes mitigadores de pobreza), también está supeditado al nivel de ingresos incluso dentro de los grupos socioeconómicos urbanos.

Gráfica 11: Número esperado de generaciones que necesitaría la descendencia de una familia en el 10% inferior para alcanzar el ingreso medio en la sociedad.



Fuente: OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility –

Figure 1.5.

Por tanto, si la desigualdad de ingresos y riqueza y la desigualdad en oportunidades van de la mano, se frena la movilidad social y las oportunidades para los pobres y personas en entornos desfavorecidos. Esto es especialmente preocupante en Colombia, donde según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el 2019, había 17.470.042 de personas (ver gráfica 12) en situación de pobreza monetaria¹⁰, es decir, que viven por debajo de la línea de pobreza¹¹ (COP\$331.688), y en el 2020 esa cifra asciende a 21.021.564; asimismo, en el 2019 eran 4.688.882 de personas las que se encontraban en situación de pobreza monetaria extrema¹², cifra que también ascendió a 7.470.265 en el 2020, por cuenta de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19.

Gráfica 12: Evolución de la población en situación de pobreza monetaria según datos del DANE

Dominio	2019	2020	Diferencia	Aporte (%)
Bogotá D.C.	2.246.851	3.345.513	1.098.662	30,9
Valle del Cauca	1.153.225	1.671.198	517.973	14,6
Atlántico	701.558	1.046.611	345.053	9,7
Antioquia	2.017.456	2.328.477	311.021	8,8
Cundinamarca	582.911	785.325	202.414	5,7
Santander	652.995	817.841	164.846	4,6
Bolívar	1.009.211	1.171.046	161.835	4,6
Córdoba	983.856	1.092.674	108.818	3,1
Tolima	560.207	652.423	92.216	2,6
Magdalena	701.895	792.973	91.078	2,6
Meta	338.635	421.538	82.903	2,3
Cesar	556.785	635.914	79.129	2,2
Risaralda	279.710	350.289	70.579	2,0
Norte de Santander	727.934	795.841	67.907	1,9
La Guajira	659.231	726.048	66.817	1,9
Huila	620.109	681.208	61.099	1,7
Boyacá	458.455	512.755	54.300	1,5
Quindío	190.695	223.044	32.349	0,9
Caldas	285.343	306.591	21.248	0,6
Sucre	445.470	460.124	14.654	0,4
Nariño	933.563	924.499	-9.064	-0,3
Chocó	355.671	339.501	-16.170	-0,5
Caquetá	245.185	223.539	-21.646	-0,6
Cauca	849.786	799.952	-49.834	-1,4
Total nacional	17.470.042	21.021.564	3.551.522	100,0

¹⁰ La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable. Para ello se elige un indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de línea de pobreza total para el caso de consumo total, y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos.

¹¹ La línea de pobreza representa un valor monetario en el cual se consideran dos componentes: el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios, expresado sobre la base de la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos. CEPAL (2018).

¹² Se es pobre extremo cuando el gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza Extrema, que se mide con una norma nutricional de consumo de calorías diarias, y se cuantifica el valor mensual de este consumo bajo una canasta de bienes alimenticios (CBA) que sea lo más real posible (Feres y Mancero, 2001).

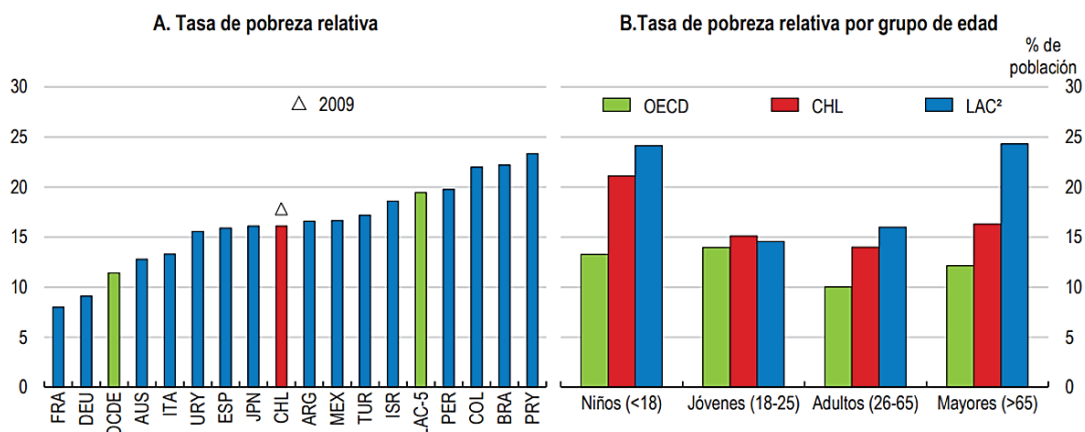
Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE), 2021.

Finalmente, se puede decir que, aunque Colombia tenga una sociedad históricamente atravesada por la exclusión social, económica y política, la pobreza y las desigualdades económicas no son una consecuencia exclusiva y directa del neoliberalismo. Sin embargo, si bien el modelo socioeconómico no sea el causante directo ni único de este fenómeno, sí se puede afirmar que el modelo ha profundizado la exclusión social en sus diversas acepciones y dimensiones (Cortés, 2003). Como hemos visto, las instituciones de seguridad social del Estado colombiano solamente protegen a una parte de la población, y la reducción de las políticas de protección social redundan en graves consecuencias para los desempleados, empleados informales, y personas en situación de pobreza, en tanto se profundiza su exclusión social y económica. Así, el modelo de desarrollo económico neoliberal ha sido usado en favor de la preservación de las estructuras tradicionales de poder de las élites económicas y políticas, lo cual ha permitido la reproducción de la exclusión económica y social de grandes capas de la población.

Chile

Chile tiene la economía más acelerada y saludable de América Latina (OCDE, 2019). Juiciosamente cumple sus deberes macroeconómicos y fiscales, tiene una balanza comercial favorable y una productividad en aumento. Pero del otro lado de este crecimiento están los excluidos de esta política económica. El modelo de desarrollo neoliberal generó altos y sostenidos niveles de evolución y acceso a bienes de consumo. Y aunque la desigualdad y la pobreza descendieron más que en otros países de la región, esta sigue siendo muy elevada, especialmente entre los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos con hijos (Ver gráfica 13), pues la transmisión intergeneracional de los niveles de ingresos también contribuye a afianzar las desigualdades (Daude y Robano, 2015; OCDE, 2010).

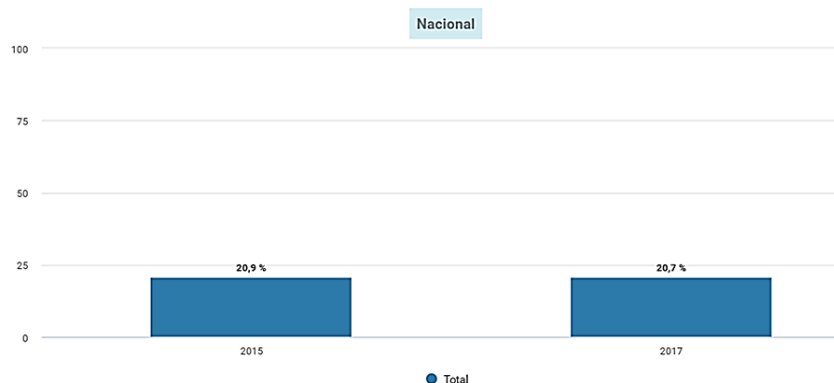
Gráfica 13: La pobreza ha descendido de forma significativa, pero sigue siendo elevada



Fuente: CEDLAS (2017) y OCDE, base de datos de distribución de ingresos (2016).

El Ministerio de Desarrollo Social y Familias de Chile, a través de la encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional), identificó que, para el año 2017, 8,6% de la población formaba parte de hogares cuyos ingresos por persona equivalente eran inferiores a la línea de pobreza establecida. Sin embargo, al aplicarse la metodología de medición de pobreza multidimensional, se encontró que 20,7% de la población (3.726.000 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza multidimensional (ver gráfica 14), una medición que reconoce que el bienestar es un fenómeno que incluye aspectos monetarios y no monetarios, que determinan las condiciones de vida de los individuos, a saber: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, Redes y cohesión social (Ministerio de Desarrollo Social, 2020).

Gráfica 14: Pobreza multidimensional Chile acumulado nacional



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Así, persisten desafíos para lograr un crecimiento económico más inclusivo, que se estanca por la informalidad, el limitado gasto social y la carencia de empleo de alta calidad en el mercado de trabajo y a través de la educación (OCDE, 2019). En ese sentido, mejorar la focalización de las transferencias monetarias es imperativo para la eficacia de la redistribución del ingreso, pues, aunque estas hayan tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza, el gasto público social en familias representa solo un 1,8% del PIB en Chile, mientras que el promedio de la OCDE es de 2,2%.

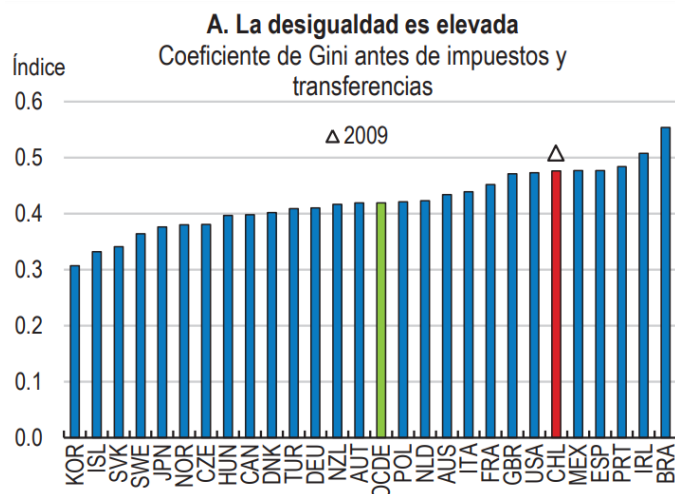
En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha indicado que, a pesar de tener uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, los altos niveles de desigualdad en Chile son materia de preocupación. La riqueza está fuertemente concentrada: para el 2017, datos de la CEPAL demostraron que mientras el 50% más pobre de los hogares poseía el 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico detentaba el 66,5% (dos tercios), y el 1% más rico ostentaba el 26,5%¹³. Igualmente, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, informó que, en el 2018, la mitad de los trabajadores chilenos ganaron menos de US\$500 por mes¹⁴, siendo el salario mínimo US\$412 mensuales. Esto se puede evidenciar en el Coeficiente de Gini del país, que representa un 0,47 donde 0 implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos y 1 que solo una persona percibe todo el ingreso nacional (ver gráfica 15). Pero una característica de la desigualdad chilena es que la concentración del ingreso de ese 1% no

¹³ Ver <https://www.cepal.org/en/publications/44396-social-panorama-latin-america-2018>, página 58.

¹⁴ Ver <https://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/esi>

es medido en la encuesta nacional Casen de caracterización socioeconómica, pues las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los ingresos de la población más rica.

Gráfica 15: Coeficiente de Gini. Chile 2017



Fuente: OCDE, 2019

Así, las reducciones de los índices de desigualdad y pobreza reflejados en los informes y las cifras, no compensan el hecho de que el país mantenga unos altísimos niveles de disparidad socioeconómica y de concentración del ingreso, y que el sostenimiento de estas estructuras descansa en mecanismos de reproducción que están profundamente enraizados en la institucionalidad, la cultura y el sistema productivo del país (PNUD, 2017). Esta desigualdad de ingresos se explica también por los salarios bajos que perciben un gran número de trabajadores. Un salario bajo es definido como un ingreso que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en ausencia de otras fuentes de remuneración, es decir, un salario que no permite que un trabajador pueda mantener a una familia de tamaño promedio sobre la línea de pobreza. En Chile, la mitad de los asalariados con jornada de treinta (y más) horas semanales, obtenía un salario bajo en 2015, lo cual produce una inseguridad económica que está fuertemente estratificada por nivel socioeconómico (PNUD, 2017). El Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, identificó en una investigación que, al estudiar un periodo de 132 meses (11 años), los trabajadores hombres de bajo salario pasaron en promedio por 10 empleos formales, mientras que los hombres de salario alto tuvieron en promedio 4,7 trabajos. En este mismo periodo de tiempo, los primeros estuvieron empleados en el 62% de los meses, lo cual significa que cada empleo formal tuvo una duración de 8,2 meses. En contraste, los segundos trabajaron un 87% de los meses de estos 11 años, y cada empleo tuvo una duración promedio de 25 meses. Así, las transiciones entre un trabajo y otro que experimentan quienes perciben salarios bajos, pueden incluir periodos de desempleo o trabajo informal, lo cual genera inestabilidad y riesgo de exclusión social, que a la larga se traduce en desigualdad.

Por lo demás, la desigualdad socioeconómica en Chile, como en la mayor parte de América Latina, ha tenido una connotación étnica y racial. Mientras las clases altas se constituyeron como predominante blancas, los mestizos e indígenas se ubicaron en un grado más bajo en la jerarquía social, y negros y mulatos un lugar aun inferior. Un ejercicio tan interesante como lacerante, demostró que un buen predictor de la clase social en Chile es el aspecto físico y el apellido, lo cual demuestra la rígida movilidad social del país, donde muchas veces los prejuicios y la discriminación determinan el acceso a oportunidades.

Al recolectar datos sobre ocho millones de apellidos de adultos chilenos, y cruzarlos con información sobre sus oficios o profesiones, se descubrió que hay cincuenta apellidos¹⁵ que concentran una mayor representación porcentual en las tres profesiones más prestigiosas y mejor remuneradas: abogados, ingenieros y médicos. Se puede ver en la Tabla 3, módulo izquierdo, los cincuenta apellidos más representados en estas profesiones, y en el derecho, los apellidos sin una sola persona en ellas. El resultado evidenció que a la izquierda se registran mayoritariamente apellidos con tradición aristocrática castellana-

¹⁵ Se incluyen los cincuenta apellidos con mayor frecuencia en la población, de un total de 110 que cumplen con el criterio. El análisis consideró solo los apellidos que tienen una frecuencia mínima de doscientos casos en la base de datos, pues para números más pequeños los porcentajes no proveen información fiable.

vasca, y otros alemanes, ingleses, franceses e italianos; mientras que, a la derecha, se concentran apellidos mayoritariamente de pueblos originarios (PNUD, 2017).

Tabla 3: Apellidos y posición social en cohortes nacidas entre 1940 y 1970

50 apellidos con mayor porcentaje de profesionales de prestigio (ordenados según %)				50 apellidos donde no hay un solo profesional de prestigio (ordenados según número de casos)			
Matte	Ariztia	Werner	Schmidt	Aillapan	Chequeman	Calfin	Coilla
Délano	Astaburuaga	Etcheverry	Richards	Mariman	Escares	Taiba	Murga
Zegers	Campbell	Baltra	Otero	Tranamil	Colivoro	Palahueque	Alcapan
Soffia	Moore	Manzur	Petersen	Huenchual	Lepin	Huenten	Lincopi
Risopatrón	Allende	Peirano	Hott	Carilao	Cayupan	Catrinao	Huenupan
Tassara	Solari	Tagle	Diez	Huenchu	Neculpan	Huaiquipan	Gamin
Edwards	Walker	Lyon	Pons	Huala	Caripan	Llanquiman	Yevlao
Parga	Klein	Niklitschek	Garretón	Cheuque	Ancan	Millao	Huaiquimil
Errázuriz	Parodi	Enríquez	Echenique	Millahual	Garabito	Cumian	Huenupi
Puelma	Bunster	Undurraga	Neumann	Colipi	Necul	Levican	Curihuinca
Canessa	Hitschfeld	Larra	Larrain	Cona	Maliqueo	Godoi	Melinao
Vial	Moller	Montt		Lienlaf	Cheuquepil	Curilen	
Soler	Irrarázaval	Vicuña		Porma	Huenulef	Andana	

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a partir de datos del Servicio Electoral.

Así, esta evidencia reafirmó que sigue existiendo un diseño institucional y un marco normativo que tiende a reproducir desigualdad y exclusión, del cual mujeres, indígenas y personas de las regiones rurales tienden a verse más afectados. Esto impacta y limita la capacidad real de los grupos socioeconómicos desfavorecidos de ejercer sus derechos de ciudadanía, lo cual vulnera el principio de igualdad y genera dificultades de representación para la población pobre, sobre todo cuando los grupos socioeconómicos más privilegiados, por su poder económico, tienen acceso a herramientas de control que influyen los procesos de toma de decisiones de acuerdo con sus preferencias e intereses. De esta manera, la desigualdad socioeconómica se traduce en una subrepresentación de los grupos pobres y sus intereses (Rosset, Giger y Bernauer, 2013), lo cual afecta el grado de respuesta del sistema político a las demandas de distintos sectores (Bartels, 2008; Gilens, 2012) como se citó en (PNUD, 2017).

Finalmente, la desigualdad en Chile, en sus múltiples expresiones a nivel social, ha puesto de manifiesto en la sociedad chilena la crisis parcial del modelo de desarrollo neoliberal. Si bien el crecimiento económico y sus subproductos legitimaron el sistema, esa fuente de legitimidad ha dejado de ser suficiente (Luna, 2017). Hay una serie de

frustraciones sociales asociadas a las promesas incumplidas del neoliberalismo, como lo son la promesa de movilidad intergeneracional mediante la inversión y la formación educativa, que ha radicalizado y politizado a la ciudadanía, en tanto las instituciones y el sistema político han sido incapaces de tramitar el descontento y la demanda social por mayor y mejor gasto público y menos abusos por parte de los privados. Así, una sociedad que quiere ser horizontal, y que se enfrenta a un sistema de partidos que opera en clave oligárquica, es un poderoso catalizador del descontento que produce la complicidad entre el poder económico y el poder político (Luna, 2017).

Discusión final

Después del recorrido y el análisis que se hizo del ciclo de protestas en Chile y Colombia del 2010 al 2020, y la caracterización del descontento social en las sociedades chilena y colombiana por dimensiones de salud, educación, desigualdad y pobreza, queda explicar cómo es que ese descontento se materializó en protestas y movilizaciones que, tanto en 2019, como en 2021, devinieron en estallidos sociales en ambos países, respectivamente.

Para ello, retomamos a Del Campo et al., (2017), quien, en un estudio sobre las nuevas clases medias latinoamericanas, afirma que estas demandarán derechos y servicios públicos para mantener o consolidar su status (Paramio, 2012) como se citó en (Del Campo et al., 2017). Para las autoras, es racional esperar que, si la prestación de estos servicios públicos se percibe de forma insatisfactoria, la insatisfacción con la democracia crecerá, y por tanto lo hará la protesta social. Esto tiene que ver con que a pesar de que creció la clase media, la distribución del ingreso sigue siendo muy reducida, el modelo de desarrollo económico sigue siendo poco competitivo al virar a una tendencia primario-exportadora, y la alta dependencia de la exportación de las commodities hace vulnerables las economías y pone en peligro los logros sociales alcanzados (Castellani y Parent 2011; CEPAL 2013) como se citó en (Del Campo, et al., 2017). En ese sentido, quienes han dejado de ser pobres asumen unas nuevas expectativas positivas sobre su futuro, y por lo tanto se vuelve problemático cuando el Estado no es capaz de responder a esas demandas. Esto se explica desde la teoría del efecto túnel de Hirschman y Rothschild (1973), quienes sostuvieron que, en etapas de crecimiento económico, la tolerancia a la desigualdad puede ser alta, ya que

quienes quedaron relegados de una primera fase de crecimiento no manifiestan de inmediato esa frustración, pues avocinan un futuro ascenso, pero en una segunda fase, aquellos que no lograron ascender, pierden sus esperanzas y se vuelven enemigos del orden.

De esta manera, los subsidios y los créditos pueden ser insuficientes si la inflación o las acciones económicas del gobierno (como reformas tributarias) se perciben como una amenaza al «estilo de vida» que perjudique a las clases medias como ahorradores, consumidores y pensionistas, al igual que se percibe como una amenaza la carencia de políticas públicas que mejoren la calidad de los servicios públicos elementales. Una reducción de la calidad de bienes y servicios públicos redonda entonces en un descontento ciudadano, por las aspiraciones que estos tenían en materia de proyección hacia arriba en la escala social. Así, si el crecimiento económico y las políticas redistributivas incrementaron el nivel de expectativa social, las deficiencias del sistema de salud, la baja calidad de la educación pública, el caos en el transporte y la inseguridad son determinados como detonantes de las multitudinarias y más recientes olas de movilizaciones sociales.

Los argumentos de Del Campo et al. (2017), aunque reconozcan como catalizador de las protestas a los servicios públicos, refuerzan lo que aquí se ha venido exponiendo sistemáticamente: que la profundización del neoliberalismo en los países latinoamericanos, en especial en Chile y Colombia, ha determinado el ciclo de protestas 2010-2020. Si bien las autoras anteriores no identifican las causas por las que hay un deterioro en la prestación de los servicios públicos, sino que se centran en la percepción que los ciudadanos tienen de estos, se puede extrapolar, basándonos en la evidencia encontrada en la literatura, que países como Chile y Colombia, que han relegado la provisión de bienestar y de servicios públicos a los agentes del mercado en el marco de un modelo de desarrollo neoliberal, enfrentan una disminución de la calidad de los servicios en tanto estos se ven mercantilizados y su acceso se supedita a la capacidad de compra. Lo cual, a la larga, genera que los servicios que termina ofreciendo el Estado se vuelvan de menor categoría, y alimenten el descontento social de una ciudadanía con altísimas demandas que, por su nivel de ingresos, no puede acceder a la asistencia de calidad que ofrecen los privados.

Como se expuso en el capítulo i), los aportes de Silva (2002) cobran relevancia en este contexto de mercantilización de los servicios públicos, y destaca la pertinencia de teoría de la sociedad de mercado que el autor retoma de Polanyi (1944). Los economistas neoclásicos habían afirmado que la liberalización del mercado, además de revivir el crecimiento económico, tendría consecuencias políticas beneficiosas. Desde su perspectiva, un sector público fuerte que se involucraba en la economía a través de subsidios, bienestar, y protección de los trabajadores, generaba déficits fiscales que derivaban en inflación y frustraban el crecimiento económico. Por el contrario, una economía de libre mercado sacaba al Estado de su deber de hacedor de política pública, al remover su referente político para los grupos sociales. Así, el mercado, no los políticos y el Estado, entra a asignar la mayoría de los bienes y servicios. Se esperaba entonces que la movilización organizada y coordinada de las clases populares y obreras decreciera, en tanto el gobierno no sería capaz de interceder a su favor. La subordinación económica, política y social a los principios del mercado fue lo que hizo a Silva interesarse por el concepto de sociedad de mercado de Karl Polanyi. Para el autor el análisis que hace Polanyi del primer experimento del mundo con el capitalismo de libre mercado en el siglo XIX, resuena profundamente con la actualidad. Para el economista húngaro, la construcción de una sociedad de mercado que pretendió someter las relaciones sociales, la tierra, y la fuerza del trabajo a los principios del mercado de eficiencia, producción y lucro, no podría ser la base de un orden social estable y justo, pues creaba tensiones sociales que inevitablemente llevarían a los individuos y a la sociedad a buscar protegerse del poder destructivo del mercado que aspiraba reducir a los humanos a una dimensión: de commodities. Esta *commodificación* del trabajo y la tierra era ficticia, pues todo lo que incluya relaciones sociales, es más que una cosa que se pueda comprar y vender, por lo tanto, los seres humanos, por definición, no son cosas, y el intento de reducirlos a commodities ficticias interrumpe la habilidad de las personas de satisfacer sus necesidades vitales, tales como estabilidad personal y familiar, tener un status en la comunidad, sentido de la justicia, y más importante aún, la supervivencia física. De esta forma, en palabras de Silva, los seres humanos intentarán inevitablemente protegerse de los poderes del mercado, y la construcción de una sociedad de mercado necesariamente generará un contra-movimiento proteccionista dentro de la sociedad, que es lo que el autor denomina la ola de protestas

antineoliberales que sacudieron a América Latina, primero con la marea rosa, y posteriormente con las protestas del 2010 al 2020 que hemos descrito aquí. 30 años después de una economía orientada hacia el mercado, se puede ver cómo las reformas neoliberales intentaron construir un orden lo suficiente similar a la sociedad de mercado polanyiana. Estas reformas neoliberales, buscaron subordinar las estructuras sociales y políticas a los principios autorreguladores de una economía de libre mercado. De esta manera, una ola de movimientos sociales antineoliberales demandó una mayor participación del Estado en la provisión de bienestar, al darse cuenta de que los mercados sin restricciones son socialmente dañinos y generan resistencias.

CONCLUSIONES

Después de una detallada revisión de fuentes académicas sobre protestas de carácter antineoliberal enfocadas en el caso chileno y colombiano del 2010 al 2020, se expusieron las diferentes hipótesis sobre las motivaciones, los contextos, los actores y las dinámicas de estas protestas. Primero hicimos un breve recorrido histórico de los diferentes modelos de desarrollo económico que a lo largo del tiempo América Latina ha adoptado, hasta llegar a describir las condiciones en las que el modelo de desarrollo neoliberal entra en la región, particularmente en Chile y Colombia. Con el propósito de abordar estos estudios de forma amplia, se recopilaron y clasificaron los textos encontrados con base en seis enfoques teóricos, de los cuales se concluye que el Estructuralismo, el Marxismo y el Institucionalismo fueron los más trabajados en este periodo de tiempo. De los (48) textos revisados, (13) de estos fueron Estructuralistas, (13) Marxistas y (6) Institucionalistas. La hipótesis que se sostuvo en esta investigación se alimentó de los postulados de estos tres enfoques. Así, de nuestro planteamiento inicial sobre la relación entre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia 2010-2020, se concluye que, según los autores, la profundización del neoliberalismo determina el ciclo de protestas en ambos países. Para los estructuralistas, lo determina en tanto el sistema mundo centro-periferia, —del que Chile y Colombia hacen parte como periféricos—, representa unas condiciones de desigualdad y opresión de las que las movilizaciones antineoliberales se han tratado de distanciar y desafiar. Para los teóricos marxistas, el neoliberalismo como la fase actual del capitalismo, implica unas contradicciones sociales intrínsecas de las que la clase obrera se trata de liberar mediante las luchas sociales materializadas en la protesta organizada, en tanto dichas contradicciones representan una opresión que menoscaba las condiciones de vida y dignidad de la no burguesía. Para los teóricos del institucionalismo, por un lado, la existencia de una matriz institucional altamente ineficiente en ambos países, por la obstaculización a la modernización de la misma que hacen las élites económicas y políticas, genera una rigidez institucional que limita la movilidad social y en últimas genera rupturas políticas que terminan en ciclos de protesta; y, por otro lado, la conformación de lo que Polanyi denominó la “sociedad mercado”, —y a lo que los estructuralistas también hacen referencia—, somete la provisión de servicios públicos y las relaciones sociales a los principios del mercado, y reduce los derechos a meras *commodities*, lo cual genera un

contra-movimiento para protegerse de los poderes del mercado, que es desde donde se explican los ciclos de protestas antineoliberales en Chile y Colombia que hemos expuesto en este trabajo.

En contraste, los autores del enfoque Funcionalista (5), Estructural-Funcionalista (3) y de la Teoría de la Elección Racional (8), no asociaron la protesta social en Chile y Colombia con el modelo de desarrollo neoliberal, sino que explicaron las causas y motivaciones de esta como un problema individual. Para los autores funcionalistas, las causas de las movilizaciones no se encuentran en el modelo en sí, si no en un fracaso individual de inserción en el mercado, lo cual resulta inherente al desarrollo inequitativo de los subsistemas en los procesos de modernización. Para los autores del estructural-funcionalismo, esta relación entre neoliberalismo y protesta social se explica por la lógica del individuo aislado y a un error individual de interacción con la estructura global capitalista, lo cual deja por fuera del análisis las contradicciones sociales del modelo económico. El último enfoque de este grupo, el de la Teoría de la Elección Racional, presenta (8) textos desde los cuales se entiende la relación entre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia bajo la óptica de los cálculos racionales de costo-beneficio. Los autores de este enfoque argumentaron que las acciones colectivas, antineoliberales o no, podían tener un carácter racional, si había una congruencia entre medios y fines. Por lo tanto, para ellos, las motivaciones para movilizarse radicaban no en el modelo de desarrollo en sí, si no a un cálculo racional de costo-beneficio. En últimas, los textos identificados en este grupo de enfoques conciben el ciclo de protestas 2010-2020 como resultado de un problema individual y no estructural o sistemático, por lo tanto, ignoran la variable del modelo de desarrollo económico neoliberal como determinante en el proceso de movilización, y caen en explicaciones reduccionistas. Por esta razón, la hipótesis que trabajamos en esta investigación dio cuenta de las teorías aportadas por los enfoques Estructuralistas, Institucionalistas, y Marxistas, en tanto contribuyen a una comprensión integral del fenómeno movilizadorio.

Posteriormente, elaboramos una periodización del ciclo de protestas en Chile y Colombia, donde encontramos como hitos las movilizaciones estudiantiles del 2011,

llevadas a cabo en ambos países en defensa de la educación pública y de calidad, movilizaciones que continuaron en el 2013 en Colombia y en el 2014 en Chile. Luego detallamos el Paro Nacional agrario y campesino colombiano en el 2013, y las protestas que siguieron en Chile por cuenta de los movimientos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 2016 y 2017. Por último, esbozamos cómo este ciclo de protestas se vinculó a los estallidos sociales que vimos en Chile en el 2019 y en Colombia en el 2020.

Un balance de este ciclo de protestas resulta necesario para mostrar los aportes, fortalezas y logros que han alcanzado los movimientos sociales en ambos países. Aunque los diez años estén cargados de victorias simbólicas, como la repolitización de la sociedad chilena y colombiana que fue mencionada por Paredes (2017), los movimientos han cumplido importantes objetivos específicos en cada movilización. Eso no ha detenido a los gobiernos de realizar contra reformas e incumplir los acuerdos alcanzados en el marco de las protestas. En el caso de Chile, como lo mostramos en el capítulo III, las movilizaciones estudiantiles que empezaron en el 2011 contra la Ley General de Educación (LGE), aunque consiguieron derogar la reforma, no cambiaron la lógica mercantil detrás de la educación chilena, y mantuvo, por ejemplo, el elemento insignia de esta mercantilización: el Crédito con Aval del Estado (CAE), que como se mostró, beneficia a los privados y endeuda a las familias de los estudiantes. No obstante, la movilización estudiantil del 2019 y el posterior estallido social, logró tal nivel de presión al poder Ejecutivo, que consiguió el anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de la dictadura de Pinochet, que seguía rigiendo el país 40 años después del retorno de la democracia. Por su parte, en Colombia, el movimiento estudiantil del 2011 logró la derogación del proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que buscaba modificar la educación superior en Colombia inyectando aportes de alianzas público-privadas. Mientras que los diversos paros campesinos y agrarios de 2013 y 2016 lograron acuerdos para apoyar el sector del agro con el Gobierno Nacional de turno, su incumplimiento ha derivado en la adhesión de estos movimientos al Paro Nacional del 2020 y 2021. Sin embargo, se debe reconocer que los paros del 2020 y 2021, en contra de la reforma laboral, pensional y tributaria, respectivamente, han conseguido replantear y en algunos casos anular la tramitación de dichas reformas en el Congreso de la República. Igualmente, han provocado la alternancia

de unos varios ministros y el posicionamiento de estos problemas como asuntos públicos frente a los que hay que movilizarse. Así, aunque Chile y Colombia sean países marcados por contextos, geografías y dinámicas particulares, tienen en común un modelo de desarrollo económico neoliberal que agotó sus niveles de legitimidad, y una clase política incapaz de tramitar las demandas ciudadanas por las vías institucionales. En ese sentido, el ciclo de protesta 2010-2020 puede verse con un patrón que es a la vez global y local, que se desarrolla de forma contingente bajo las lógicas y los repertorios propios de cada país, pero aunado a una dinámica de protestas populares marcadas por la indignación generalizada a nivel regional. En suma, Chile y Colombia, con dos pasados diametralmente diferentes en términos políticos, comparten el elemento en común que hemos venido evidenciando aquí: el agotamiento del modelo económico neoliberal y el inmovilismo de sus elites políticas y económicas.

Por consiguiente, elaboramos una radiografía social de ambos países por dimensiones, a saber: salud; educación; pobreza y desigualdad, que nos permitiera comprender el contexto material y caracterizar el descontento ciudadano que antecedió el ciclo de protestas. A partir de esta evidencia, demostramos cómo los autores vinculan el neoliberalismo con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia, mediante el trabajo de Del Campo et al., (2017) que retomó los postulados de Hirschman y Rothfield (1973), y Silva (2002) quien retomó los argumentos de Polanyi (1944). Estas teorías, junto con el resto de revisión de la literatura, nos permitieron establecer y comprobar bajo qué condiciones el neoliberalismo determina o no los ciclos de protesta en Chile y Colombia. Como lo expusimos, el neoliberalismo determina los ciclos de protesta al encontrarse en períodos de crecimiento económico que no redundan en una mejoría de los servicios públicos para los ciudadanos, sino al contrario, debilita la calidad de los mismos al entregarle su provisión a los agentes del mercado.

Por eso, consideramos que es necesario ver al desarrollo con un lente más amplio. Los gobiernos neoliberales han centrado sus esfuerzos en el crecimiento económico, y es verdad que la producción de bienes y servicios de la economía chilena y colombiana creció mucho en los últimos veinte años. Aunque esto en efecto le dio más dinero a los Estados,

y se pudo sacar a millones de la pobreza monetaria y aumentar los ingresos promedio de las personas, este crecimiento no se tradujo en mejoras para el bienestar de todas las personas. Como se expuso aquí, aún hay educación, salud, empleos y demás servicios de baja calidad. Eso puede poner en peligro el crecimiento económico, y en un momento de crisis como el generado por la pandemia COVID-19, podría borrarlo. En ese sentido, como dijo Cerutti (2021), el crecimiento económico expresado en el Producto Interno Bruto (PIB) en el que se basan los gobiernos para diseñar políticas públicas, para revisar el éxito de estas, y para compararse con otros países, se queda corto. El PIB solo mide la producción de bienes y servicios de una economía, más no mide el impacto que esta tiene, ni lo sustentable que es en términos humanos y ambientales, ni cómo se redistribuyen los recursos dentro de la economía. Este indicador solo refleja un aspecto del bienestar: el relacionado con los ingresos, pero deja por fuera del análisis el espectro entero de los factores que determinan el bienestar y el desarrollo de un país. El PIB dice más bien poco de la calidad de vida de las personas en los países. El vínculo entre PIB y bienestar de los habitantes de un país, se transforma a lo larga de la historia. En un periodo inicial del desarrollo, los ingresos son muy relevantes para el bienestar de los ciudadanos, pero a medida que el crecimiento económico avanza en los países, este vínculo se empieza debilitar, lo cual implica que los ingresos del país dejan de ser tan importantes en el bienestar de las personas, y otras variables cobran mucha más relevancia, como la educación, la salud, la esperanza de vida, la calidad del aire, la seguridad y especialmente la democracia (Cerutti, 2021). Esto no significa que haya que dejar de medir el PIB o guiarnos por él, pero es imperativo empezar a integrar las otras muchas dimensiones del desarrollo y el bienestar al hacer políticas públicas. Es por eso que hay que empezar a medir lo que consideramos mejor calidad de vida, como el nivel de satisfacción con el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de transporte, la seguridad, etc. En Chile y Colombia, como en América Latina, se ha logrado avanzar, pero todavía hay mucho por hacer. Es necesario empujar una agenda política que permita medir y usar indicadores que posibiliten trazar una ruta de crecimiento económico inclusive y sustentado. Por supuesto que hay que seguir mirando y controlando el PIB, pero también tenemos que preguntarnos por las otras múltiples dimensiones del desarrollo, para empezar a gobernar de manera más inclusiva y sustentable para todos y todas.

Finalmente, como lo dijimos al inicio de este trabajo, debemos reconocer que, aunque abordamos en detalle la cuestión de la relación entre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia, la explicación no se agota únicamente desde la variable del modelo de desarrollo neoliberal. Por ello, uno de los vacíos que se le puede criticar a nuestro trabajo de investigación es la carencia de profundización en aspectos trascendentales de las protestas sociales chilenas y colombianas, como los repertorios de acción de las mismas, la caracterización de los sujetos sociales que la conforman, los procesos de contención que han registrado estos movimientos a través de la acción colectiva, entre otros. Estos vacíos se configuran como posibles campos de estudio para futuras investigaciones, que apelan a las nuevas generaciones de politólogos y científicos sociales a continuar con una producción académica que contribuya a la interpretación de la realidad social del contexto chileno, colombiano y latinoamericano.

Referencias bibliográficas

- Afonso de Aguilar, H., & Benedito Da Silva, E. (2010). A crítica novo-institucionalista ao pensamento da Cepal: a dimensão institucional e o papel da ideologia no desenvolvimento económico. *Economia e Sociedade*, Campinas, v. 19, n. 2 (39), p. 211-232, ago. 2010. Recuperado de: <https://www.scielo.br/j/ecos/a/dtYjQnqpyQPNgctnxsPPPXR/?lang=pt&format=pdf>
- Aguilera, O. (2010). Acción colectiva juvenil: De movidas y finalidades de adscripción. *Acción colectiva juvenil: de movidas y finalidades de adscripción. Nómadas*, (32), 81-97. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502010000100006&lng=en&tlng=es.
- Almeida, P., & Cordero, A. (2017). *Movimientos sociales en America Latina: perspectivas, tendencias y casos*. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2017. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170721051921/Movimientos_sociales.pdf
- Alvear, R. (2019). Once tesis sobre la crisis de concentración de la sociedad chilena. *Revista de crítica política, social y cultural REDSECA*. ISSN 0718-8927. Recuperado de: <http://www.redseca.cl/once-tesis-sobre-la-crisis-de-concentracion-de-la-sociedad-chilena/>
- Amador, J. C., & Muñoz, G. (2021). Del alteractivismo al estallido social: acción juvenil colectiva y conectiva (2011 y 2019). *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1), 176-203. Epub March 17, 2021. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.4588>
- Archila, M. (2019). *Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia, 1975-2015*. - Bogotá: Fundación Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz CINEP-PPP, 2019.
- Arancibia, J. (2011). Capital, crisis y desigualdad en América Latina, México, UNAM, PPEL, FCPyS, 2011, pp. 35, 39, 41 y 43.
- Babb S. (2011). Challenging Neoliberalism in Latin America. *Contemporary Sociology*. 2011;40(4):488-489. doi:10.1177/009430611141251600. Recuperado de: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009430611141251600?journalCode=csxa>
- Bambirra, V. (1982). *El capitalismo dependiente latinoamericano*. El capitalismo dependiente latinoamericano. Siglo XXI editores, México. ISBN 978-9682315947. Recuperado de: <http://ru.economia.unam.mx/98/>

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

Billion, D., & Ventura, C. (2020, abril). *¿Por qué protesta tanta gente a la vez?* Revista NUSO.

<https://nuso.org/articulo/por-que-protesta-tanta-gente-la-vez/>

Boccardo, G., & Ruiz, C. (2013). Clases y grupos sociales en América Latina hoy: Argentina, Brasil y Chile. Memoria (Sociólogo)--Universidad de Chile, 2013.

Bonavente, A. (2008). Estallidos sociales y escenarios de ingobernabilidad: consideraciones sobre el rupturismo en América Latina. Revista Pléyade, ISSN 0718-655X, N° 2, 2008, págs. 156-167

Briebe, D. (2020). El estallido social en Chile desde el igualitarismo relacional de Elizabeth Anderson. Revista de Sociología, 35(1), 31 -42. doi: 10.5354/0719-529X..2020.58105

Cadarso, P. (2001) Principales teorías sobre el conflicto social. Revista de historia. Cáceres, 237-254. Dialnet. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=241031>

Caicedo, J. (2020). El sistema neoliberal de salud de Colombia. Revista Cepa. Vol. 3 Núm. 30 (15): MovilizACCIÓN - Edición especial. Recuperado de: <https://revistacepa.net/ojs/index.php/cepa/article/view/22>

Camacho, M. D. (2018). Treinta y cinco años de evolución de la Teoría de Desarrollo en las Ciencias Sociales en América Latina (1974-2009). En: Bialakowsky, A; Bonilla, N et al. (Ed) Encrucijadas abiertas. América Latina y el Caribe. Sociedad y pensamiento crítico Abya Yala (Tomo II). (pp. 285-210). CLACSO. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvn5tzhd.19>

Cardoso, H., & Faletto, E. (1982). Desarrollo y dependencia en América Latina. Ediciones Cepal. I.S.B.N.: 956-7083-00-2 (Volumen II). Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2052/S33098N962Cvol2_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Casey, T. (2016). In defense of neoliberalism. Paper presented at the Political Studies Association Annual Conference. Brighton, England, 21-23 March 2016. Recuperado de: [https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2016/Casey-In%20Defense%20of%20Neoliberalism%20\(PSA%202016\)_1.pdf](https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2016/Casey-In%20Defense%20of%20Neoliberalism%20(PSA%202016)_1.pdf)

Castro, L. (2020). La protesta social en América Latina: una aproximación a su fisonomía a propósito de los estallidos sociales de 2019. RUMBOS TS, año XV, N° 23, 2020. ISSN en línea 0719-7721.

- Castro, L. (2018). Movimientos sociales: herramientas conceptuales. *Revista de estudios políticos y estratégicos*, 6 (2): 36-57, 2018 - ISSN 0719-3653 (impreso) ISSN 0719-3688 (en línea). Recuperado de: <https://sitios.vtte.utem.cl/revistaepe/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/revista-estudios-politicos-estrategicos-epe-vol6-n2-2018-Castro.pdf>
- Cerutti, P. (2020). Gobernar para el bienestar. TED Talks. [Audio en podcast]. Recuperado de: https://www.ted.com/talks/paula_cerutti_gobernar_para_el_bienestar
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2019). *Panorama Social de América Latina, 2018 LC/PUB.2019/3-P*, Santiago, 2019.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2019). *La economía de América Latina en 1980*. en *Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina*, núm. 333, Santiago de Chile, enero de 1987.
- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, (2017). *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Colombia*. Recuperado de: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/informe%20ONU%20COLOMBIA.pdf>
- Collier, D. (1993). Método comparativo. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*. Volumen V. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/RUCP_Collier_1992v.5.pdf
- Cortés, F. (2003). Neoliberalismo, globalización y pobreza. *Estudios Políticos*, (22), 151-167. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/17592>
- Cruz, E. (2013) “Todos somos hijos del café”: sociología política del Paro Nacional Cafetero Entramado, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, 2013, pp. 138-158. Universidad Libre. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/2654/265429948010.pdf>
- Cruz, E. (2014). La rebelión de las ruanas: el paro nacional agrario en Colombia. *Revista Análisis*, vol. 49, núm. 90, pp. 83-109, 2017. Universidad Santo Tomás. DOI: 10.15332/s0120-8454.2016.0090.04
- Del Campo Garcia, M. E., Güemes, M. C., & Rodrigo, L. P. (2017). «I can't get no satisfaction». *Servicios públicos, democracia y clases medias en América Latina*. *América Latina Hoy*, 77, 161-187. <https://doi.org/10.14201/alh201777161187>. DEMOCRACIA Y CLASES MEDIAS EN AMÉRICA LATINA. Ediciones Universidad de Salamanca

- Delgado, C., Esnaola, J., & Ratto, N. La problemática del trabajo en la corriente neomarxista de la teoría de la dependencia y en sus derivaciones posteriores (1966-2011). *Panorámica del Trabajo en el Chile Neoliberal*, 33. Recuperado de: https://issuu.com/geit0/docs/panor__mica-del-trabajo-en-el-chile
- Departamento Nacional de Estadística, (2021). Pobreza monetaria en Colombia. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
- Deutsche Welle, (2020). Protestas en Chile han dejado 22 muertos y 2.200 heridos. Recuperado de: <https://www.dw.com/es/protestas-en-chile-han-dejado-22-muertos-y-2200-heridos/a-51260307>
- Féliz, M. (2015). ¿Qué hacer... con el desarrollo? Neodesarrollismos, buen vivir y alternativas populares. *Sociedad y Economía*, (28), 29-50. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n28/n28a03.pdf>
- Feres, J.C., & Mancero, X. (2001) Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. Publicación de las Naciones Unidas. ISBN: 92-1-321706-4. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4740/S01010056_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fleet, N. (2020). Protesta social y crisis del poder neoliberal en Chile 2011–2019. *Revista Pleyadé*, *Número especial*, 10–17.
- Fundación Konrad, (2015). Movilización social y representación política en países de Latinoamérica: Colombia en perspectiva comparada con Chile y Perú.
- Ganter, R., & Zarzuri, R. (2020). Rapsodia para una revuelta social: retazos narrativos y expresiones generacionales del 18-o en el Chile actual. *Universum (Talca)*, 35(1), 74-103. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762020000100074>

- García, M. (2012). Una década de luchas estudiantiles. Cien días vistos por Cinep, No. 74 | diciembre 2011 – marzo 2012. Recuperado de: <https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20111201.ciendias74.pdf>
- Giraldo, H. y De la Cruz, G. (2016) La influencia neoliberal en las políticas educativas en Colombia. in Revista Criterio Libre Juridico. Revistas Unilibre. DOI: 10.18041
- Harvey, D. (2005). El nuevo imperialismo. Socialist register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf>
- Human Rights Watch, (2021). Colombia: brutalidad policial contra manifestantes. Recuperado de: <https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/colombia-brutalidad-policial-contra-manifestantes>
- Katz, C. (2008). Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, abril de 2008. Recuperado de: <https://catedralibrets.files.wordpress.com/2015/04/76699608-katz-claudio-las-disyuntivas-de-la-izquierda-en-america-latina.pdf>
- IDERE LATAM (2019). Índice de desarrollo regional Latinoamérica. Resumen ejecutivo. Recuperado de: <http://www.iderelatam.com/wp-content/uploads/2020/10/IDERE-LATAM-2020-Resumen-Ejecutivo.pdf>
- Lamadrid, S., & Bennit, A. (2019) “Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016”. Revista Estudios Feministas, Florianópolis, v. 27, n. 3, e54709, 2019. <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n354709>
- Lilloy, J. (2015). *La escuela estructuralista latinoamericana: (Trabajo final de grado)*. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Recuperado de: <https://bdigital.uncu.edu.ar/7550>
- Luna, J.P. (2015). Estudio preliminar. Movilización social y representación política en países de Latinoamérica. Fundación Konrad. Bogotá DC.
- Mallorquín, C. 2001. El institucionalismo norteamericano y el estructuralismo latinoamericano: ¿discursos compatibles?”, Revista Mexicana de Sociología , núm. 1, ene-marzo, 2001. Recuperado de: https://www.academia.edu/8242619/_El_institucionalismo_norteamericano_y_el_estructuralismo_latinoamericano_discursos_compatibles_

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

- Márquez, H. (2010). La gran crisis del capitalismo neoliberal. *Andamios*, 7(13), 57-84. Recuperado en 10 de abril de 2021, de www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632010000200004&lng=es&tlng=es.
- Mayol, A. (2020). Protestas y Disrupción Política y Social en Chile 2019: Crisis de Legitimidad del Modelo Neoliberal y Posible Salida Política por Acuerdo de Cambio Constitucional. *Asian Journal of Latin American Studies* (2020) Vol. 33 No. 2: 85-98
- Ministerio de Educación, (2020). Histórico de afiliación régimen subsidiado. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/serie-departamental-afiliados-contributivo-2005-2016.pdf>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2020). Caracterización socioeconómica. Recuperado de: <https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fichaIndicador/750/1>
- Mora, K. (2020). Las luchas sociales en la teoría marxista de la dependencia: los aportes de Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra en la perspectiva del pensamiento latinoamericano contemporáneo. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/47646/TG.%20Heidy%20Mora.%20Las%20luchas%20sociales%20en%20la%20teor%C3%ADa%20marxista%20de%20la%20dependencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Morales, G. M. (2015). *Neoliberal Modernity Crisis in Latin America at the Twenty-First Century: Social Cleavages, National Challenges and Hemispheric Revisionism*. Ottawa, Carleton University. Ph.D. thesis.
- Observatorio Chileno de Políticas Educativas, (2014). ¿Por qué la Ley General de Educación no mejora el sistema educativo en sus pilares? Recuperado de: http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/pk_lge_no_solucion.pdf
- O'Donnell, G. (1997). *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós, pp. 69-127
- OECD, (2014). *Panorama de la educación 2014. Nota país: Colombia*. Recuperado de: https://www.oecd.org/education/Colombia_EAG2014_CountryNote_ESP.pdf
- OECD, (2019). *Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en.

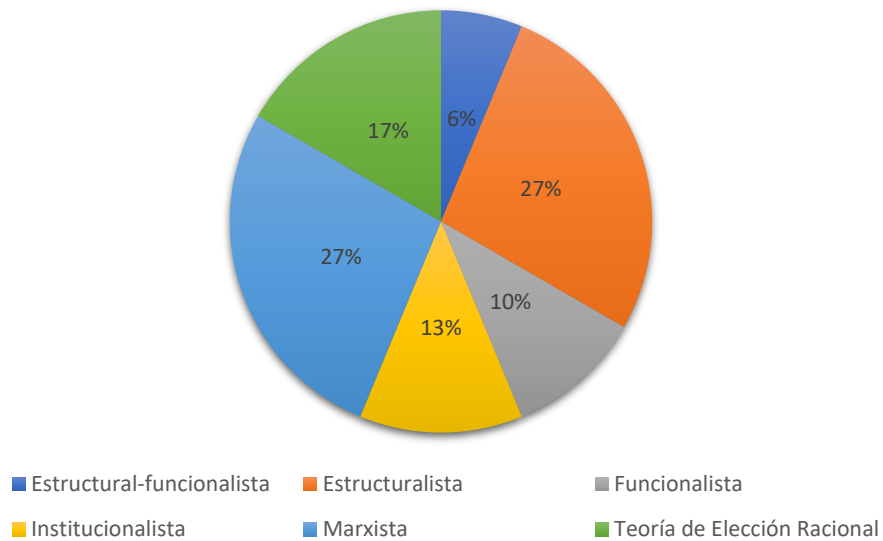
- OECD, (2019). Estudios económicos de la OCDE: CHILE 2018. OECD Publishing, Chile. www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-ÐŠŠŭĜ.htm
- OECD, (2019). Estudios Económicos de la OCDE: CHILE. Resumen ejecutivo. Recuperado de: <https://www.oecd.org/economy/chile-economic-snapshot/>
- OECD, (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>.
- OECD, (2019). Estudios Económicos de la OCDE: Colombia. Recuperado de: <https://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/>
- Paredes, J.P (2019). De la Revolución Pingüina a la arena de la gratuidad. Balance de 10 años de luchas estudiantiles en Chile (2007-2017). Fundación española de Sociología. isbn: 978-84-09-09287-1. Recuperado de: <https://www.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/06/Capitulo-libro-movimientos-sociales-esp%C3%B1a-2019.pdf>
- Pastor, J. (2006). Los movimientos sociales. De la crítica de la modernidad a la denuncia de la globalización versión On-line ISSN 2173-4712 versión impresa ISSN 1132-0559. Psychosocial Intervention vol.15 no.2 Madrid 2006. Recuperado de: <https://scielo.isciii.es/pdf/inter/v15n2/v15n2a02.pdf>
- Petras, J. & Veltmeyer, H. (2011). Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance. *Palgrave Macmillan*. DOI: 10.1057/9780230117075
- PNUD (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/undp_cl_pobreza-Libro-DESIGUALES-final.pdf
- PNUD (2019). Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Nueva York, NY. Recuperado de: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ONU%20INFORME%20COLOMBIA.pdf>
- Pueblos, E.J. (2020). Esbozo de una radiografía política del paro en Colombia. Revista Cepa. Vol. 3 Núm. 30 (15): MovilizACCIÓN - Edición especial. Recuperado de: <https://revistacepa.net/ojs/index.php/cepa/article/view/7>
- Rozas, J., & Maillet, A. (2019). Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: innovación en el repertorio de estrategias del movimiento No Más AFP en Chile (2014-2018). *Izquierdas*, (48), 1-21. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492019000400001>

- Seoane, J; Taddei, E; Algranati, C. (2001). Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta. *Revista Cronos*, VII, 1-8. 2021, febrero 20, De El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Base de datos.
- Shearmur, J. (2018). In Defense of Neoliberalism. *Journal of Democracy*, Volume 3, Number 3, July 1992, pp. 75-81 (Article). Published by Johns Hopkins University Press DOI: <https://doi.org/10.1353/jod.1992.0047>. Access provided by University of South Dakota (10 Sep 2018 20:40 GMT)
- Silva, E. (2009). Frontmatter. In *Challenging Neoliberalism in Latin America* (Cambridge Studies in Contentious Politics, pp. I-Viii). Cambridge: Cambridge University Press. University Press, 2009.
- Sosa, S. (2012). Otro mundo es posible: crítica del pensamiento neoliberal y su visión universalista y lineal de las relaciones internacionales y el sistema mundial. *Rev. mex. cienc. polít. soc* vol.57 no.214 Ciudad de México ene./abr. 2012. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182012000100003
- Sotelo, A. (2005). América Latina: de crisis y paradigmas: la teoría de la dependencia en el siglo XXI. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: "http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/uacm/20170516043118/pdf_131.pdf"
- Stolowicz, B. (2005) "La tercera vía en América Latina: de la crisis intelectual al fracaso político". En Estrada Álvarez, Jairo (editor): *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005. Recuperado de: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69030/ReferencialesPobreza_1990-2014.pdf?sequence=1
- Torres, J.C. (1998). *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires: Paidós, 1998.
- Valenzuela, I. (2019). "Estallido social" y teoría social: aportes a la reconceptualización de las relaciones entre mercado y sociedad. Páginas 5-33. *Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 28 Núm. 43 (Jul-Dic 2019).
- Wallerstein I. (1993). The World-System after the Cold War. *Journal of Peace Research*. 1993;30(1):1-6. doi:10.1177/0022343393030001001

ANEXOS

Anexo 1: Distribución de enfoques teóricos en estudios sobre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia

Distribución de enfoques teóricos en estudios sobre neoliberalismo y protesta social en Chile y Colombia



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la matriz metodológica

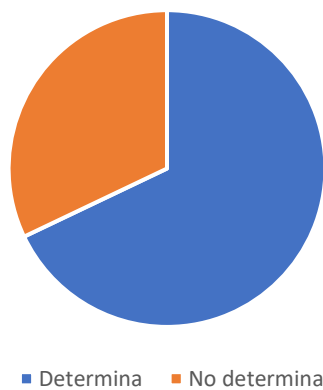
Anexo 2: Producción de estudios sobre neoliberalismo y protesta social por décadas y enfoques



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la matriz metodológica

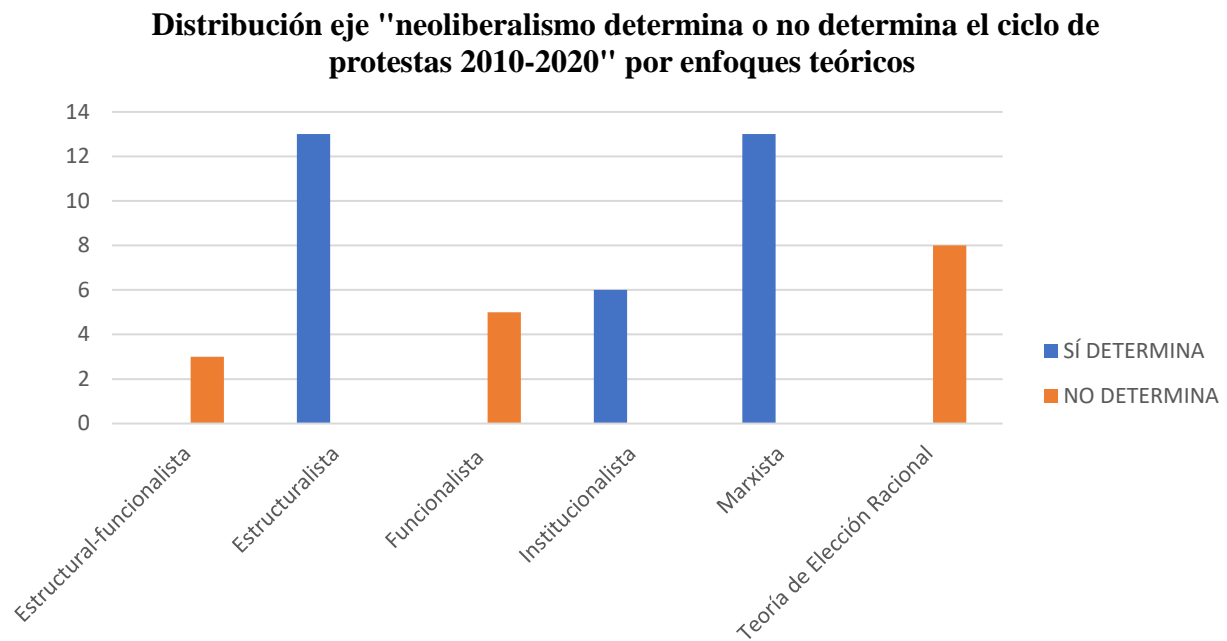
Anexo 3: Distribución del eje “neoliberalismo determina o no el ciclo de protestas 2010-2002”

Distribución del eje "neoliberalismo determina o no el ciclo de protestas 2010-2020"



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la matriz metodológica

Anexo 4: Distribución eje “neoliberalismo determina o no determina el ciclo de protestas 2010-2020” por enfoques teóricos



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la matriz metodológica

Inventario bibliográfico producción de estudios sobre neoliberalismo y protesta social Chile y Colombia 2010-2020

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	AÑO	ENFOQUE TEÓRICO	DISEÑO METODOLÓGICO	HIPÓTESIS	COMENTARIO	APORTE	VACÍO
Billion, D; Ventura, C. ¿Por qué protesta tanta gente a la vez? Nueva Sociedad 286, Marzo - Abril 2020	2020	Estructuralista	Análisis teórico conceptual	Las movilizaciones de los últimos años tienen en común unos elementos económicos y sociales que persisten en el tiempo desde la década del 2010 hasta ahora	Ubican los antecedentes con la crisis financiera del 2008	Delimita un periodo de tiempo y atribuye unas causas sociales y económicas respaldadas con datos cuantitativos	No cuestiona el modelo neoliberal, atribuye las causas a un desbalance económico, más no da cuenta de una crisis estructural
Fleet, N. Protesta social y crisis del poder neoliberal en Chile 2011-2019. Revista Pleyadé	2019	Estructuralista	Análisis cualitativo- estudio de caso	crisis de la relación entre Estado y sociedad, es decir, una crisis de legitimidad, cuya previsibilidad está inscrita en la estructura misma del Estado neoliberal. Hoy el poder neoliberal se queda sin razones y es defendido a través de la coacción; en condiciones normales, la legitimidad neoliberal se ha asegurado a través de consumo, redistribución focalizada y "nueva gestión pública".	El neoliberalismo pudo desviar la movilización social y evitar la politización del Estado mismo. ¿Cómo? A través de la concertación. La crisis se explica por la concertación	La concertación como elemento catalizador social y preventivo de "estallismo"	No hay alusión a la crisis de las finanzas públicas
Seoane, J; Taddei, E; Algranati, C. Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta.	2010	Marxista	Análisis cuantitativo	los registros de protesta contabilizados para dieciocho países latinoamericanos se incrementan en un 64% en relación con los primeros cuatro meses del año. El incremento de las movilizaciones, huelgas y bloqueos de rutas impulsadas por distintos colectivos y organizaciones se manifiestan en un contexto regional signado por la expansión y agravamiento de la crisis económica. En respuesta al deterioro social que ésta implica y a los intentos, por parte de la mayoría de los gobiernos de la región, de responder a esta situación con políticas de corte neoliberal particularmente de reducción del gasto fiscal,		Presenta algunas reflexiones sobre las características destacadas que presenta el aumento de las acciones de protesta	

				el aumento de la conflictividad social muestra características particulares			
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2018 LC/PUB.2019/3-P, Santiago, 2019.	2019	Estructuralista	Análisis cuantitativo	La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central.	Se coincide con una de nuestras hipótesis de interés respecto al crecimiento económico sostenido y el aumento de la desigualdad y la pobreza.	Informe estadístico cifras pobreza y desigualdad en LATAM desde el 2010 al 2019	
Bonavente, A. (2008). Estallidos sociales y escenarios de ingobernabilidad: consideraciones sobre el rupturismo en América Latina	2008	Funcionalismo	Análisis cualitativo-recorrido histórico	Plantea el concepto de rupturismo social como una expresión de movilización de protesta extendida y violenta que apunta a cuestionar la institucionalidad vigente en un país determinado y, en algunos casos, de manera muy especial y fundamental, su modelo económico, aun cuando no se encuentre consolidado o esté en los inicios de su implantación	Propone nuevas terminologías para categorizar lo que sucede después del estallido de las movilizaciones sociales	Concepto de “estallido” a rupturismo social	Tiene un sesgo positivo frente al papel de los militares
Márquez Covarrubias, Humberto. (2010). La gran crisis del capitalismo neoliberal. Andamios, 7(13), 57-84. Recuperado en 10 de abril de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632010000200004&lng=es&tlng=es	2010	Marxista	Análisis teórico conceptual-recorrido histórico	se argumenta que la crisis representa la declinación del proyecto de expansión capitalista neoliberal encabezado por los monopolios y oligopolios transnacionales, los estados imperiales y los organismos internacionales, instancias que dan cuerpo al llamado imperialismo colectivo (Amin, 2005), y que posicionan a la humanidad entera en una encrucijada epocal: consecuentar los intereses del capital o anteponer las necesidades de reproducción de la vida (Hinkelammert y Mora, 2008).	Crisis del capitalismo en clave neoliberal expone también un peligro para la humanidad. Para el autor la teoría de las crisis cíclicas ha perdido validez en tanto llevamos 20 años en declive económico	Expone ocho posiciones sobre la actual crisis, que tienen en común una crítica a la expansión del capital financiero y su caída especulativa; la caída del crecimiento, la inversión y el empleo. Las diferencias afloran respecto de la consideración de las causas, responsabilidades y soluciones. Entre los vacíos podemos destacar que no se identifican las novedades o peculiaridades de la crisis, sino que hay una recuperación de explicaciones de	surge la necesidad de construir una explicación que dé cuenta de los procesos viejos o continuos y los elementos nuevos o emergentes.

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

						las crisis precedentes.	
Castro, Luis (2020). La protesta social en América Latina: una aproximación a su fisonomía a propósito de los estallidos sociales de 2019. RUMBOS TS, año XV, Nº 23, 2020. ISSN en línea 0719-7721.	2020	Teoría de elección racional	Análisis cualitativo	En general, se identifican cuatro fases o procesos presentes en las protestas del 2019. se configuran nuevos esquemas de significación que reúnen las atribuciones y señalamientos de varias organizaciones, esto es "marcos maestros" que tienen por finalidad articular fuerzas y movilizar a la sociedad (Snow y Benford, 1988; 1992);		Identifica un repertorio de cuatro pasos que caracterizaron las protestas del 2019	No hay referencia a las razones de la crisis, no hay mención de la crisis financiera del 2008, ni los antecedentes de las protestas en Latinoamérica sino más bien un recorrido histórico de la protesta desde sus inicios en 1700
Almeida, Paul. (2017). Movimientos sociales en América Latina	2017	Estructural-funcionalista	Análisis cuantitativo	Los procesos de globalización económica impulsados por las medidas neoliberales crearon nuevas amenazas contra las que se movilizan grandes contingentes (Almeida, 2014). Las dos principales amenazas relacionadas a la globalización son las ambientales y las económicas.		División de los grupos de campaña contra la globalización en 3 1) movimientos de trabajadores, de estudiantes y del sector informal; 2) nuevos movimientos sociales; y 3) grupos rurales e indígenas. Estas tres categorías forman la base de la resistencia a la globalización a través de la región.	
Briebe, D. (2020). El estallido social en Chile desde el igualitarismo relacional de Elizabeth Anderson. Revista de Sociología, 35(1), 31 -42. doi: 10.5354/0719-529X..2020.58105	2020	Teoría de la elección racional	Análisis teórico conceptual	Las quejas de fondo que se manifestaron en el estallido social chileno son las demandas por la dignidad, la igualdad y el fin de los abusos, pero el ideal de igualdad democrática de Anderson propone un programa sistemático, radical e internamente coherente de cambios sociales para avanzar en esa dirección. En ese sentido, esta agenda es considerablemente más ambiciosa y comprehensiva que las que actualmente se discuten en Chile por los principales sectores políticos.	Es muy interesante la aproximación al modelo de Anderson en tanto igualitarismo democrático	Nuevo marco conceptual teórico para explicar el carácter de la protesta chilena y proponer nuevas aproximaciones a las mismas	Es ambicioso y se aleja de la explicación de las causas socioeconómicas para el estallido social
Sosa, Samuel. (2012). Otro mundo es posible:	2012	Marxista	Recorrido histórico	el actual campo de batalla de las ideas y nuevos saberes, la estrategia del pensamiento	Valioso para la sección de	Línea de tiempo de neoliberalismo	Deja por fuera las explicaciones cepalinas

crítica del pensamiento neoliberal y su visión universalista y lineal de las relaciones internacionales y el sistema mundial. Rev. mex. cienc. polít. soc vol.57 no.214 Ciudad de México ene./abr. 2012				neoliberal y su pragmatismo político-económico – sustentado, particularmente, en el 'triumfo' de las leyes del mercado mundial y en la 'victoria' de la democracia, la libertad y los valores occidentales–, produjeron e impulsaron, durante de los últimos treinta años y desde una visión eurocéntrica, ⁸ concepciones e interpretaciones de carácter universalista, lineales y dogmáticas de la historia, la cultura y la política del sistema-mundial; asimismo, la ideología neoliberal, expresada en los actuales enfoques racionalistas de las relaciones internacionales fue impuesta como paradigma dominante de validez universal tanto en la producción del conocimiento y el estudio de la Teoría Internacional como en la racionalidad instrumental de la praxis en la política mundial.	antecedentes históricos	en América Latina muy establecida.	
Challenging Neoliberalism in Latin America, by Eduardo Silva. New York, NY: Cambridge University Press, 2009.	2009	Institucionalista	Recorrido histórico-análisis cualitativo	Con el neoliberalismo, se creó una sociedad de mercado que constituyó el motivo de las movilizaciones pre marea rosa	Importante: aporte de Polanyi y Chile	Ubica el motivo de la movilización en la sociedad de mercado que desarticuló los estados de bienestar latinoamericanos	No analiza el caso de Chile en clave antineoliberal
Boccardo, Giorgio. (2013) Clases y grupos sociales en América Latina hoy Argentina, Brasil y Chile	2013	Marxista	Análisis cualitativo	Esta investigación indaga respecto a los procesos de constitución y desarticulación de clases y fracciones sociales en relación a las orientaciones que el modelo de desarrollo adopta en Argentina, Brasil y Chile.	Perspectiva desde el neoliberalismo frente al colapso luego del consenso de Wáshington	Mención a dos de los enfoques teóricos de interés	No hay una verdadera referencia al tema de la protesta social, probablemente porque es un estudio sobre clases sociales
Babb, Sarah. (2011) Reviews. American Sociological Association 2011 DOI: 10.1177/0094306111412516 http://cs.sagepub.com	2011	Institucionalista	Análisis cualitativo	Book review Challenging neoliberalism in Latin America	Importante: aporte de Polanyi y Chile	Ubica el motivo de la movilización en la sociedad de mercado que desarticuló los estados de bienestar latinoamericanos	No analiza el caso de Chile en clave antineoliberal
Stolowicz, Beatriz: "La tercera vía en América Latina: de la crisis intelectual al fracaso político". En Estrada Álvarez, Jairo (editor):	2005	Marxista	Análisis cualitativo	Aplicación de la tercera vía en América Latina tras el fracaso del consenso de Washington fue solo un giro mediático más una reforma de fondo		Opinión neoliberal frente a la crisis luego del consenso de Wáshington	

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005.							
Pastor, Jaime 2006. versión On-line ISSN 2173-4712 versión impresa ISSN 1132-0559 Psychosocial Intervention vol.15 no.2 Madrid 2006	2006	Estructuralista	Análisis teórico conceptual	Los movimientos sociales entendidos desde el estructuralismo y el enfoque de análisis cultural	Importante la visión que tiene sobre neocorporatismo	Aporte de la escuela estructuralista frente a la perspectiva de los movimientos sociales a propósito de la revolución del sistema mundo de Wallerstein	No hay mención a los movimientos sociales latinoamericanos
Valenzuela, Iván 2019 "Estallido social" y teoría social: aportes a la reconceptualización de las relaciones entre mercado y sociedad Páginas 5-33 Revista de Ciencias Sociales, Vol. 28 Núm. 43 (Jul-Dic 2019) 5	2019	Estructuralista	Análisis teórico conceptual	Los estallidos se explican desde el doble movimiento polanyiano, donde en la sociedad de mercado, el Estado representa la contradicción entre economía y sociedad	Importante: doble movimiento polanyiano	Aporta una perspectiva estructural desde el institucionalismo de Polanyi y el doble movimiento Polanyiano	Explicación escasa más allá de la teórica sobre Polanyi. Deja a un lado las características del estallido
Afonso de Aguiar y Benedito Da Silva, 2010. A crítica novo-institucionalista ao pensamento da Cepal: a dimensão institucional e o papel da ideologia no desenvolvimento econômico	2019	Estructuralista-institucionalista	Análisis teórico conceptual	Los autores plantean una crítica a la crítica que el institucionalismo hace del estructuralismo, defendiendo la teoría cepalina		Imbricación entre institucionalismo y estructuralismo es mayor del que a los institucionalistas les gustaría admitir	No hay referencias a las protestas o ciclo de protestas específicamente
Lillo, Julián Francisco. 2015. La Escuela Estructuralista Latinoamericana. Universidad del Cuyo	2015	Estructuralista	Análisis teórico conceptual-recorrido histórico	el neoestructuralismo no representa una continuidad a la tradición estructuralista. Se trata de un estudio cualitativo ya que intenta investigar una escuela de pensamiento y sus principales autores, con finalidad básica ya que el propósito es adquirir conocimientos específicos sobre el tema		Aproximación histórica de la CEPAL	No hay referencia al ciclo de protesta social específicamente.
Mallorquín, Carlos. 2001. El institucionalismo norteamericano y	2001	Estructural-institucionalista	Análisis teórico conceptual	Las similitudes entre el institucionalismo norteamericano y el estructuralismo	Mixtura entre institucionalismo y estructuralismo	Mixtura entre institucionalismo y estructuralismo	-

el estructuralismo latinoamericano: ¿discursos compatibles?", <i>Revista Mexicana de Sociología</i> , núm. 1, ene-marzo, 2001				latinoamericano en sus respectivas concepciones teóricas sobre los mecanismos que hacen posible comprender el funcionamiento de la "economía", su acepción sociológica-histórica, así como sus estrategias para desarrollar un vocabulario conceptual distinto al del pensamiento económico dominante hacen posible un fructífero diálogo entre ellas			
Sotelo, Adrián. (2005). América Latina: de crisis y paradigmas : la teoría de la dependencia en el siglo XXI. Universidad Nacional Autónoma de México. " http://biblioteca.claco.edu.ar/Mexico/uacm/20170516043118/pdf_131.pdf "	2005	Compilado funcionalista estructuralista y marxista	Análisis teórico conceptual. Recorrido histórico	Se evalúa la vigencia de la teoría marxista de la dependencia (TMD) para el siglo XXI y se realiza un balance sobre sus limitaciones y alcances. Para ello el autor se remonta a sus orígenes, a su trayectoria histórica en las décadas de los sesenta y setenta a través de sus principales representantes y a la fase de su agotamiento estructural funcionalista que permeó sus métodos y enfoques teóricos en ese periodo.	Crítica funcionalista	Aporta la corriente teórica del dualismo estructural presente en las explicaciones funcionalistas del modelo de desarrollo neoliberal	No hay referencia a la conexión con las protestas pero aporta luces para intuir cómo lo interpretan los funcionalistas
Shearmur, Jeremy. (2018). In Defense of Neoliberalism. <i>Journal of Democracy</i> , Volume 3, Number 3, July 1992, pp. 75-81 (Article) Published by Johns Hopkins University Press DOI: For additional information about this article Access provided by University of South Dakota (10 Sep 2018 20:40 GMT) https://doi.org/10.1353/jod.1992.0047	2018	Funcionalista	Análisis cuantitativo-teórico conceptual	El autor critica la idea de la intervención del Estado ante las fallas de las lógicas del mercado, en defensa del modelo de desarrollo neoliberal		Aporta la teoría de Hayek y Adam Smith y su relevancia para la comprensión de la ideología neoliberal	No hay referencia a la cuestión de las protestas, pero se puede entrever una tendencia
Casey, Terrence. (2016). In defense of neoliberalism. Paper presented at the Political Studies Association Annual Conference. Brighton, England, 21-23 March 2016	2016	Funcionalista	Análisis cuantitativo	Este artículo refuta esta posición antineoliberal y ofrece una defensa del crecimiento neoliberal. A largo plazo, el historial macroeconómico de las economías neoliberales fue bastante positivo, aunque con períodos rápidos de crecimiento marcados por recesiones inducidas financieramente.		Aporta la necesidad de reformar el neoliberalismo sin necesidad de deshacerse de el	No hay referencia a las protestas explícitamente

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

Mora, Katherine. (2020). Las luchas sociales en la teoría marxista de la dependencia: los aportes de Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra en la perspectiva del pensamiento latinoamericano contemporáneo. Pontificia Universidad Javeriana	2020	Marxista	Análisis cualitativo	Análisis de la teoría de la dependencia marxista desde los sociólogos brasileños Mauro Marini y Vania Bambirra.	Importante el recorrido histórico teórico de la teoría de la dependencia marxista	Aportar la clasificación dentro de la teoría de la dependencia marxista con base en la incorporación de variable luchas sociales: teoría de las luchas condicionadas autónomas y teoría de las luchas sobredeterminantes	Es un texto del 2020 sobre luchas sociales pero no hay referencia al ciclo de protestas del 2020.
Alvear, Rafael (2019). Once tesis sobre la crisis de concentración de la sociedad chilena. Revista de crítica política, social y cultural REDSECA. ISSN 0718-8927	2019	Marxista	Análisis cualitativo	Hay una concentración de los sistemas sociales que termina estratificando el rendimiento de estas esferas, lo cual genera un momento de crisis	Importante: concepto de concentración	Aporta el concepto de concentración y estratificación	No hay referencia a la protesta en Colombia
Castro, Luis (2018). MOVIMIENTOS SOCIALES: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES. REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 6 (2): 36-57, 2018 - ISSN 0719-3653 (impreso) ISSN 0719-3688 (en línea)	2018	Compilado Marxista, estructural-funcionalista, teoría de la elección racional	Análisis cualitativo recorrido histórico	La protesta social es un mecanismo de participación política fundamental para la defensa de los derechos naturales que, pese a su regularización, no deja de ser habitual en el orden mundial contemporáneo. Indagando por las certidumbres sobre el tema, este artículo procura una aproximación general al campo epistemológico de su expresión más insigne: los movimientos sociales y a la amplia tradición académica que los explica, con el fin de condensar y suministrar, a quien se interese en su estudio, las herramientas conceptuales para su análisis	Relevante como compilado de los enfoques para el análisis político de las acciones colectivas	Aporta el análisis del enfoque estructural funcionalista	No hay referencia a la variable del modelo de desarrollo
Juan Carlos Torre, El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires: Paidós, 1998.	1998	Estructuralista-Institucionalista	Análisis cualitativo	Los países de América latina atraviesan en la actualidad las vicisitudes propias de un cambio de época. Dos orientaciones de política económica condensan el signo de los nuevos tiempos: la racionalización y la reducción del papel del Estado en la economía y la redefinición de las relaciones entre las economías nacionales y el mercado internacional, en favor de una mayor integración.	Importante: cuestión César Gaviria	Aporta reconstrucción histórica del neoliberalismo en Colombia	

Ganter, Rodrigo y Zarzuri, Raul (2020). RAPSODIA PARA UNA REVUELTA SOCIAL: RETAZOS NARRATIVOS Y EXPRESIONES GENERACIONALES DEL 18-O EN EL CHILE ACTUAL	2020	Estructuralista	Análisis cualitativo	El objetivo básico del artículo es presentar el trabajo preliminar de contextualización del estallido social 18-O, la discusión bibliográfica y las hipótesis de trabajo provisorias, poniendo en perspectiva lo ocurrido en el marco del denominado estallido social en Chile, particularmente desde lo que llamamos las implicancias generacionales puestas en juego en este acontecimiento.	Importante: datos ONU desigualdad y brecha generacional	Aporta insumos teóricos para la comprensión de la protesta en Chile desde la variable generacional	No indaga profundamente en la cuestión de las desigualdades.
Cadarso, Pedro. (2001) Principales teorías sobre el conflicto social. Revista de historia. Cáceres, 237-254. Dialnet	2001	Compilado funcionalista-estructuralista-marxista-estructural funcionalista	Análisis teórico conceptual	Teorías de la conflictividad social pueden ser analizadas desde la perspectiva marxista, funcionalista, estructuralista	¿Concepción de la teoría de la conflictividad social, distinta de la protesta o acción colectiva?	Aporta explicación por enfoques de las teorías de la conflictividad social	No hay mención específica del fenómeno de la acción colectiva
Mayol, Alberto (2020). Protestas y Disrupción Política y Social en Chile 2019: Crisis de Legitimidad del Modelo Neoliberal y Posible Salida Política por Acuerdo de Cambio Constitucional. Asian Journal of Latin American Studies (2020) Vol. 33 No. 2: 85-98	2020	Estructuralista	Análisis cualitativo y cuantitativo	Los períodos de protesta global ocurridos en 2011 y 2019 podrían en realidad ser el mismo ciclo. En ambos casos, Chile ha sido el más caso disruptivo, a pesar de ser (al mismo tiempo) un país emblemático por la paz social y el orden institucional a lo largo de la posdictadura era, asumiendo que la transición política chilena fuera aclamada como un ejemplo	Importante: Hipótesis del ciclo de protestas de 2010-2020 y la sistematización de las protestas de este periodo de tiempo	Aporta la hipótesis del mismo ciclo de protestas	No hay profundización en las protestas de latinoamérica
Ganter, Rodrigo y Zarzuri, Raul (2020) Rapsodia para una Revuelta Social: retazos narrativos y expresiones generacionales del 18-O en el Chile actual. UNIVERSUM · Vol. 35 · N° 1 · 2020 · Universidad de Talca	2020	Estructuralista-institucionalista	Multimétodo (entrevistas en profundidad, observación participante, revisión de prensa y análisis crítico de literatura)	El objetivo básico del artículo es presentar el trabajo preliminar de contextualización del estallido social 18-O, la discusión bibliográfica y las hipótesis de trabajo provisorias, poniendo en perspectiva lo ocurrido en el marco del denominado estallido social en Chile, particularmente desde lo que llamamos las implicancias generacionales puestas en juego en este acontecimiento.	Importante: datos sobre world protest report	Hipótesis generacional y caracterización de esta discusión	
Paredes, Juan Pablo (2019) De la Revolución Pingüina a la arena de la gratuidad. Balance de 10 años de luchas estudiantiles en Chile (2007-2017). Fundación	2019	TER	Análisis cualitativo-recorrido histórico	el ciclo de luchas estudiantiles de los últimos diez años repolitizó la sociedad chilena después de un periodo de pasividad política contenciosa (1990-2005), reducida a su expresión electoral, generando una serie	Importante antecedente revolución pingüina	Aporta una periodización del movimiento estudiantil desde el 2007 hasta el 2018	No hay mención a la cuestión de las AFP

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

española de Sociología				de consecuencias político-culturales –entre las más relevantes, el registro de lo público en relación a la educación y el registro de la subjetividad colectiva de los actores movilizados–, sin por ello lograr cambiar la lógica política-institucional elitista imperante desde el retorno a la democracia.			
ALVAREZ, Silvia Lamadrid; NAVARRETE, Alexandra Benitt. "Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016". Revista Estudios Feministas, Florianópolis, v. 27, n. 3, e54709, 2019. Financiación: Financiado por el Programa de Apoyo a la Productividad Académica, PROA VID 2014; Universidad de Chile (Academic Productivity Support Program, PROA VID 2014; University of Chile).	2019	TER	Análisis cualitativo-recorrido histórico	En el contexto de una reactivación de los movimientos sociales, el feminismo en Chile ha adquirido creciente protagonismo en el espacio público, con una diversidad de corrientes y organizaciones que intentan articularse en torno a la definición de sus demandas como movimiento social, considerando el debate entre autonomía e institucionalización. Basadas en una línea de tiempo virtual que documenta las principales movilizaciones públicas feministas en el período 2007-2016, se describen las principales características de ese proceso y analizan los principales nudos de la acción colectiva feminista en el país, evidenciando el emergente protagonismo de las nuevas generaciones desde organizaciones universitarias	Línea de tiempo feminismo Chile, se conecta con movilización estudiantil a partir del 2011	Aporta una conceptualización de las luchas feministas en Chile desde la instauración de la democracia	No hay una explicación de la contribución del movimiento feminista al estallido
Rozas Bugueño, Joaquín, & Maillat, Antoine. (2019). Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: innovación en el repertorio de estrategias del movimiento No Más AFP en Chile (2014-2018). Izquierdas, (48), 1-21. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492019000400001	2018	TER	Análisis cualitativo	describir el conjunto de tácticas usadas por el movimiento, más allá de la tradicional frontera <i>insiders-outsiders</i> ; y explorar cuáles son los factores que determinan la innovación en el repertorio de estrategias del movimiento. Para ello, toman la propuesta de Rossi (2015), quien construye el concepto de repertorio de estrategias para superar la distinción entre repertorios convencionales y no convencionales. La innovación del repertorio de No Más AFP está asociada al contexto político - caso Myriam Olate, beneficios tributarios de las AFP y elecciones nacionales - y a	Importante: descripción de los objetivos de las AFP	Aporta la descripción de los objetivos de las AFP en clave antineoliberal de Eduardo Silva	No hay mención a como esto impacta el estallido

				definiciones internas - en particular la preocupación por la autonomía de los movimientos sociales respecto a los partidos políticos.			
Cruz-Rodríguez, Edwin. (2013) "Todos somos hijos del café": sociología política del Paro Nacional Cafetero Entramado, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, 2013, pp. 138-158 Universidad Libre	2013	TER	Análisis cualitativo	examina los factores que hicieron posible esta acción colectiva. En la primera parte se reconstruye la contienda política entre los manifestantes y sus adversarios, y sus estrategias en distintos momentos. En la segunda se examinan las variables explicativas de la protesta, la estructura de oportunidad política (EOP) en que tiene lugar, las estructuras de movilización que la soportaron y los marcos de acción colectiva que se pusieron en práctica.	Pliego de peticiones de los cafeteros	Aporta un análisis del paro cafetero colombiano del 2013 en clave de Mcadams estudiando la contienda política	No hay referencia al paro campesino (aunque luego el mismo autor elabora un artículo idéntico en corpus teórico, pero sobre el paro campesino)
Cruz, Edwin. La rebelión de las ruanas: el paro nacional agrario en Colombia. (2014). Revista Análisis, vol. 49, núm. 90, pp. 83-109, 2017.Universidad Santo Tomás	2014	TER	Análisis cualitativo	analiza el origen y desarrollo del paro agrario de 2013, con base en el enfoque para el estudio de los movimientos sociales conocido como la "agenda clásica". Si bien la crisis del sector agrario puede concebirse un desencadenante de la protesta, su magnitud y alcance no hubiera sido posible sin el respaldo de procesos organizativos como Dignidad Agropecuaria, la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo y el Coordinador Nacional Agrario, los cuales aprovecharon las oportunidades políticas, articularon a su causa distintos actores sociales y políticos, y disputaron la construcción del sentido sobre los problemas del sector agrario	Pliego de peticiones del paro campesino	Aporta un análisis del paro campesino desde el estudio de "la agenda clásica".	No hay conexión entre paro campesino y cafetero a pesar de que sucedieron casi al tiempo
Pueblos, E.J. (2020). Esbozo de una radiografía política del paro en Colombia. Revista Cepa. Vol. 3 Núm. 30 (15): MovilizACCIÓN - Edición especial	2020	Marxista	Análisis cualitativo	Descontento generalizado de la población colombiana, con las políticas económicas y sociales del nuevo gobierno, que agravan cada vez más las condiciones de existencia y limitan el acceso a la educación o a la seguridad social de las clases populares; mismas que se producen a la par que se conceden una serie de prebendas tributarias a grandes empresarios bajo la promesa de la generación de	Pliego peticiones paro nacional 2020	Aporta un análisis del Paro Nacional en Colombia del 2020	No hay un análisis profundo del mismo ni una vinculación teórica

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020

				nuevos empleos. Pero más allá de la disconformidad con políticas coyunturales, otras exigencias del pliego reflejan una creciente preocupación social por la relación problemática y destructiva entre las sociedades humanas y la naturaleza, de la cual deviene un cuestionamiento al modo en que se organiza y desarrolla la producción a nivel mundial.			
Amador-Baquiro, J. C., & Muñoz-González, G. (2021). Del alteractivismo al estallido social: acción juvenil colectiva y conectiva (2011 y 2019). Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(1), 1-28.	2021	Marxista	Análisis cualitativo	Se analiza la participación de los jóvenes en los movimientos alteractivistas de 2011 y los estallidos sociales de 2019, quienes, al parecer, han sido protagonistas de nuevas formas de acción colectiva y conectiva	Importante: concepto alteractivismo	Aporta el concepto de alteractivismo para explicar el ciclo de protestas del 2010-2020	No hay una profundización en la cuestión del modelo de desarrollo
Giraldo, H. y De la Cruz, G. (2016) La influencia neoliberal en las políticas educativas en Colombia. in Revista Criterio Libre Juridico. Revistas Unilibre.	2016	Estructuralista	Análisis cualitativo	Muestra que el diseño de las políticas educativas en Colombia en las últimas décadas ha sido producto de una tensión permanente entre el Estado Colombiano y la federación colombiana de educadores FECODE, concebidas en el marco de una confrontación política producto de dos visiones de la educación, una visión estatal que propugna por una neoliberalización, mercantilización y privatización de la educación y una defensa del Estado garantista de bienestar social por parte de FECODE	Importante: mercantilización educación	Aporta teoría sobre la neoliberalización de la educación en Colombia	No hay mención a las cifras por cobertura o calidad y el impacto del modelo en ellas
Caicedo, J. (2020). El sistema neoliberal de salud de Colombia. Revista Cepa	2020	Marxista	Análisis cualitativo	Introduce la estructura del sistema de salud colombiano legislado por medio de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1751 de 2015. Segundo, se pregunta sobre la relación entre la legalidad y la realidad de las partes del sistema en estos tiempos de pandemia.	Importante: ley 100 y EPS	Aporta información sobre el funcionamiento del sistema de salud colombiano	No hay profundización en las consecuencias para la legitimidad
Archila, Mauricio. (2019). Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia, 1975-2015	2019	Estructuralista-TER	Análisis cuantitativo	Archila abre el trabajo temático enfocando lo que él llama la «trayectoria gruesa» de los actores sociales para desglosarla, en seguida, por «actores,	Importante la elaboración de gráficas por motivaciones	Aporta la comprensión de las luchas sociales en Colombia de forma cíclica	No hay mayor vinculación con el modelo de desarrollo

				<p>motivos, adversarios, modalidades y distribución espacial». Sus gráficas y sus mapas agregan valor a su análisis. Así, se ofrece al estudioso lector una estupenda visión panorámica de las relaciones entre un Estado de Derecho que no llega nunca a concretarse fuera del papel, razón por la cual, la gráfica gruesa de la protesta adopta la forma de U, en donde tanto la depresión como el aumento de las manifestaciones se explica, o bien por las ilusiones creadas con promesas que no se cumplen, o bien por la política represiva de un Estado fallido que después de medio siglo de «estado de sitio» no logra salvar al Derecho de la corrupción de la justicia, pero, en cambio posee una Policía cada año más eficaz en el amedrentamiento.</p>			
<p>Cortés, Francisco. (2003). Neoliberalismo, globalización y pobreza. Biblioteca Clacso.</p>	2003	Estructuralista	Análisis cualitativo	<p>el modelo de desarrollo económico neoliberal ha sido utilizado en Colombia solamente en función de la protección de las estructuras tradicionales de poder y de los intereses de las minorías privilegiadas, y que ha servido así para reproducir y mantener excluidas de la participación económica, social y política a amplias masas de la población</p>	Neoliberalismo y pobreza	Aporta un análisis del efecto neoliberal en los niveles de pobreza	No hay estadísticas robustas
<p>Del Campo, Esther; Guemes, Maria Cecilia; Paramio, Ludolfo. (2017). «I CAN'T GET NO SATISFACTION». SERVICIOS PÚBLICOS, DEMOCRACIA Y CLASES MEDIAS EN AMÉRICA LATINA. Ediciones Universidad de Salamanca</p>	2017	Institucionalista	Análisis cuantitativo	<p>identifica si el descontento con el desempeño del Estado fortalece o debilita la satisfacción con la democracia. Implementando modelos multinivel y regresión con datos de encuestas (Latinobarómetro 2011)</p>	Importante: teoría de Hirschman	Aporta un estudio sobre cómo la insatisfacción con los servicios públicos lleva a las sociedades de latam a protestar	No establece cuál es la relación por la que los servicios públicos pierden calidad (neoliberalismo)

¿El baile de los que sobran? Un estado del arte sobre los estudios del modelo de desarrollo neoliberal y su relación con la reaparición de la protesta social en Chile y Colombia 2010-2020